

MIGRACIONES FORZADAS

revista

número 66
marzo 2021

Salud mental y apoyo psicosocial

*Más dos secciones
especiales sobre:*
**Datos y desplazamiento
Migrantes desaparecidos**



CENTRO DE
ESTUDIOS
SOBRE
REFUGIADOS

MIGRACIONES FORZADAS

revista

La Revista Migraciones Forzadas

(RMF) pretende ser un foro de intercambio de experiencias, información e ideas entre investigadores, refugiados y desplazados internos, así como personas que trabajan con ellos. RMF se publica en inglés, español, árabe y francés por el Centro de Estudios sobre Refugiados.

Personal

Marion Coudrey y

Alice Philip (Editoras)

Maureen Schoenfeld (Asistente de Promoción y Financiación)

Sharon Ellis (Asistente)

Forced Migration Review

Refugee Studies Centre
Oxford Department of
International Development,
University of Oxford,
3 Mansfield Road,
Oxford OX1 3TB, UK.

fmr@qeh.ox.ac.uk

Tel: +44 (0)1865 281700

www.fmreview.org/es

Renuncia de responsabilidad:

Las opiniones vertidas en los artículos de RMF no reflejan las editoras o del RSC.



ISSN 1460-9819

Diseñado por:

Art24 www.art24.co.uk

Impresa por:

Oxuniprint

www.oxuniprint.co.uk



De las editoras

No esperábamos publicar todavía un nuevo número de RMF ante las restricciones por la COVID-19 ni dar la bienvenida al equipo a nuestra nueva coeditora Alice Philip ¡sin ni siquiera poder conocernos en persona! Pero gracias a la colaboración de nuestros autores y donantes, nos complace poder lanzar este último número con sus tres secciones.

La sección principal sobre **Salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS)** parece especialmente oportuna durante la actual pandemia, cuando las repercusiones del desplazamiento sobre la salud mental se ven dolorosamente agravadas por el impacto de la COVID-19. Los 13 artículos de esta sección analizan la importancia de la SMAPS y los retos inherentes a este ámbito, debaten las iniciativas de SMAPS y su aplicación en diferentes contextos, y abogan por reforzar la colaboración y el compromiso, y por nuevas formas de pensar.

Los autores de nuestra sección sobre **Datos y desplazamiento** debaten acerca de los recientes avances en la recopilación y el uso de datos, los retos que siguen existiendo y los nuevos enfoques, incluso frente a las restricciones impuestas por la pandemia.

A lo largo de sus peligrosos trayectos, un número indeterminado de migrantes muere o desaparece, y sus familias a menudo quedan en una especie de limbo. En nuestra sección sobre **Migrantes desaparecidos**, los autores analizan iniciativas para mejorar la recopilación y el intercambio de datos, la identificación de los restos mortales y la asistencia a las familias que quedan atrás.

Nos gustaría agradecer a Alastair Ager, Julia Black, Kate Dearden, James Eaton-Lee, Matthew Gibney, Rachel Hastie, Maurice Herson, Maryanne Loughry y Domenico Tabasso por su ayuda en este número, y también a todos aquellos que han aportado ayuda financiera para este número en particular y para RMF en general. En la siguiente página hacemos mención y otorgamos nuestro reconocimiento a nuestros donantes que nos proveen de financiación.

Esta revista y el Informe editorial que la acompaña se encuentran disponibles en línea y en versión impresa en www.fmreview.org/es/edicion66. Este número estará disponible también en árabe y español. Lamentablemente, la falta de financiación nos impide publicarlo en francés.

Próximas ediciones: Nuestro próximo número incluirá una sección principal sobre salud pública y WASH; y otra más breve sobre los Estados no signatarios y el régimen internacional de los refugiados. Si desea conocer más detalles, consulte www.fmreview.org/es/proximas-ediciones.

Saludos cordiales,

Marion Coudrey y Alice Philip

Editoras, Revista Migraciones Forzadas

Portada:

Rose Sakouma y otra persona miembro de la asociación Women Standing de Begoua, República Centroafricana, se dan la mano. Cuando comenzaron los ataques en su zona, huyó con sus hijas y nietos: "Estaba traumatizada, viendo asesinatos, balas y machetes, cabezas cortadas y gente estrangulada. Mi marido fue asesinado en la huida. Si no fuera por Women Standing, yo no estaría viva hoy. Cuando nos reunimos, nos consolamos mutuamente".

ACNUR/Adrienne Surprenant



Salud mental y apoyo psicosocial

- 4 **Prólogo: No hay salud sin salud mental**
Sigrid Kaag
- 5 **Tensiones creativas en el marco de la SMAPS**
Alastair Ager
- 8 **La implicación de los agentes de protección en la SMAPS: la necesidad de una cooperación intersectorial**
Sarah Harrison, William S Chemaly, Fahmy Hanna, Nancy Polutan-Teulières y Peter Ventevogel
- 12 **Salud mental y apoyo psicosocial en entornos urbanos en Egipto**
Nancy Baron
- 15 **El sesgo cultural y la SMAPS**
Joanne Michelle F Ocampo, Mhd Nour Audi y Mike Wessells
- 17 **La importancia del bienestar docente para la salud mental de los alumnos y los sistemas educativos resilientes**
Danielle Falk, Paul Frisoli y Emily Varni
- 21 **Una SMAPS sensible con la fe para los profesionales humanitarios**
Leonie Harsch, Corrie van der Ven y Olivia Wilkinson
- 24 **La fe y la SMAPS entre las desplazadas musulmanas**
Kathleen Rutledge, Sandra Iman Pertek, Mohammad Abo-Hilal y Atallah Fitzgibbon
- 27 **El papel y las responsabilidades de los mediadores culturales**
Emilie Venables, Katherine Whitehouse, Caterina Spissu, Lilian Pizzi, Ahmad Al Rousan y Stefano di Carlo
- 29 **La violencia de género y la salud mental entre las mujeres refugiadas y de la comunidad de acogida en el Líbano**
Alina Potts, Rassil Barada y Angela Bourassa
- 31 **Enfoques comunitarios de la SMAPS**
Dmytro Nersisian, Marine Ragueneau, Heide Rieder y Guglielmo Schinina'
- 34 **Actividad física, salud mental y apoyo psicosocial**
Simon Rosenbaum, Alastair Ager, Leslie Snider, Ajwang Warria, Holly Collison, Sabrina Hermosilla y Davy Vancampfort

- 38 **Del lugar al espacio: reflexión sobre la adaptación en los campos de los espacios adaptados a los niños durante la COVID-19**
Janna Metzler, Aimyleen Gabriel, Frieda Mwebe y Kevin Savage

Datos y desplazamiento

- 42 **Datos y pruebas sobre el desplazamiento forzado: reflexiones sobre los avances y los retos**
Ewen Macleod
- 46 **La alineación de las encuestas humanitarias con las normas estadísticas internacionales**
Felix Schmieding
- 48 **Incluir a los refugiados y desplazados internos en los sistemas nacionales de datos**
Natalia Krynsky Baal
- 51 **Escollos y potencial de las encuestas telefónicas de alta frecuencia durante la COVID-19**
Jeffery C Tanner

Migrantes desaparecidos

- 54 **Medir las muertes y las desapariciones de migrantes**
Andrea Garcia Borja y Julia Black
- 57 **Cómo afrontar los retos del intercambio de datos sobre el ADN**
Sara H Katsanis, Diana Madden, Courtney C Siegert, Eduardo Canales y Kate Spradley
- 60 **¿Qué pasa con los que se quedan atrás?**
Marta Sánchez Dionis y Kate Dearden
- 62 **La búsqueda de la verdad, la justicia y el pasar página durante la pandemia**
Danai Angeli
- 65 **Los migrantes desaparecidos y sus familias: un llamamiento a una mayor cooperación internacional**
Sylvie van Lammeren y Florian von König
- 68 **Pérdida, esperanza, acción**
Imed Soltani, Odessa Gonzalez Benson y Vadim Besprozvaný

¡Gracias!

RMF depende de la financiación externa para todos los aspectos de su labor. Algunas fuentes de financiación nos aportan los recursos básicos sobre los que se sustenta nuestro trabajo; otras sirven para sufragar números específicos de la revista; y otras son más de tipo individual: lectores y autores que quieren apoyar la labor de RMF.

Queremos agradecer a las siguientes personas y entidades su contribución a RMF 66: ACT Alliance/Kerk in Actie • GxJ Lab at Lurie Children's • IFRC Psychosocial Centre • IOM's Global Migration Data Analysis Centre • Scientia A/Prof Simon Rosenbaum, UNSW Sydney • Swiss Federal Department of Foreign Affairs • Tufts University School of Medicine • World Vision UK

También nos gustaría dar las gracias a: ADRA International • Australian Research Council • Catholic Relief Services - USCCB • Danish Refugee Council • European Research Council (Horizon 2020 award, grant number 716968) • Government of the Principality of Liechtenstein • International Committee of the Red Cross • International Organization for Migration • Jesuit Refugee Service • Luxembourg Ministry of Foreign and European Affairs • Oxfam • Rosa Luxemburg Stiftung • UNHCR • Women's Refugee Commission • World Bank-UNHCR Joint Data Center on Forced Displacement

Prólogo: No hay salud sin salud mental

Sigríð Kaag

La salud mental y el apoyo psicosocial son vitales para nuestro bienestar individual y colectivo, especialmente ahora.

“No hay salud sin salud mental”. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, reiteró¹ este sencillo pero poderoso mensaje en mayo de 2020. En un oportuno esfuerzo por hacer sonar la alarma, advirtió que era muy probable que se produjera un aumento mundial de la prevalencia y la gravedad de los problemas de salud mental como consecuencia de la COVID-19; y que era necesario actuar con urgencia y financiar medidas para hacer frente al devastador impacto de la pandemia sobre el acceso a los servicios de salud mental.

Según una encuesta² de la OMS realizada en octubre de 2020, la COVID-19 había interrumpido parcialmente los servicios de salud mental en el 93 % de los países del mundo, en un momento en que su demanda está aumentando. La salud mental y el apoyo psicosocial (SMAPS) son vitales para nuestro bienestar individual y colectivo, especialmente ahora. La SMAPS es más crucial si cabe para los más vulnerables que viven marginados de la sociedad: personas que han sido golpeadas por un conflicto o un desastre y que han sido desplazadas forzosas; o se encuentran en tránsito. Muchas de ellas ya han perdido sus hogares, comunidades, seres queridos y medios de vida. La pandemia agrava aún más su malestar psicológico y sus precarias circunstancias.

Los Países Bajos abogan firmemente por el reconocimiento de la importancia de la SMAPS para las personas y comunidades afectadas por las crisis, y se han comprometido a garantizar un enfoque que incluya la SMAPS en todos los esfuerzos humanitarios, así como en los programas de prevención de conflictos y consolidación de la paz³. En conjunto con otros países y organizaciones humanitarias afines, estamos haciendo progresos. Al final, en los últimos años, se ha designado la SMAPS como una prioridad en la agenda internacional. De hecho, en 2019, se alcanzaron importantes acuerdos sobre la inclusión de la SMAPS como parte de cualquier respuesta humanitaria, con la conferencia Mind the Mind Now y su Declaración de la Conferencia de Ámsterdam⁴ por la que una coalición de 28 países y 10

organizaciones se comprometió a abordar las necesidades de salud mental y psicosociales de las personas afectadas por emergencias.

Como parte inherente, será necesario:

- Promover la integración de la SMAPS en todas las respuestas a las crisis desde el principio.
- Incorporar competencias psicosociales básicas a la formación de todos y cada uno de los trabajadores humanitarios.
- Prestar atención al bienestar psicosocial del personal humanitario, de los equipos de respuesta iniciales y de los voluntarios.

Estos principios ocupan un lugar destacado en la agenda del Grupo de Referencia sobre SMAPS⁵ del IASC, y también aparecen reflejados en la resolución de diciembre de 2019⁶ del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que pide la integración de la SMAPS en todos los aspectos de su respuesta de emergencia.

Sin embargo, aunque se han dado pasos importantes, necesitamos urgentemente aumentar nuestras inversiones debido a los crecientes niveles de mala salud mental, tanto en financiación como en esfuerzos políticos y normativos y en el desarrollo de recursos humanos. En diciembre de 2020, en una reunión de alto nivel⁷ que tuvo lugar durante la Semana Humanitaria, diversas agencias humanitarias de la ONU hicieron un llamamiento conjunto a la acción, e instaron a las partes a cumplir con los compromisos anteriores de proporcionar una SMAPS transversal⁸ que cubra las necesidades de las personas afectadas por emergencias. En enero de 2021, el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud adoptó una resolución sobre la preparación y respuesta en materia de salud mental para las emergencias de salud pública⁹. En la misma pedía a la Asamblea Mundial de la Salud 2021 que ratificara el plan de acción sobre salud mental actualizado, a los Estados miembros que le asignaran una financiación adecuada y a la OMS que reforzara sus competencias en el ámbito de la salud mental.

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

La SMAPS no es un lujo, una idea secundaria o una carga adicional, sino una herramienta efectiva, ya que ayuda a las personas, las familias y las comunidades a liberar su potencial de recuperación, mantener o recuperar su capacidad de resiliencia y su perspectiva, restaurar la cohesión social, retomar sus medios de vida y fomentar la reconciliación. Desbloquear este potencial a través de la SMAPS es fundamental para aliviar los efectos de los conflictos, los desastres naturales, el desplazamiento y las pandemias. Y puede hacerse, siempre que trabajemos en estrecha colaboración con las poblaciones afectadas, las organizaciones de base y los colectivos de la sociedad civil, y partamos y hagamos uso de la experiencia, la pericia y las herramientas existentes.

Agradezco mucho este número de Revista de Migraciones Forzadas dedicado a la SMAPS, tan relevante para los profesionales, los responsables de la formulación de políticas y los investigadores. Es una excelente puerta de entrada a un rico corpus de conocimiento y experiencia que debe ser difundido. Y hago un llamamiento a todos los Gobiernos y actores humanitarios para que trabajen en

colaboración y reafirmen su compromiso para abordar las necesidades de salud mental de las personas desplazadas en todo el mundo y aprovechar todo el potencial de la SMAPS. Porque la SMAPS ayuda a mantener nuestras mentes y nuestras sociedades en paz.

Sigrid Kaag

Ministra de Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo del Reino de los Países Bajos
MHPSS@minbuza.nl

1. bit.ly/Guterres-mental-health-covid-video
2. OMS (2020) *The impact of COVID-19 on mental, neurological and substance use services: results of a rapid assessment* www.who.int/publications/i/item/978924012455
3. Ver “Enhanced Integration of MHPSS & Peacebuilding”, octubre de 2020 bit.ly/MHPSS-peacebuilding-video-Oct2020
4. International Conference on Mental Health and Psychosocial Support in Crisis Situations (Conferencia internacional sobre salud mental y apoyo psicosocial en situaciones de crisis) - Ámsterdam, 7 y 8 de octubre de 2019 bit.ly/Netherlands-MHPSS-conference-Oct2019; Declaración de Ámsterdam bit.ly/Amsterdam-Declaration-Oct2019
5. bit.ly/IASC-MHPSS
6. bit.ly/RCRC-MHPSS-Resolution-Dec2020
7. Ver bit.ly/high-level-MHPSS-crises-Dec2020-video
8. bit.ly/IASC-MHPSS-CallForAction-Dec2020
9. OMS (2021) *Promoting mental health preparedness and response for public health emergencies* [https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB148/B148\(3\)-en.pdf](https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB148/B148(3)-en.pdf)

Tensiones creativas en el marco de la SMAPS

Alastair Ager

Las tensiones y los retos del desarrollo durante las últimas décadas del campo de actuación conocido actualmente como salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS) seguirán definiendo cuestiones relacionadas con su implementación, priorización e impacto.

Según he podido analizar, fue Hertha Kraus la primera en emplear el término “psicosocial” en el contexto de la migración forzada en un número especial de 1939 de la publicación *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*¹. Su artículo abordaba el origen del estrés de aquellas personas que eran reasentadas en “un país extraño” y constató su carácter psicológico y social, más allá de los estresores legales, políticos y económicos que otros autores tenían en cuenta.

Sin embargo, el uso de dicho término no se generalizó sobre el terreno hasta la década de 1990. Barbara Harrell-Bond había dedicado un capítulo de su clásico de 1986 *Imposing Aid* sobre “el concepto de sujeto supersocializado” en el que criticaba que el personal humanitario sobre el terreno hubiera obviado la experiencia psicológica del desplazamiento forzado. En

1993, me pidió que elaborara un estudio sobre la cuestión de la salud mental de los refugiados para el informe de Harvard *Global Mental Health*². Sin embargo, solo hacía referencia de pasada al concepto psicosocial, principalmente aludiendo al contexto social y cultural general que conforma la salud mental de los refugiados.

Una sutil alusión no bastaba para abordar las ramificaciones que se desarrollarían en este incipiente campo durante esa década. El genocidio de Ruanda y, sobre todo, las guerras que siguieron a la disolución de la antigua Yugoslavia introdujeron el lado humano de los conflictos y los desplazamientos en la conciencia pública y en la respuesta humanitaria. Pero el abordaje de los problemas de salud mental en poblaciones sujetas a la persecución étnico-política también hizo aflorar fuertes tensiones entre las respuestas

psiquiátricas normativas y otros enfoques más amplios basados en la comunidad³. Derek Summerfield y Pat Bracken fueron especialmente críticos con la imposición de los marcos patológicos occidentales a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y de la opresión. Una reunión organizada a finales de la década de los 90 por la Cruz Roja Americana con el fin de valorar unos medios de respuesta adecuados reveló la existencia de facciones dispares con fuertes posturas ideológicas y metodológicas. Varios de los colectivos asistentes observaron “una falta de consenso con respecto a los objetivos, estrategias y repercusiones”.

Generar un consenso

Como consecuencia, en el año 2000, Carolyn Makinson reunió a varias de las principales ONG internacionales que trabajan en esta área y a cuerpos académicos de instituciones que habían participado en los enfoques emergentes y formó un Grupo de Trabajo Psicosocial para desarrollar un marco común acerca de este ámbito⁴. El grupo sugirió que las intervenciones psicosociales se definieran por un interés en el capital humano (especialmente con relación a las repercusiones de las enfermedades mentales sobre el bienestar individual), en la ecología social (en lo que respecta a las relaciones y al tejido social ampliado que se han visto perturbados por la migración forzada), y en la cultura y los valores (especialmente la erosión de los derechos y las normas culturales). También se hizo énfasis en la interacción entre estos tres ámbitos. El principal desafío de la planificación de unas intervenciones adecuadas surgió al negociar la prestación de apoyo a una comunidad afectada en lo que respecta a estos tres ámbitos de manera que reflejara una auténtica alianza en lugar de una imposición neocolonial. En las presentaciones a los actores locales en el país, siempre fue la discusión de esta última cuestión la que recibió el mayor nivel de atención.

Posteriormente, se invitó a dos miembros de este grupo de trabajo, Mark Van Ommeren y Mike Wessells, a copresidir un proceso del Comité Permanente entre Organismos (IASC, por sus siglas en inglés) para la elaboración de lo que se convertiría en la *Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes*. Esta iniciativa guió un proceso que, más que en la teoría, se centró en la implementación a nivel práctico, y en la consulta local y nacional generalizada

para abordar las preocupaciones sobre la imposición que había marcado la década anterior. La guía, publicada en 2007⁵, consiguió ofrecer un marco que integraba distintas perspectivas disciplinares y era accesible de forma transparente para los diversos agentes, tanto locales como internacionales. Al hacerlo así, se consiguió paliar las graves tensiones sobre el terreno que, desde sus inicios, habían menoscabado la coherencia y la colaboración.

Un campo maduro con una base empírica

La guía se basaba en gran medida en las mejores prácticas emergentes, aunque se admitió que la base empírica sobre la que se sustentaba era débil en comparación. Aunque la posterior formulación de unas directrices complementarias para situaciones específicas (como el brote de ébola) fue importante, el avance más significativo en los siguientes años ha sido la recopilación de unos fundamentos mucho más sólidos, que incluyeron un importante ejercicio para establecer un plan de investigación por parte de Wietse Tol y sus compañeros⁶ donde se identificaban una serie de cuestiones prioritarias relacionadas con las modalidades de intervención; se trataba de enfoques basados en la familia y la escuela, métodos de evaluación e indicadores para el seguimiento y la valoración. Otros aspectos estaban relacionados con la identificación de estresores, problemas y factores de protección desde la perspectiva de las poblaciones afectadas, la adaptación sociocultural de las intervenciones y si estas abordan las necesidades identificadas a nivel local. El equipo que facilitó este ejercicio de consenso observó que el plan incidía en “la generación de conocimientos prácticos que pudieran traducirse en beneficios tangibles inmediatos para los programas en entornos humanitarios, en vez de abordar los debates clave que han predominado en la literatura académica”. Aunque esto fuera cierto, las preguntas de estos dos grupos de investigación, en cierto sentido, reflejan una de las principales tensiones en el marco de la salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS): el primer grupo insiste en identificar intervenciones, medidas e indicadores para los programas que sean efectivos y generalizables, mientras que el segundo hace hincapié en la necesidad de una contextualización.

Gracias al constante apoyo a los estudios de investigación en el área a través de programas como el R2HC de Elrha⁷, la SMAPS pasó de ser una de las áreas de acción humanitaria

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

con menos respaldo en cuestiones de evidencia a ser una de las que más tenían. Gran parte del trabajo se ha centrado en documentar el impacto de los enfoques de intervención específicos que se aplican actualmente a gran escala, como las actividades estructuradas dentro de los Espacios Adaptados a los Niños, o aquellos que pueden ser extensibles, como el programa de atención psicológica Problem Management Plus (PM+). Este trabajo ha realizado una gran contribución al objetivo de identificar enfoques programáticos con impacto, pero también se señala la importancia de ajustarse a los distintos contextos a los que deben adaptarse esas intervenciones. Así, este campo ha madurado hasta el punto de centrarse en el perfeccionamiento y el fortalecimiento de las intervenciones probadas, o en la búsqueda de modalidades más efectivas o eficientes para su ejecución.

Tensiones creativas

Si, a partir de la agitación de los años 90, el campo se formó en la década del 2000 y maduró en la del 2010, ¿qué perspectivas le aguardan para la próxima década? Por lo que respecta a la investigación, se está llevando a cabo un nuevo ejercicio para establecer un plan de investigación con el apoyo de varios organismos donantes y organizaciones intergubernamentales, lo que pone de manifiesto el puesto que la SMAPS se ha asegurado en la estrategia humanitaria. Se trata de un ejercicio de formación de consenso en el que participan diversas partes interesadas, tanto a nivel nacional como internacional, cuyo resultado no se conocerá hasta bien entrado el año 2021. Sin embargo, hay al menos tres cuestiones que parece que se van a derivar del ejercicio y que seguirán ocupando a profesionales e investigadores por igual durante la próxima década.

Escalada, fidelidad y adaptación contextual: El reto de equilibrar el desarrollo de intervenciones generalizables y efectivas con la necesidad de adaptación cultural y sensibilidad hacia los planes de los actores locales seguirá siendo una característica clave, cuando no la principal, de esta labor durante algún tiempo. Se trata de una tarea importante que refleja el constante reto al que se enfrenta la SMAPS para combinar la generalización a nivel técnico con la comprensión y el compromiso contextual; y para hacer que las intervenciones sean escalables y puedan acceder a ellas una proporción mucho mayor de comunidades afectadas, mientras

que se mantiene fiel a los componentes activos de las intervenciones de eficacia probada. Sin embargo, hay algunos ejemplos recientes muy prometedores de que la adaptación contextual se considera una tarea que debe emprenderse más como un proceso gradual que como una ambición vagamente declarada.

Aliviar el sufrimiento o impulsar un cambio a largo plazo: Las evaluaciones que han analizado las repercusiones a largo plazo de las intervenciones psicosociales con frecuencia no hallan beneficios importantes para quienes participan en los programas en comparación con los que no reciben intervenciones⁸. Normalmente, estos hallazgos no se deben a una “caída” del bienestar de aquellos que ya han asistido al programa, sino que más bien se derivan de los que no asistieron y que consiguieron “ponerse al día” en términos de adaptación. A pesar de los beneficios a corto plazo que se observan, en ocasiones se notifica que la intervención no tiene ningún impacto. Esto plantea la cuestión de si el objetivo principal de los programas psicosociales debería ser aliviar el sufrimiento o configurar trayectorias de adaptación a largo plazo. Las promesas de beneficios a largo plazo podrían traducirse en un arraigo excesivo hacia una narrativa basada en la resiliencia a largo plazo en vez de por una narrativa basada en el alivio del sufrimiento. Creo que la postura de las intervenciones psicosociales en su apoyo a las poblaciones con problemas, más que demostrar unos beneficios a largo plazo, puede establecerse útilmente como expectativa de base para el campo. Esto no quiere decir que no se puedan obtener beneficios a largo plazo, pero podría ser conveniente que las intervenciones psicosociales se juzgaran de la misma manera que se juzgan principalmente las intervenciones en materia de alimentos, alojamiento y la mayoría de las intervenciones sanitarias, es decir, en función del alivio del sufrimiento y del riesgo de las poblaciones afectadas durante una emergencia, más que en función de las trayectorias a largo plazo de la seguridad alimentaria, el asentamiento o el bienestar físico.

Intervención focalizada frente a estrategia de participación: Por último, preveo que continuarán los debates sobre la prioridad relativa de los programas focalizados de intervención en la SMAPS —como el abordaje de los trastornos mentales graves y las

consecuencias de la violencia de género— así como las estrategias de participación comunitaria más amplias que promueven el albedrío, la apropiación y la consolidación de la paz. No obstante, podemos anticipar el desarrollo de un marco más claro y de unas teorías de cambio que vinculen entre sí estas diferentes formas de trabajo. La amplitud de las influencias sobre el bienestar que se reflejan en los enfoques basados en la comunidad quedó reconocida en el uso inicial del término por parte de Kraus para describir las fuerzas que dan forma a la experiencia del refugiado que se reasienta y, en gran parte, de la literatura posterior; el valor de las intervenciones focalizadas y dirigidas a una población específica que abordan los trastornos psicológicos y emocionales también viene ahora respaldado por una rica documentación al respecto.

Alastair Ager aager@qmu.ac.uk @AlastairAger
Institute for Global Health and Development,
Universidad Queen Margaret; Mailman School of
Public Health, Universidad de Columbia.

1. Kraus H (1939) "Starting Life Anew in a Strange Country", *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 203 www.jstor.org/stable/1021890
2. Ager A (1993) "Mental health in refugee populations: A review", Programa de Estudios sobre Refugiados, Universidad de Oxford, para el Project on International Mental and Behavioral Health, Harvard. <http://fmo.bodleian.ox.ac.uk:8080/fedora/get/fmo:1082/PDF>
3. Ager A (1997) "Tensions in the psychosocial discourse: implications for the planning of interventions with war-affected populations", *Development in Practice* 7 (4) www.jstor.org/stable/4029006?seq=1
4. Grupo de Trabajo Psicosocial (2002) *Psychosocial Intervention in Complex Emergencies: a Conceptual Framework* bit.ly/PWC-conceptual-framework-2002
5. IASC (2007) *Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes* bit.ly/IASC-MHPSS-guidelines-sp
6. Tol W et al (2011) "Research Priorities for Mental Health and Psychosocial Support in Humanitarian Settings" *PLoS Med* 8(9): e1001096 <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001096>
7. Tol W et al (2020) "Improving mental health and psychosocial wellbeing in humanitarian settings: reflections on research funded through R2HC", *Conflict and Health* 14 <https://doi.org/10.1186/s13031-020-00317-6>
8. Panter-Brick C, Dajani R, Eggerman M, Hermosilla S, Sancilio A y Ager A (2017) "Insecurity, distress and mental health: experimental and randomized controlled trials of a psychosocial intervention for youth affected by the Syrian crisis" *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 59 <https://doi.org/10.1111/jcpp.12832>

La implicación de los agentes de protección en la SMAPS: la necesidad de una cooperación intersectorial

Sarah Harrison, William S Chemaly, Fahmy Hanna, Nancy Polutan-Teulières y Peter Ventevogel

Para fomentar la salud mental y el bienestar psicosocial—dentro de una respuesta protectora integral— de las personas afectadas por las emergencias humanitarias se requiere de la acción y coordinación multisectorial.

Muchas personas que viven en zonas afectadas por la violencia y el conflicto sufren secuelas en lo que respecta a su salud mental, y una de cada cinco desarrolla enfermedades relacionadas, una cifra mucho más alta que en las poblaciones no afectadas por conflictos¹. Las personas afectadas pueden requerir apoyo psicosocial específico o servicios clínicos de salud mental y psicológica. Sin embargo, lo primero y más importante es que necesitan contar con redes comunitarias de apoyo y tener cubiertas sus necesidades básicas y de seguridad de forma que se preserve su dignidad y su voluntad, y sus derechos sean respetados.

A lo largo de la última década, el apoyo a la salud mental y el bienestar psicosocial de las personas afectadas por conflictos, desastres y emergencias de salud pública

se ha reconocido como una parte vital de la respuesta humanitaria². La *Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes* de 2007 posiciona la SMAPS como un campo interdisciplinario que requiere de un planteamiento basado en la colaboración entre múltiples disciplinas humanitarias³. En 2019, el liderazgo mundial para la respuesta humanitaria (los máximos responsables del IASC) reafirmaron su decisión de "tratar la SMAPS como una cuestión transversal con relevancia dentro de los sectores/grupos temáticos sobre salud, protección, nutrición, educación y del Cluster de coordinación y gestión de campos, en todas las emergencias"⁴.

Los programas humanitarios tienden a centrarse en un sector específico, pero las

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

personas, las familias y las comunidades en situaciones de emergencia suelen presentar múltiples problemas y necesidades que van más allá de las definiciones sectoriales. Desde 2007, se están desarrollando sólidas herramientas técnicas para intervenciones específicas de SMAPS en áreas como la salud, la nutrición, la educación, la violencia de género y la protección de la infancia. Pero es necesario que la respuesta humanitaria en su conjunto adopte un enfoque basado en la SMAPS. Esto implica que se ofrezca una ayuda humanitaria que respalde la salud mental y el bienestar psicosocial de las personas de interés, aun cuando el objetivo principal de la intervención sea sectorial. En resumen, la promoción y la protección del bienestar psicológico (salud mental positiva) y la prestación de servicios de SMAPS deben estar firmemente integradas en cada sector y se deben prestar de forma intersectorial.

Objetivos, recursos y estructura

Para abordar la SMAPS, se requiere de un espacio claramente definido en el seno de las estructuras de coordinación humanitaria. Los máximos responsables del IASC acordaron en su reunión de 2019 “reflejar los indicadores de SMAPS en los documentos de planificación pertinentes y establecer líneas presupuestarias específicas, así como códigos específicos de SMAPS dentro de los sistemas de seguimiento financiero, y respaldar la creación de grupos de trabajo sobre SMAPS y su labor a nivel nacional en todos los contextos de migración, refugiados y humanitarios como grupos transversales”.

Las agencias de la ONU reafirmaron recientemente estas decisiones en su Llamamiento Interinstitucional Conjunto a la Acción⁵.

En la actualidad, hay 50 grupos de trabajo multisectoriales de SMAPS activos en entornos humanitarios, que sirven como plataformas en las que las agencias que participan en la programación de SMAPS pueden debatir sobre cuestiones relacionadas. Se trata de foros técnicos que funcionan en todos los grupos temáticos y

sectores —y que les aportan coordinadores cuando procede—, pero que no sustituyen su papel de manera que cada uno continúa responsabilizándose de sus actividades y de la comunicación. Los actores implicados en la SMAPS han de decidir la configuración exacta y el liderazgo conjunto en el plano nacional, pero lo ideal es que los grupos de trabajo en SMAPS sean copresididos por una agencia relacionada con el ámbito de la salud y otro de protección para llegar a un equilibrio entre unos enfoques que son diversos y complementarios.

Integrar los enfoques de SMAPS basados en la comunidad en otros sectores a menudo implica trabajar de forma diferente en lugar de asumir nuevas tareas: seguir proveyendo de los servicios existentes de una manera eficaz (centrándose en la dignidad, la voluntad y la participación de las poblaciones afectadas) en vez de exigir el desarrollo de “programas psicosociales” independientes⁶.

Un entorno de protección

Uno de los cuatro principios de protección del Manual Esfera es “ayudar a las personas a recuperarse de los efectos físicos y psicológicos de la violencia real o la amenaza de violencia, la coerción o la privación deliberada”⁷. Por tanto, es fundamental que todos los actores humanitarios presten atención a las consecuencias psicológicas de las violaciones de los derechos humanos y al hecho de que los desplazamientos forzados afectan a las personas de manera diferente según su edad, género y diversidad. Sin un entorno de protección es imposible abordar



ACNUR/Will Swanson

Desplazados internos sursudaneses en el centro de Protección de Civiles cerca de Malakal, en el Alto Nilo, representan una obra de teatro que aborda cuestiones como el suicidio y la desesperanza.

las necesidades de SMAPS de las personas, familias y comunidades afectadas. La capacidad de las personas y las familias de actuar para reclamar sus derechos se ve perjudicada por la desmoralización generalizada, la depresión y la ansiedad, los recuerdos relacionados con episodios violentos del pasado y con pérdidas, por la preocupación por las circunstancias actuales en que viven y por el futuro.

Los problemas de protección pueden causar o agravar las enfermedades relacionadas con la SMAPS y, del mismo modo, esas afecciones pueden causar o agravar problemas de protección. En los contextos de emergencia, a menudo se vulneran derechos de las personas con enfermedades mentales graves, incluso de forma más generalizada que en situaciones de estabilidad. La capacidad de las personas y de las familias de emprender acciones para reclamar sus derechos se ve afectada negativamente por las consecuencias psicosociales y de salud mental de los conflictos, la violencia y los desastres. Abordar estas consecuencias contribuye a la protección reforzando la capacidad de las personas de tratar eficazmente sus problemas de protección.

Los agentes de protección han de entender el impacto de las características interrelacionadas de la población afectada, y prestar especial atención a las cuestiones transversales y a la continuidad de la atención a lo largo de la vida de cada persona. Así, pueden reforzar la SMAPS en su labor a través de:

- La mejora de las intervenciones de SMAPS para llegar a todos los grupos de población afectados.
- La inclusión de la SMAPS en todo el abanico de programas de protección.
- El establecimiento de mecanismos de derivación con los agentes de la SMAPS en otros sectores.
- La promoción de la creación de grupos de trabajo intersectoriales de SMAPS.
- El fomento del uso de indicadores de resultados de la SMAPS en programas de protección⁸.
- La promoción del trabajo y el fomento de la ampliación de las Zonas de Responsabilidad (dentro del Grupo Temático Mundial sobre Protección) que han incorporado sistemáticamente la SMAPS a sus programas, especialmente en cuanto a protección de la infancia, violencia de género y acción contra las minas.

- La promoción de la inclusión de la SMAPS en asistencia individualizada para la protección de personas y familias en riesgo, mediante la formación, por ejemplo, de los asistentes en habilidades psicosociales básicas.
- El establecimiento de la SMAPS como un punto permanente del orden del día de las reuniones del grupo temático de protección y de las reuniones de coordinación intersectoriales.
- La defensa de la SMAPS como una cuestión transversal en la respuesta humanitaria y en el ciclo de programas humanitarios, como los Planes de Respuesta Humanitaria y de Respuesta a los Refugiados, y en el Panorama de las Necesidades Humanitarias.

La inversión en desarrollo y las respuestas locales

Invertir en servicios de SMAPS no solo contribuye a reducir el sufrimiento de las personas en contextos humanitarios (lo que ya de por sí sería razón suficiente para hacerlo), sino que también fomenta y contribuye a la cohesión social, la paz y la reconstrucción de las sociedades a largo plazo⁹. Esto requiere, desde el inicio de una emergencia, una visión a largo plazo para contribuir a la creación de unas estructuras sostenibles. Los agentes de protección y las partes interesadas pertinentes deberían fomentar la participación de los agentes de desarrollo en la respuesta para garantizar que la acción humanitaria y la de desarrollo se complementen mutuamente. Esto a menudo significa abogar ante los ministerios de Finanzas o Planificación por una asignación presupuestaria a largo plazo para respaldar la salud y el bienestar psicológico de las personas que viven en sus territorios. Abordar las consecuencias para la salud mental de los desplazamientos forzados contribuye a las soluciones duraderas; y la inclusión de planteamientos relacionados con la SMAPS en las actividades en favor de soluciones duraderas aumenta su efectividad para ayudar a las poblaciones afectadas, a las comunidades de acogida y a las autoridades gubernamentales a gestionar y superar las consecuencias de los desplazamientos y los desastres.

Las ONG locales tienden a desempeñar un papel marginal en la coordinación. Pocos de los grupos de trabajo en SMAPS están copresididos por ONG locales. Hasta

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

donde sabemos, esto solo ha ocurrido en Bangladés (BRAC), Grecia (Babel), Nepal (TPO Nepal) y Uganda (TPO Uganda). Sin embargo, sí que hay ministerios competentes del Gobierno ejerciendo la codirección en el apoyo de la prestación de servicios en las poblaciones afectadas a través de los sistemas nacionales en Afganistán, Egipto, el Líbano, el noreste de Nigeria, Níger, Turquía, Ucrania y Yemen (Adén).

Por ejemplo, en Afganistán, el grupo de trabajo sobre SMAPS está copresidido por el director de Salud Mental y Abuso de Sustancias del Ministerio de Salud Pública y por un miembro del personal nacional a tiempo completo de la ONG Acción contra el Hambre. Los programas y actividades de los organismos miembros del Grupo de Trabajo contribuyen a la aplicación de la estrategia nacional a cinco años de salud mental de Afganistán y a la creación de unos sistemas de salud mental, como la inclusión de esta en el Paquete Básico de Servicios Sanitarios y el Paquete Esencial de Servicios Hospitalarios. Estos paquetes los desarrolla el Ministerio de Salud Pública y son respaldados por una coalición de donantes. El Grupo de Trabajo también está vinculado al programa nacional de asistencia a las víctimas de las minas y a los agentes de protección en general, con indicadores específicos de SMAPS incluidos en los artículos sobre protección del Plan de Respuesta Humanitaria de Afganistán y del Panorama de las Necesidades Humanitarias de 2021.

Es imprescindible que actores locales como los miembros de la comunidad, voluntarios, líderes religiosos, líderes juveniles, los trabajadores sanitarios y sociales del distrito, el profesorado y los usuarios de los servicios, estén plenamente involucrados en el desarrollo y la implementación de las respuestas de SMAPS. Esta es la única estrategia viable para el cambio cultural, la sostenibilidad, la preparación y la continuidad del tratamiento y del apoyo cuando el acceso humanitario y logístico constituye un reto y la financiación es limitada.

Sarah Harrison

sahar@rodekors.dk @IFRC_PS_Centre

Centro de Referencia para la Prestación de Apoyo Psicosocial de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y antigua copresidenta del Grupo de Referencia para la Salud Mental y el Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias del IASC.

William S Chemaly

chemaly@unhcr.org @WilliamChemaly

Coordinador del Grupo Temático Mundial sobre Protección

Fahmy Hanna hannaf@who.int

Oficial Técnico, Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias, Organización Mundial de la Salud y copresidente del Grupo de Referencia para la Salud Mental y el Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias del IASC.

Nancy Polutan-Teulieres polutan@unhcr.org

Responsable de protección sénior, Grupo Temático Mundial sobre Protección

Peter Ventevogel

ventevog@unhcr.org @VentevogelPeter

Oficial Superior de Salud Mental, Sección de Salud Pública, División de Resiliencia y Búsqueda de Soluciones, ACNUR.

Los autores son los únicos responsables de las opiniones manifestadas en este artículo, que no necesariamente representan las opiniones, decisiones o políticas de las instituciones a las que están adscritos¹⁰.

1. Charlson F et al (2019) "New WHO prevalence estimates of mental disorders in conflict settings: a systematic review and meta-analysis", *The Lancet* 394 (10194) [bit.ly/Lancet-Charlson-et-al-2019](https://doi.org/10.1016/S0140-6838(19)31146-1)
2. Jones L y Ventevogel P (2021) "From Exception to the Norm: How Mental Health Interventions Became Part and Parcel of the Humanitarian Response", *World Psychiatry* 20(1); 2-3 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/wps.20808>
3. IASC (2007) *Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes* [bit.ly/IASC-MHPSS-guidelines-sp](https://www.unhcr.org/refworld/docid/3e6e6e6e.html)
4. Acta resumida y puntos de acción de la reunión de máximos responsables del IASC, Ginebra, 5 de diciembre de 2019 [bit.ly/IASC-Principals-meeting-05122019](https://www.unhcr.org/refworld/docid/3e6e6e6e.html)
5. Joint Inter-agency Call for Action on MHPSS 2020 [bit.ly/MHPSS-joint-interagency-call-2020](https://www.unhcr.org/refworld/docid/3e6e6e6e.html)
6. Horn R, Waade M y Kalisky M (2016) "Not doing more, but doing differently: integrating a community based psychosocial approach into other sectors", *Intervention* 14(3) [bit.ly/Horn-Waade-Kalisky-2016](https://doi.org/10.1080/17489639.2016.1191111)
7. [spherestandards.org/es/manual-2018/](https://www.sphrestandards.org/es/manual-2018/)
8. IASC (2017) Marco Común de Seguimiento y Evaluación para la Salud Mental y el Apoyo Psicosocial en Situaciones de Emergencia. [bit.ly/IASC-MHPSS-CommonMandEFramework-es](https://www.unhcr.org/refworld/docid/3e6e6e6e.html)
9. Tankink M and Bubenzer F (2017) "Building sustainable peace through an integrated approach to peacebuilding and mental health and psychosocial support: a literature review", *Intervention* 15(3) [bit.ly/Intervention-Tankink-Bubenzer-2017](https://doi.org/10.1080/17489639.2017.1348111)
10. Este artículo está basado en el documento de Harrison S, Hanna F, Ventevogel P, Polutan-Teulieres N y Chemaly WS (2020) *MHPSS and protection outcomes: Why joint action to improve mental health and psychosocial wellbeing of people affected by conflict, violence and disasters should be a priority for all protection actors*, Documento de Debate para la Formulación de Políticas, Grupo Temático Mundial sobre Protección y Grupo de Referencia para la Salud Mental y el Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias del IASC. [bit.ly/MHPSS-protection-outcomes-2020](https://www.unhcr.org/refworld/docid/3e6e6e6e.html)

Salud mental y apoyo psicosocial en entornos urbanos en Egipto

Nancy Baron

En contextos urbanos complicados, las organizaciones deben rediseñar los modelos de intervención de SMAPS establecidos para garantizar que los servicios sean accesibles a los más vulnerables y específicos para ese contexto. No puede simplemente limitarse a trasladar al contexto urbano intervenciones diseñadas para el campamento.

Los refugiados en Egipto, como los de todo el mundo, luchan por alcanzar una calidad de vida adecuada. Los solicitantes de asilo llegan a Egipto con la esperanza de que su estancia sea temporal, de que ACNUR se ocupe de ellos y de que les reasienten en un país occidental. Esta esperanza se reduce rápidamente. ACNUR y sus socios cuentan con recursos limitados y solo pueden dotar de ayudar económica a un pequeño porcentaje de personas vulnerables. Mientras tanto, cada año se reasienta a menos del 5 %.

Los Servicios Psicosociales e Instituto de Formación en El Cairo (PSTIC, por sus siglas en inglés) se centran en ayudar a las personas a descubrir qué pueden hacer para ser autosuficientes en lugar de lamentarse por la falta de recursos del sistema. Los PSTIC se dirigen a los más vulnerables de entre las personas inscritas en el registro de ACNUR, que incluye a personas sin hogar, hambrientas, enfermas e incapaces de ser autosuficientes; las que se enfrentan a la violencia de género, comunitaria o familiar; las que se sienten sobrepasadas por el peligro, la desolación y las experiencias traumáticas; las que son marginadas o rechazadas; y los enfermos crónicos, personas con discapacidad y que sufren de mala salud mental¹.

En su intento por asistir a las personas en resolver sus problemas, los trabajadores de esta organización les ayudan a gestionar sentimientos como creer que uno merece más de lo que tiene y más que los demás, la dependencia, la decepción y la ira. Los PSTIC se centran también en desarrollar la capacidad de autoayuda de las familias; por ejemplo, las actividades no están diseñadas solo para los niños, sino que buscan aumentar la capacidad de las familias de ayudar a sus propios hijos. Cuando no hay familia, o esta no puede dar apoyo, los PSTIC promueven

que las comunidades se responsabilicen de asistir a sus miembros más vulnerables.

“De la comunidad”

Los grupos de inmigrantes en contextos urbanos suelen establecer comunidades nacionales, tribales y religiosas que tienen sedes físicas con actividades regulares, miembros designados y líderes electos. Los equipos de los PSTIC son “de la comunidad” y, por tanto, pueden acceder a ella. Más de 160 de los 180 trabajadores de los PSTIC son refugiados, solicitantes de asilo o migrantes de las nacionalidades más representadas en Egipto: Eritrea, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur, Irak, Siria y Yemen. Los trabajadores viven en sus respectivas comunidades y conocen de primera mano los problemas, por lo que pueden ofrecer intervenciones prácticas acordes a la cultura y al contexto en las lenguas habladas allí.

Los PSTIC no sustituyen, sino que complementan, a los líderes comunitarios. Respetan la autoridad de los líderes electos y su influencia tradicional para resolver los problemas. Sin embargo, los trabajadores de los PSTIC sí cuentan con formación para gestionar una serie de cuestiones en las que a menudo los líderes comunitarios no tienen experiencia. Gracias al trabajo conjunto de los trabajadores de los PSTIC y los líderes comunitarios a lo largo del tiempo, estos últimos han adquirido una mayor comprensión y nuevas habilidades para gestionar las enfermedades mentales, el riesgo de suicidio, el abuso de sustancias, las necesidades de protección de la infancia y la protección de las mujeres. Ellos identifican a las personas en situación de necesidad y pueden asistirles de forma responsable o derivar los casos a los PSTIC y a otros proveedores de servicios.

Los trabajadores de los PSTIC son seleccionados en colaboración con sus comunidades urbanas. Muchos de ellos eran líderes comunitarios antes de incorporarse a los PSTIC. Conforman un equipo remunerado de refugiados formados para ofrecer apoyo a la SMAPS; no cuentan con oficinas y prestan asistencia mediante visitas a domicilio y a la comunidad con un enfoque basado en llevar el “despacho en una mochila”.

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

Estos trabajadores cuentan con escasa formación o experiencia previa en SMAPS. Antes de ser contratados, eran docentes, informáticos, abogados, agricultores, madres amas de casa o empleadas del hogar. Se les escoge por su personalidad, motivación, compasión y experiencia ayudando en sus comunidades, más que por su nivel educativo. Se les dan conocimientos esenciales y habilidades prácticas de apoyo psicosocial y se les ayuda a abrir su mente para que puedan asistir a cualquier persona necesitada sin discriminar. Aprenden ética profesional y a aplicar los derechos humanos básicos para dar apoyo equitativamente a mujeres, a niños y a personas con necesidades especiales, incluidas aquellas que tienen diferencias de género o identidad sexual.

Como refugiados, los trabajadores de los PSTIC han tenido pocas oportunidades en Egipto, por lo que la mayoría agradecen tener un trabajo que no solo les proporciona unos ingresos, sino que ayuda a las personas en situación de necesidad y también les hace ganarse el respeto de sus comunidades. Sin embargo, trabajar en los PSTIC puede suponer un desafío y ser agotador a nivel emocional. Aunque sea beneficioso, el modelo “de la comunidad” supone muchos retos. En ocasiones, los trabajadores de los PSTIC tienen que lidiar con conflictos entre la lealtad a la comunidad y la ética profesional. Los trabajadores están sujetos a una supervisión individual, reuniones de equipo semanales y sesiones mensuales de grupos de apoyo para compartir sus retos personales y profesionales. Con el fin de garantizar una total transparencia, las comunidades también tienen la oportunidad de presentar quejas sobre los trabajadores y los servicios a través de líneas de atención telefónica y reuniones comunitarias.

Los problemas de los ciudadanos no se limitan al horario habitual de atención al público, y los servicios deben prestarse cuando y donde se necesiten. Esto requiere la cooperación de los trabajadores y su aceptación de que será fundamental una respuesta 24 horas al día los 7 días de la semana. Con este modelo, es fundamental prestar mucha atención al cuidado del personal. Es importante que los trabajadores se sientan seguros si tienen que responder por la noche. En los PSTIC, ningún trabajador responde solo a una emergencia y se les ofrece apoyo emocional durante y después de la misma, además de elogiarles por el trabajo bien hecho.

La COVID-19 restringió temporalmente las actividades sobre el terreno de los trabajadores de los PSTIC y les obligó a prestar asistencia por teléfono, y a responder en persona solo en caso de emergencias que pusieran en peligro la vida de alguien. En el pico de la pandemia, los trabajadores de los PSTIC

solían llamar a la gente a diario, conscientes de lo estresados que estarían todos debido a la pérdida de control sobre su capacidad de ser autosuficientes, a la incertidumbre de la situación, al confinamiento en casa y a la pérdida de sus trabajos e ingresos. Poco a poco, los trabajadores de los PSTIC han podido volver a actuar sobre el terreno, tomando precauciones para minimizar el riesgo de infección. Los trabajadores llevan mascarillas y se ponen de acuerdo con las personas a las que visitan para que también las lleven durante sus sesiones en casa. Para los hogares en condiciones de hacinamiento, los trabajadores ofrecen ahora cierta ayuda en los centros comunitarios para refugiados.

Un enfoque de “ventanilla única”

Para satisfacer las necesidades de los más vulnerables, los PSTIC han aprendido que deben trabajar en los cuatro niveles de la pirámide de intervenciones para los servicios de salud mental y apoyo psicosocial en emergencias establecida por el IASC² (véase más abajo). Por tanto, los PSTIC combinan cuidadosamente la provisión de los niveles de intervención con planes de acción individualizados y complementan los servicios ofrecidos por el Gobierno y otras entidades.

El apoyo social a través de la familia, los amigos o la comunidad es la piedra angular de cada plan de acción individualizado. Los trabajadores de los PSTIC ayudan a las personas a encontrar un sistema de apoyo seguro y a desarrollar las capacidades y la responsabilidad de dicho sistema. No se rechaza a nadie que



Formación de nuevos trabajadores de los PSTIC durante la pandemia de la COVID-19, El Cairo.

pida ayuda a los PSTIC. Sus trabajadores prestan asistencia y derivan a las personas al servicio correspondiente y, cuando no hay servicio posible, las escuchan y tratan con amabilidad. Conscientes de que puede que los más vulnerables no sepan cómo pedir ayuda, los trabajadores toman la iniciativa de llamar o tocar a la puerta de alguien para ofrecerle asistencia cuando les dicen que hay un problema.

Por ejemplo, una persona intenta suicidarse. Su compañera de piso llama a un trabajador refugiado de los PSTIC que va a su casa y hace una evaluación inmediata. La mujer llora y dice que no quiere morir, pero que se siente sola y asustada. Debido a la COVID-19 perdió su trabajo y no puede pagar el alquiler. El trabajador de los PSTIC se sienta con ella y con su compañera de piso y elabora un plan de apoyo y protección. Hay un psiquiatra al teléfono asesorando al trabajador y evaluando telefónicamente a la cliente. Todos acuerdan que estará segura en su casa con la protección de su compañera de piso y fijan una cita en la clínica psiquiátrica para el día siguiente. Los PSTIC le ayudan a aliviar su malestar psicológico inmediato ofreciéndole vales de alimentos temporales y el pago de su alquiler hasta que pueda encontrar un nuevo trabajo.

Las intervenciones en el nivel 1 de la pirámide ofrecen ayuda práctica para reducir el malestar psicológico. Las líneas de atención telefónica de los PSTIC se anuncian ampliamente. El personal de la línea de atención telefónica ofrece información y derivación a los servicios correspondientes, y se encarga de que los trabajadores se desplacen inmediatamente al domicilio de alguien cuando lo necesite.

La información inexacta a menudo es la causante del malestar psicológico. El Equipo de Intercambio de Información comparte información precisa en entornos comunitarios informales. Para gestionar el malestar psicológico provocado por la COVID-19, los PSTIC aumentaron su intercambio de información a través de una página de Facebook sobre SMAPS que funciona en seis idiomas³. Un Equipo de Iniciativa para la Vivienda ofrece una respuesta de emergencia para garantizar una vivienda segura y asequible, mediar en los conflictos con los arrendadores y enseñar a planificar las finanzas. Además, un Equipo Médico de Defensa de la Salud ayuda a los refugiados a acceder a la atención médica de urgencia, y hay enfermeras que también prestan asistencia sanitaria a domicilio a las personas que están confinadas en cama.

Las intervenciones en el segundo, tercer y cuarto nivel de la pirámide de la SMAPS incluyen un Equipo Psicosocial de refugiados capacitados que evalúan las necesidades, preparan planes individualizados y ofrecen orientación y mediación en conflictos, integración en la comunidad, defensa, acompañamiento y derivación a otros servicios. El equipo ofrece una gestión intensiva para la protección de los menores y la familia, mediadores para la violencia de pandillas, actividades escolares para promover actividades no violentas entre los chicos y grupos de juego especializados para los niños con necesidades especiales y sus familias. Este equipo trabaja para minimizar el estigma en la comunidad, facilitar la integración comunitaria y —mediante visitas a domicilio— promover que se siga el tratamiento de salud mental. Un Equipo de Orientación compuesto por orientadores refugiados multilingües ofrece asesoramiento individual, de pareja y familiar a corto plazo, mientras que el Equipo de Salud Mental, formado por psiquiatras egipcios, actúa junto a trabajadores psicosociales refugiados para ofrecer psicoterapia y tratamiento psiquiátrico en las clínicas de los PSTIC a personas con enfermedades mentales graves.

Los entornos urbanos plantean muchos retos para la prestación de servicios de salud mental y apoyo psicosocial a las poblaciones desplazadas. En esos contextos, es necesario que las intervenciones de SMAPS sean accesibles para los más vulnerables y estén diseñadas para cada contexto específico. El modelo urbano basado en la comunidad de los PSTIC, que da servicio 24 horas al día los 7 días de la semana, se ha ganado el reconocimiento internacional y su instituto de formación internacional, Urban Life⁴, ha acogido a alumnos procedentes de 15 países para que se incorporen a la formación sobre el terreno. Las prácticas desarrolladas por los PSTIC que abordan los retos urbanos en El Cairo pueden ofrecer clases a quienes trabajan en centros urbanos de otros lugares.

Nancy Baron drnancybaron@pstic-egypt.org
Directora de los Servicios Psicosociales e Instituto de Formación en El Cairo (PSTIC) (un programa de Terre des hommes)

1. Los PSTIC atienden mensualmente unos 2000 casos (8000 personas). <http://pstic-egypt.org>
2. IASC (2007) *Guía sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes*, págs. 11-13 bit.ly/IASC-MHIPSS-guidelines-sp
3. www.facebook.com/RefugeesTogether/
4. www.urbanlifemhps.com

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

El sesgo cultural y la SMAPS

Joanne Michelle F Ocampo, Mhd Nour Audi y Mike Wessells

Los sesgos culturales pueden reducir la efectividad de los programas y causar graves perjuicios a comunidades que ya son vulnerables.

La efectividad de los programas de salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS) para aliviar la carga psicosocial y de salud mental depende de múltiples factores, entre ellos, la relevancia sociocultural para la población local¹. El sesgo cultural —que implica interpretar, juzgar o actuar basándose en los propios patrones culturales— puede tener un efecto negativo sobre la relevancia sociocultural y tener un impacto en todas las etapas de los programas de SMAPS, incluidas las de diseño, implementación y evaluación.

La prestación de servicios de SMAPS a personas afectadas por el conflicto sirio ha estado repleta de desafíos culturales, entre otras la aplicación transcultural de herramientas de detección de traumas sin validación local². Los proveedores de servicios de salud mental en el Líbano consideraron que la cultura de los refugiados era un “obstáculo” para descubrir los trastornos psiquiátricos subyacentes. Además, los profesionales de la salud mental consideraron que las estrategias de los refugiados para adaptarse a un entorno discriminatorio eran deshonestas y que su comportamiento era manipulador, y eso afectó a su capacidad de establecer una relación de confianza con ellos³.

El sesgo cultural en los programas humanitarios de SMAPS no es nuevo. Durante la guerra de Angola, muchas ONG occidentales se centraron casi exclusivamente en el trastorno por estrés postraumático (TEPT). Durante uno de los trabajos sobre el terreno llevados a cabo por los autores a mediados de la década de 1990, los niños soldado informaron de que su principal problema era su contaminación espiritual por los espíritus no vengados de las personas a las que habían matado. Aunque los curanderos tradicionales contaban con rituales de limpieza para este problema específico, los psicólogos y las ONG internacionales no trabajaron con ellos cómo abordar este malestar espiritual o para contextualizar de qué manera enfocar esta preocupación local, lo que limitó el éxito de los programas de SMAPS. Finalmente, se acabaron incluyendo los rituales en el programa de reintegración y eso hizo que aumentara significativamente la aceptación de los antiguos niños soldado por parte de la comunidad.

Oportunidades perdidas y efectos perniciosos

Aunque podría ser más conveniente implementar enfoques universalizados de SMAPS, se corre el riesgo de limitar su efectividad al pasar por alto elementos contextuales fundamentales cuando se abordan problemas que son realmente prioritarios para las personas afectadas. Como consecuencia, los programas de SMAPS podrían desaprovechar importantes oportunidades de contribución a la salud y el bienestar de las comunidades. En Filipinas, uno de los países más propensos del mundo a sufrir desastres, las respuestas humanitarias a las necesidades de SMAPS suelen tener un enfoque limitado y prestar poca o ninguna atención a los modismos filipinos para expresar el malestar psicológico; o a prácticas locales y autóctonas que podrían complementar la ayuda externa.

Omitir la contextualización de la SMAPS en los entornos locales podría dar lugar a que no se comprendieran lo suficiente las necesidades de salud mental y las formas de resiliencia de los individuos, los miembros de las familias y la comunidad. Los enfoques externos también podrían resultar alienantes para la población local, lo que provocaría bajos niveles de aceptación y de uso del apoyo y los servicios de SMAPS.

Y lo que es más preocupante, una intervención culturalmente inapropiada podría perjudicar involuntariamente a la población. La cultura es un rasgo definitorio de la identidad humana que nos confiere un sentido y actúa para nosotros como forma de anclaje a este mundo. Cuando personas de fuera imponen sus sesgos culturales, la población puede experimentar marginación o sentimiento de pérdida de su dignidad e identidad, lo que reflejaría un pernicioso patrón colonialista que trataría a la población local y sus culturas como inferiores.

Es importante reconocer que los perjuicios del sesgo cultural no siempre son deliberados. Los actores humanitarios inevitablemente llevan sesgos culturales a las conversaciones individuales con los miembros de la comunidad, a las reuniones con las organizaciones de base y a las conferencias

con las organizaciones internacionales. Esto puede verse exacerbado por el relativo poder que poseen (y que ignoran que tienen), en ocasiones, los actores humanitarios. Al tener poco poder y temer por su supervivencia, las personas afectadas por el conflicto pueden reorientar sus creencias o remodelar sus identidades de forma potencialmente perniciosa, solo por encajar en el prisma cultural de una organización humanitaria.

Dentro de la SMAPS, el sesgo cultural se produce sobre todo a través de la imposición de supuestas categorías universales, estudios y tratamientos estandarizados (derivados de Occidente) que no tienen en cuenta adecuadamente otras culturas y contextos. Este enfoque, que a menudo se lleva a cabo con la excusa de ser una práctica con base empírica, presupone que las interpretaciones, orígenes, síntomas y repercusiones de las necesidades de SMAPS, como la depresión y el TEPT, son comunes a todas las culturas y pueden tratarse mediante las mismas intervenciones. Esta presuposición es cuestionable, al igual que la suposición paralela, a menudo tácita, de que lo que culturalmente definimos como dolencias y estrés no merecen especial atención. Este enfoque predominante basado en aplicar el mismo modelo para todo el mundo se ha generalizado de forma inapropiada para las poblaciones del ámbito humanitario.

Abordar los sesgos culturales

Prestar atención y tomar conciencia sistemáticamente de las creencias y prácticas culturales propias y ajenas podría ser importante para poner en práctica el principio de “no dañar”. Una contextualización más exhaustiva de las intervenciones de SMAPS ayudaría a reconocer y respaldar la dignidad y la identidad de la gente en momentos de extrema necesidad. Aunque no hay una solución rápida para reducir los sesgos culturales en los programas de SMAPS, sí existen algunas estrategias útiles.

Para una organización: En primer lugar, recabar pruebas acerca de las repercusiones de los sesgos culturales en los programas de SMAPS. Evaluar cómo han influido potencialmente los sesgos culturales en la puesta en marcha de programas de SMAPS, tanto en el pasado como en el presente, y en la población a la que iban dirigidos. Emplear distintos recursos para adquirir conocimientos, como las encuestas de evaluación de los trabajadores de la salud mental, los grupos focales con los participantes de los programas y los grupos consultivos de

la comunidad. En segundo lugar, evaluar y desarrollar continuamente la humildad cultural y las habilidades pertinentes de los trabajadores en SMAPS. Dar importancia a abordar los sesgos culturales —durante el proceso de selección y a lo largo del despliegue de los trabajadores en SMAPS— y plantearse llevar a cabo sesiones de reflexión en profundidad acerca de este tema cuando se evalúen los programas; incluir tanto a los trabajadores internacionales como a los nacionales, y ser conscientes de la disparidad y desigualdades del poder local.

Para un programa: Permitir un proceso iterativo para la adaptación cultural de los programas de SMAPS en curso. Apoyar la participación local en las intervenciones de SMAPS a lo largo de todas las etapas del programa, colaborando con los curanderos locales, las organizaciones de base y los trabajadores locales en SMAPS.

Para un trabajador en SMAPS: Intentar ser capaz de reflexionar acerca de los problemas provocados por la falta de respeto y la marginación cultural. Analizar cómo mejorar sistemáticamente su programa mediante la inclusión de aspectos culturales que no sean perniciosos y que puedan contribuir al bienestar y a la resiliencia, aunque no encajen en los esquemas predominantes de la SMAPS. En general, trabajar con humildad cultural. Apreciar los conocimientos, recursos y conceptos que la gente tiene de su propia cultura, del contexto actual y los problemas a los que se enfrenta, y reflexionar sobre los límites de los conocimientos de las personas de fuera.

Cuestiones críticas

Con un profundo aprecio por las diferencias culturales, deberíamos valorar cómo equilibrar mejor los puntos de vista y los enfoques culturales locales con los enfoques extranjeros o universalizados en el ámbito de la SMAPS. La búsqueda de un equilibrio dependerá también de los recursos disponibles, del mandato del organismo, del clima político y de muchas otras cuestiones. Pero estas complejidades pueden ser un productivo trampolín para la continua reflexión, aprendizaje y adaptación.

Otro tema fundamental para los profesionales de la SMAPS es cómo evitar causar daños involuntarios. Resulta de ayuda asumir que cada cultura tiene una mezcla de aspectos positivos y negativos que promueven o menoscaban la salud y el bienestar de las personas. Entender eso ayudará a los trabajadores humanitarios a evitar apoyar

prácticas perniciosas y a interactuar con las prácticas y recursos culturales positivos y a reforzarlos. Del mismo modo, se debe tener cuidado con el simbolismo cultural, siendo sensibles, por ejemplo, a cuestiones de lenguaje y traducción, al tiempo que se priorizan los enfoques occidentales, y con limitar los modismos culturales para expresar el malestar psicológico a categorías occidentales sin una justificación adecuada.

Una tercera cuestión a tener en cuenta es de qué forma influyen las estructuras de poder locales en los debates sobre qué enfoques locales son valiosos, o incluso culturalmente apropiados. Interactuar ciegamente con los interlocutores culturales sin valorar las dinámicas de poder a nivel local podría ofrecer una imagen distorsionada de las creencias y prácticas autóctonas. Lo más importante es tener en cuenta la realidad de que los actores humanitarios internacionales pueden interactuar de una manera que en sí misma afecte, refleje o defina las dinámicas de poder e influencia a nivel local. Es fundamental que los trabajadores externos en materia de SMAPS y los organismos a los que estén adscritos intenten entender los matices de las estructuras de poder locales y aprender de la gente, incluso de quienes viven al margen de la sociedad que rara vez tienen voz o influyen en las decisiones o acciones clave. Las acciones que respaldan el uso discriminatorio del poder a nivel local pueden aumentar las necesidades de SMAPS.

Abordar los sesgos culturales tiene poderosas implicaciones para la dignidad, la identidad y el bienestar de la gente, y

afecta a la calidad y a la implementación de los programas de SMAPS en entornos humanitarios. En un momento en el que hay presiones para la descolonización y también fuertes presiones institucionales y por parte de los donantes, que instan a ajustarse a los enfoques estandarizados (occidentales), sigue siendo muy necesario mejorar la integración y la contextualización de los programas de SMAPS en los enfoques culturales locales, de manera que se obtengan mejores resultados y se impulse nuestro compromiso colectivo con el bienestar humano y la responsabilidad humanitaria.

Joanne Michelle F Ocampo

joannemichelle.ocampo@columbia.edu

Estudiante de doctorado, departamento de Población y Salud Familiar, Universidad de Columbia

Mhd Nour Audi

[@Nour_Audi](mailto:nour.audi@columbia.edu)

Estudiante de doctorado, departamento de Población y Salud Familiar, Universidad de Columbia

Mike Wessells mgw2106@columbia.edu

Profesor, departamento de Población y Salud Familiar, Universidad de Columbia

1. Mukdarut B, Chiumento A, Dickson K y Felix L (2017) *The Impact of Mental Health and Psychosocial Support Interventions on People Affected by Humanitarian Emergencies: A systematic review*
<https://oxfamlibrary.openrepository.com/handle/10546/620214>

2. Gadeberg A K y Norredam M (2016) "Urgent need for validated trauma and mental health screening tools for refugee children and youth", *European Child and Adolescent Psychiatry* 25(8)
<http://europepmc.org/article/MED/27043846>

3. Kerbage H et al (2020) "Mental Health Services for Syrian Refugees in Lebanon: Perceptions and Experiences of Professionals and Refugees", *Qualitative Health Research* 30(6)
<https://doi.org/10.1177/1049732319895241>

La importancia del bienestar docente para la salud mental de los alumnos y los sistemas educativos resilientes

Danielle Falk, Paul Frisoli y Emily Varni

Los docentes desempeñan un papel primordial a la hora de aportar SMAPS a sus alumnos y de mantener unos sistemas educativos resilientes; para que puedan seguir haciéndolo es fundamental respaldar su propio bienestar.

En contextos de conflicto y desplazamiento forzado, la educación ofrece aptitudes para sobrevivir y mantenerse. Las escuelas formales y no formales son lugares importantes en los que prestar salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS) a los niños y jóvenes afectados, y los docentes son la pieza clave de esta labor. Sin embargo, los mismos docentes que se

encuentran en contextos de emergencia, crisis crónicas y recuperación temprana solo reciben un apoyo mínimo, si es que lo hacen, en cuanto a SMAPS, y tampoco se les proporciona un desarrollo profesional inicial y continuo para atender a sus alumnos de forma segura. Esto puede deberse a que la idea del bienestar docente sigue siendo vaga

y a que las intervenciones que lo respaldan son incipientes, lo que contribuye a que la SMAPS que reciben sea inadecuada.

El Marco Conceptual de la Iniciativa de Investigación sobre la Equidad en la Educación para el Bienestar de los Docentes en Contextos de Recursos Escasos, Crisis y Conflictos¹ (al que nos referiremos en este artículo como Marco Conceptual) ofrece una estructura para evaluar las necesidades de SMAPS de los docentes, diseñar y probar la eficacia de políticas y programas que satisfagan estas necesidades y mejoren su bienestar. Las recomendaciones que acompañan al Marco Conceptual son medidas funcionales para que los responsables de la formulación de políticas y los profesionales mejoren el bienestar de los docentes y garanticen que los sistemas educativos sean resilientes, en beneficio de las necesidades de SMAPS tanto del profesorado como del alumnado.

El bienestar docente es específico de cada contexto y abarca la forma en que los profesores se sienten y funcionan en su puesto de trabajo. Hay cuatro conceptos basados en los resultados que son de vital importancia tener en cuenta a la hora de medir el bienestar del profesorado: su autoeficacia (la creencia de que son capaces de conseguir los resultados deseados para sus alumnos); el estrés laboral y el desgaste; la satisfacción laboral y la competencia socioemocional². En nuestro Marco Conceptual, aplicamos un enfoque socioecológico para identificar cuatro niveles de apoyo al bienestar docente: individual, escolar, comunitario y nacional-regional-mundial. Este enfoque es especialmente pertinente para los docentes que trabajan en situación de conflicto y de desplazamiento forzado por los diversos papeles que desempeñan dentro y fuera de la escuela. Por ejemplo, los docentes suelen actuar como trabajadores parasociales para los niños y jóvenes, o como líderes de su comunidad, debido a su respetado papel de educadores. Un marco socioecológico amplio reconoce los entornos interrelacionados, las interacciones y las relaciones que contribuyen al bienestar de los docentes, y puede ofrecer orientación acerca de los múltiples puntos de intervención que los profesionales y los responsables de la formulación de políticas pueden tener en cuenta a la hora de diseñar e implementar programas y políticas de SMAPS sostenibles y adecuadas a cada contexto para respaldar el bienestar docente.

Las recomendaciones que figuran a continuación se ajustan a las conclusiones en

las que se basa el Marco Conceptual y a las Normas Mínimas de la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia³.

Apoyo individual: el reconocimiento y la valoración de los diversos perfiles de docentes

Los factores que tener en cuenta en lo que respecta a las características individuales de los docentes son el género, la situación de desplazamiento, el nivel educativo, los mecanismos para lidiar con su circunstancia, la situación laboral, la experiencia docente, el conocimiento de los contenidos y la competencia cultural. Estos factores pueden servir de guía para llevar a cabo una rápida evaluación de las necesidades para entender los perfiles del profesorado y las comunidades en las que trabajan; al mismo tiempo que deberían servir de base a los programas y las políticas de desarrollo profesional docente de manera que se tengan en cuenta las aptitudes y los puntos fuertes inherentes a ellos. Adoptar un enfoque “basado en activos” como este puede ayudar a fomentar la autoeficacia y la satisfacción laboral de los docentes, lo que contribuiría a su bienestar general. Este enfoque es también fundamental a la hora de impartir formación sobre las intervenciones en SMAPS que los profesores llevarán a cabo con sus alumnos, ya que la eficacia y la calidad de esas intervenciones dependerán, al menos parcialmente, de su propio bienestar. El desarrollo profesional docente puede aportar herramientas específicas para adultos, como la conciencia plena o *mindfulness*, la gestión del estrés y estrategias de autocuidado que los profesores pueden practicar para ayudarse a sí mismos, y luego adaptar los enfoques a sus alumnos. Esta forma de funcionar les permite apoyarse en su propia competencia socioemocional, reducir sus propios niveles de estrés y conformar unos comportamientos y estrategias socioemocionales que sean efectivos para sus alumnos.

El apoyo escolar: invertir en las relaciones entre iguales y en los entornos de protección

Tanto la cultura escolar como la seguridad y los recursos influyen en el bienestar del profesorado y en su capacidad para ofrecer a los alumnos una SMAPS efectiva. Los cuatro factores que hay que tener en cuenta a nivel escolar son las relaciones entre profesores y alumnos, las relaciones entre iguales, el liderazgo y los recursos escolares. Los responsables de la formulación de políticas podrían desarrollar

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

unos estándares nacionales en torno a cuál sería una ratio equitativa de alumnos por profesor, de la justa distribución de las clases entre docentes y del material didáctico adecuado para las escuelas. Los responsables de la formulación de políticas y los profesionales deberían trabajar juntos para garantizar que estos estándares se pongan en práctica, especialmente en contextos de desplazamiento forzado en los que podría haber afluencia de estudiantes y escasez de profesores, además de unas limitadas infraestructuras y recursos escolares.

Los factores a nivel escolar también sirven de guía para las políticas y los programas de desarrollo profesional docente, en particular para los destinados a los líderes escolares, quienes desempeñan un papel central en la promoción de una cultura escolar positiva y de la colaboración entre iguales. Los profesionales podrían diseñar un desarrollo profesional para los directores, los inspectores del Ministerio y los supervisores que incluyera estrategias concretas para crear escuelas seguras y enriquecedoras que ofrezca oportunidades para demostrar un liderazgo positivo y que respalde a los líderes escolares en la creación de unos sistemas de gestión escolar participativos que eleven la voz del profesorado en la toma de decisiones escolares. En el caso de los directores, el desarrollo profesional docente podría centrarse en estrategias de cultivo de relaciones entre iguales y en las comunidades para que el profesorado pueda compartir sus prácticas. La colaboración de los docentes ayudaría a mejorar los resultados que contribuyen al bienestar y a reducir el estrés y el agotamiento.

Tanto respaldar estos resultados como disminuir al mismo tiempo el estrés y el desgaste resulta especialmente crítico por los muchos papeles adicionales que los docentes desempeñan para sus alumnos en contextos de desplazamiento forzado, como el de orientadores y trabajadores parasociales. Los profesionales y los encargados de la formulación de políticas deben reconocer estos distintos roles e implementar unos enfoques integrados y que lleguen a todos los ámbitos de la escuela y que doten al profesorado de los conocimientos y aptitudes necesarios para detectar los signos de malestar psicológico entre el alumnado y responder ante ellos. Los profesionales podrían trabajar en los sectores de la educación y la protección de la infancia para reforzar los mecanismos de derivación y seguimiento de las cuestiones que afecten a la protección de la infancia y

la SMAPS en la escuela y la comunidad. Los responsables de la formulación de políticas y los profesionales deberían garantizar también que quienes lideran las escuelas y las oficinas de educación de cada distrito reciben formación profesional para establecer y utilizar las vías de derivación para los docentes y demás personal educativo, y para los menores que requieran de unos servicios especializados.

El apoyo comunitario: reforzar las alianzas

El contexto es crucial para entender y responder a las necesidades de SMAPS del profesorado. Los tres factores a nivel comunitario —el acceso a las necesidades básicas; el respeto y el reconocimiento; y la responsabilidad y el deber— sirven de guía a los profesionales y a los responsables de la formulación de políticas para entender el contexto comunitario y la relación de los docentes con los miembros de la comunidad. Mapear los riesgos y recursos de una comunidad puede ayudar a identificar las estructuras formales e informales, los recursos y los individuos que pueden suponer un activo o un obstáculo para la SMAPS. Es especialmente importante entender hasta qué punto son capaces los docentes de satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, agua, alojamiento, transporte y seguridad. En contextos afectados por conflictos, la evaluación de los riesgos para la seguridad física es fundamental porque las escuelas y el profesorado suelen ser objeto de ataques. Las amenazas reales y percibidas de violencia pueden aumentar el estrés y el agotamiento de los docentes, por lo que habría que esforzarse por garantizar que haya mecanismos contextualmente relevantes y sensibles con su situación para que profesores y alumnos puedan denunciar las amenazas a su bienestar físico, social y emocional.

También es fundamental tener en cuenta cómo son las relaciones de los docentes con los miembros de la comunidad, especialmente con los cuidadores de sus alumnos. El establecimiento de unas relaciones positivas supone un enfoque importante y, a menudo, infrutilizado para satisfacer las necesidades de SMAPS del profesorado respecto al aumento de su satisfacción en el trabajo, su competencia socioemocional, y la disminución del estrés laboral. Para mejorar estas relaciones, los profesionales pueden constituir Asociaciones de Padres y Profesores y Comités de Gestión Escolar e impartirles formación sobre la importancia



Un maestro de primaria da clase en el campo de refugiados de Makpandu, en el estado de Ecuatoria Occidental (Sudán del Sur), donde los padres han ayudado a construir nuevas aulas para su masificada escuela.

de la educación y del papel de los docentes, y movilizar a sus miembros para que presten apoyo en tareas no docentes en la escuela.

El apoyo nacional-regional-mundial: priorizar el bienestar del profesorado en la política y la práctica

El potencial para mejorar el bienestar de los docentes, así como para aumentar su grado de fidelización, mejorar la paridad de género y promover la inclusión entre los colectivos infrarrepresentados en la profesión, puede aumentar con intervenciones relacionadas con cinco factores de carácter político: la gestión del profesorado, el derecho al trabajo, la compensación, el desarrollo profesional docente y la acreditación.

A nivel nacional, los encargados de la formulación de políticas podrían incluir las políticas de gestión del profesorado en los planes del sector educativo como medidas de preparación para responder a las crisis y los desplazamientos (por ejemplo, el despliegue rápido o la selección y contratación de docentes en zonas de alta necesidad). Estas políticas deberían promover la equidad de género y la inclusión de los docentes desplazados y de otras comunidades infrarrepresentadas.

La pandemia de la COVID-19 ha puesto de relieve el papel indispensable del profesorado y aumentado los riesgos a los que se enfrentan durante el desempeño de su labor. Muchos Gobiernos nacionales, en especial aquellos que acogen a un gran número de refugiados o desplazados internos, han incluido la SMAPS para el profesorado en sus planes nacionales de respuesta a la COVID-19 (como Uganda, Colombia y Nigeria). Para llevar a la práctica estos planes, los profesionales y encargados de

la formulación de políticas podrían utilizar el Marco Conceptual como guía para las conversaciones políticas, en la identificación de los puntos de intervención para fomentar el bienestar docente y para seleccionar los factores con base empírica que midan el impacto de las intervenciones.

Pero más allá de los planes de respuesta a la COVID-19, los encargados de la formulación de políticas deben institucionalizar el apoyo al bienestar docente y a la SMAPS en las políticas educativas permanentes mediante la colaboración en los presupuestos y

la financiación de los ministerios de Educación, Sanidad y Finanzas. Por ejemplo, estos ministerios podrían colaborar en el presupuesto y la financiación de los equipos de protección personal y las medidas de salvaguardia para los centros educativos, y en los costes formativos para las evaluaciones comunitarias de la SMAPS o en el establecimiento de programas de SMAPS en las escuelas. En contextos de desplazamiento forzado, el Ministerio del Interior también debería estar incluido para garantizar que los docentes que sean refugiados y desplazados internos tengan acceso a los mismos servicios que sus compañeros no desplazados. A nivel regional, sobre todo en las zonas afectadas por el desplazamiento forzado, los responsables de la formulación de políticas podrían reforzar o establecer marcos regionales para promover la inclusión de los docentes desplazados y retornados en los sistemas educativos nacionales; esto ayudaría a garantizar que dichos docentes desplazados tuvieran acceso a indemnizaciones y prestaciones, derechos básicos y protección para empleados, todo lo que contribuye a apoyar su bienestar. Un ejemplo de política regional que da prioridad a las necesidades de SMAPS y de bienestar de los docentes desplazados y de los de la comunidad de acogida es la Declaración de Yibuti, adoptada por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo en el Cuerno de África⁴.

A nivel mundial, los profesionales, los responsables de la formulación de políticas, los donantes y los investigadores deberían conseguir más testimonios del bienestar docente en los entornos afectados por los conflictos y por el desplazamiento forzado, y conseguir que se preste más atención y apoyo

al profesorado en estos contextos. Las partes interesadas en la educación a nivel mundial deberían colaborar con los profesores que trabajan en estos entornos en busca de ejemplos de buenas prácticas que sirvan de apoyo para el bienestar docente y para satisfacer sus necesidades de SMAPS. Por último, las partes interesadas en la educación deben servir de altavoz al profesorado y hacer que se les escuche incluyéndoles en aquellos foros locales, regionales e internacionales en los que se debata acerca del bienestar docente y de las políticas y programas de SMAPS.

Conclusión

Proporcionar SMAPS al profesorado, a los niños y a los jóvenes afectados por los conflictos y los desplazamientos forzados es una responsabilidad colectiva de la comunidad educativa a nivel mundial. Aunque los docentes sean los encargados de identificar y responder a las necesidades de SMAPS de sus alumnos, no podemos esperar que lo hagan solos. Es necesario priorizar el bienestar docente en las políticas, las prácticas

y la investigación en materia de educación si queremos crear unos sistemas educativos que promuevan la salud socioemocional del profesorado y de los estudiantes, conseguir que los docentes no abandonen la profesión y que les permita impartir una educación segura y equitativa, incluyendo SMAPS, para todos los niños y jóvenes.

Danielle Falk dlf2136@tc.columbia.edu
Estudiante de doctorado, Teachers College

Paul St John Frisoli paul.frisoli@lego.com
Especialista de programas sénior, Fundación LEGO

Emily Varni evarni@savechildren.org
Especialista en Educación en Situaciones de Emergencia, Save the Children EE. UU.

1. Education Equity Research Initiative (2019) *Landscape Review: Teacher Well-being in Low Resource, Crisis, and Conflict-Affected Contexts* (la representación visual del Marco Conceptual del Bienestar de los Docentes se encuentra en la pág. 10). bit.ly/EERI-landscape-review-2019
2. Dispone de más información al respecto en el apartado 4 (pág. 11) del documento titulado *Landscape Review*: véase la nota final anterior.
3. www.ineesite.org/en/minimum-standards/translations
4. <http://bit.ly/Djibouti-declaration-2017>

Una SMAPS sensible con la fe para los profesionales humanitarios

Leonie Harsch, Corrie van der Ven y Olivia Wilkinson

La fe y la espiritualidad son parte de la identidad y la vida cotidiana de muchas personas, y la sensibilidad hacia dicha fe forma parte de una prestación de SMAPS integral y centrada en las personas en contextos humanitarios.

La salud mental y el apoyo psicosocial (SMAPS) en la respuesta a las emergencias humanitarias tiene que ver con las visiones del mundo, las prácticas de sanación y el lenguaje de las personas a las que se pretende ayudar. La fe es un factor que influye en la capacidad de muchas personas y comunidades para afrontar los retos psicosociales; para muchas personas, por ejemplo, enterrar a sus seres queridos según los rituales de su fe es importante para poder pasar el duelo. Por ello, la *Guía sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes* del Comité Permanente entre Organismos (IASC, por sus siglas en inglés) insta a los actores humanitarios a contar con los recursos, colectivos y líderes religiosos y espirituales locales en sus programas habituales¹. Por eso, también fue tan efectiva la integración de las prácticas y líderes religiosos

en los procedimientos operativos estándar durante la respuesta al ébola de 2014-2015 en África Occidental, por poner un ejemplo².

El desarrollo de una respuesta humanitaria sensible con la fe empieza por reconocer que las prácticas religiosas, como la oración, pueden ser un elemento de apoyo psicosocial que debería complementarse, en lugar de sustituirse, con otras formas de SMAPS. Los profesionales de la ayuda humanitaria pueden adoptar un enfoque sensible con la fe, con independencia de la suya propia o de la identificación de su organización con una tradición religiosa. La sensibilidad con la fe tiene que ver con la de las personas a las que uno ayuda³.

A pesar de los importantes compromisos políticos⁴, muchas organizaciones humanitarias y de desarrollo dudan a la hora de tener o no en cuenta lo suficientemente aspectos relacionados

con la fe en el diseño de sus programas o de si considerar a los actores religiosos locales como posibles socios para colaborar en cuestiones de SMAPS. Los profesionales tienden a evitar las cuestiones relacionadas con la fe por miedo a que esto pueda interferir con los principios humanitarios de neutralidad e imparcialidad. De hecho, ser sensible con la fe no siempre es sencillo en la práctica. Por lo que, ¿con qué enfoque deberíamos conjugar la fe y la SMAPS en la planificación y en la implementación de unas respuestas psicosociales sensibles hacia la espiritualidad que no vaya en contra de los principios humanitarios?

La sensibilidad religiosa en la práctica

Para ayudar a los profesionales de la SMAPS a superar algunos de los obstáculos y disipar dudas, se ha desarrollado una herramienta de formación en línea sobre la respuesta humanitaria sensible con la fe y centrada en la SMAPS, en la que se destacan las oportunidades, los retos y las medidas prácticas a seguir⁵. La formación —lanzada en junio de 2020— es fruto de la colaboración entre la ACT Alliance, Islamic Relief Worldwide, la Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities, la Federación Luterana Mundial y el laboratorio de aprendizaje DanChurchAid Learning Lab. La formación completa apenas dura unas dos horas.

Adoptar un enfoque sensible con la fe en la SMAPS significa aprender a entender las necesidades y los recursos espirituales y religiosos de las personas, así como el papel de las comunidades religiosas en las respuestas a las emergencias humanitarias. Esto también implica reflexionar sobre la postura, los conceptos y los sesgos propios y de la organización a la que uno pertenece con respecto a la fe. A continuación, se describen cinco recomendaciones clave para los profesionales (en especial para los que pertenecen a organismos internacionales) que deseen hacer la SMAPS más sensible con la fe:

Incluir la fe en las evaluaciones: Hay que tener en cuenta la información acerca de las creencias religiosas, las prácticas, las actividades de los colectivos religiosos y los lugares de culto que sean relevantes para la salud mental y el bienestar psicosocial de la comunidad afectada. ¿Cómo ven la crisis, cómo explican el malestar psicológico y en qué términos hablan de cómo lo afrontan? ¿Qué factores espirituales influyen en su bienestar? ¿Qué conceptos religiosos les

son de ayuda para responder a los retos a los que se enfrentan? Los recursos elaborados por ACNUR acerca del contexto sociocultural, los conceptos y las prácticas de sanación relativas a la salud mental y el bienestar psicosocial de comunidades de refugiados específicas muestran cómo se puede documentar esa información⁶: realizando evaluaciones de una forma participativa que incluya también las perspectivas de las comunidades religiosas locales; debatiendo los problemas de salud mental con los representantes de diferentes tradiciones religiosas para entender cómo influyen los conceptos teológicos en la forma en que las personas dan sentido a los retos al respecto y los afrontan.

Vincular los programas con las creencias y prácticas de la población: Es necesario diseñar los programas de SMAPS basándose en las creencias, prácticas, rituales y actividades a nivel local que forman parte de las estrategias existentes de resolución de problemas en cada comunidad. Entre ellas, se podría incluir la oración, la lectura de las escrituras y los rituales de duelo (incluidas las actividades colectivas). En Gaza, los orientadores de Islamic Relief Palestine utilizan referencias a las prácticas religiosas de las personas que participan en las sesiones psicosociales grupales como punto de partida para introducir el tema a debatir cuando sea pertinente en función de su relación con la fe. Por ejemplo, señalan los efectos similares que tienen la meditación y la práctica de la oración como técnicas para gestionar el estrés. Vincular un tema con otras ideas familiares lo hace más cercano.

Colaborar con los actores religiosos locales: Hay que contar con ellos, incluyendo a los líderes de las mujeres y los jóvenes (cuyo papel a menudo es informal), y basando las alianzas en una participación significativa en la toma de decisiones conjunta, en el aprendizaje mutuo y en el intercambio de conocimientos. Los especialistas en SMAPS pueden formar a los líderes religiosos locales en materia de principios psicosociales clave, hablar con ellos acerca de los casos en los que la terapia podría ser de más ayuda que el apoyo espiritual, o informarles sobre los servicios de SMAPS para que puedan derivar a quien lo necesite. Establecer mecanismos de derivación bidireccionales puede facilitar el acceso a la atención espiritual y religiosa a través de imanes, pastores y curanderos religiosos o

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

tradicionales junto con el acceso a la atención psicológica y social. Por ejemplo, la Cruz Roja Americana dirige un programa de Cuidado Espiritual en medio del Desastre en colaboración con líderes religiosos locales que cuentan con formación en primeros auxilios psicológicos⁷.

Abordar las prácticas potencialmente perniciosas vinculadas a la fe: Determinados conceptos teológicos pueden ser la base de un encuentro inefectivo e inapropiado, o utilizarse para legitimar prácticas perniciosas. Ejemplos de ello son el confinamiento como tratamiento de una enfermedad mental cuando se considera un problema espiritual en vez de sanitario; o la inapropiada vinculación de los desastres con el pecado o el karma. Responder a los mecanismos negativos de resolución de problemas no significa separar la fe de la salud mental o tratar de convencer a las personas de que abandonen sus creencias, sino que, en su lugar, los agentes deberían hacer que tanto los líderes como las personas vulnerables de diferentes géneros y edades participen en la evaluación del impacto de las creencias religiosas sobre la salud mental y en la identificación de prácticas potencialmente perniciosas. Después de esto, se debería promover el diálogo entre los líderes religiosos, los pensadores religiosos locales bien informados y la comunidad local en torno a las normas sociales y las interpretaciones en las que se basan, y proporcionarles una formación y recursos adecuados que sirvan para respaldar un proceso de reflexión y cambio.

Interactuar con la fe de manera que se respeten los principios humanitarios: Se podría percibir que la sensibilidad hacia la fe entra en conflicto con los principios humanitarios de imparcialidad y neutralidad, ya que esta última insta a no adscribirse a una fe porque eso se relaciona con la política del conflicto, y la imparcialidad reivindica la necesidad de evitar los prejuicios, la discriminación y el proselitismo basados en la adscripción religiosa. Pero en ninguno de los dos casos puede significar ignorar y evitar la religión. Al mismo tiempo que se reivindica la necesidad de seguir siendo neutral e imparcial, es posible ser sensible con las creencias y prácticas propias de una persona. Apoye las prácticas religiosas si la persona a la que presta asistencia se lo solicita, como unirse a ella en la oración (si lo considera apropiado), pero no fuerce una práctica religiosa no solicitada. Deje espacio para estas peticiones sin forzar la situación.

Hacia una respuesta localizada

Un enfoque sensible con la fe sitúa a las personas y a las comunidades afectadas por los conflictos y desastres —y sus derechos, necesidades y dignidad— en el centro de la respuesta de SMAPS, porque ayuda a adaptar la asistencia a su contexto social y cultural específico del que ella también forma parte. Además, la colaboración con las comunidades y actores religiosos puede contribuir a reforzar el papel de los actores locales en el sistema humanitario, lo que facilitaría que el apoyo viniese dirigido por la comunidad y que se integrara la asistencia en las estructuras existentes. Así pues, los programas y alianzas sensibles a la fe son aspectos importantes de la localización de la ayuda y también, por tanto, de un proceso de reforma más amplio del sistema humanitario.

Leonie Harsch leonie.harsch@mercator-fellows.org
@LeonieHarsch

Exinvestigadora invitada, Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities

Corrie van der Ven

c.vandervan@protestantsekerk.nl

Oficial de Programa, Kerk in Actie; exdirectora de Programa de Religión y Desarrollo, ACT Alliance

Olivia Wilkinson olivia@jiflc.com @OliviaWilk

Directora de Investigación, Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities

1. IASC (2007) *Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes* bit.ly/1ASC-MHPSS-guidelines-sp
2. Winiger F (2020) "More than an intensive care phenomenon": Religious communities and the WHO Guidelines for Ebola and Covid-19", *Spiritual Care* 9(3) <https://doi.org/10.1515/spircare-2020-0066>
3. Véase también el número 48 de RMF sobre La fe y las respuestas al desplazamiento www.fmreview.org/es/fe
4. Como la *Partnership Note on Faith-based Organizations, Local Faith Communities and Faith Leaders* (Nota de alianza con organizaciones confesionales, comunidades religiosas locales y los líderes religiosos) emitida por ACNUR en 2014 bit.ly/UNHCR-faith-partnership-note-2014 y el Pacto Mundial sobre los Refugiados de 2018 www.unhcr.org/gcr/GCR_English.pdf
5. Se puede acceder libremente a la formación en www.fabo.org/act/fshr. La formación se basa en: Federación Luterana Mundial e Islamic Relief Worldwide (2018) *A faith-sensitive approach in humanitarian response: Guidance on mental health and psychosocial programming* bit.ly/IRW-LWF-faith-sensitive-MHPSS-2018
6. Tay A K, Islam R, Riley A, Welton-Mitchell C, Duchesne B, Waters V, Varner A, Silove D and Ventevogel P (2018) *Culture, Context and Mental Health of Rohingya Refugees: A review for staff in mental health and psychosocial support programmes for Rohingya refugees*, ACNUR bit.ly/UNHCR-culture-MHPSS-Rohingya-2018
7. Cruz Roja Americana (2018) *Disaster Spiritual Care* bit.ly/ARC-disaster-spiritual-care-2018

La fe y la SMAPS entre las desplazadas musulmanas

Kathleen Rutledge, Sandra Iman Pertek, Mohammad Abo-Hilal y Atallah Fitzgibbon

Dado que la identidad, las prácticas y las creencias religiosas tienen un profundo impacto sobre la salud mental, la sensibilidad religiosa es esencial en el ámbito de la ayuda y la SMAPS.

“La oración era lo que me ataba a la vida”. “Mis necesidades religiosas son mis necesidades básicas”. “Me gustaría que me hubieran preguntado”. Estas declaraciones fueron compartidas por mujeres desplazadas en Irak, Siria, Túnez y Turquía en tres estudios de investigación independientes y coordinados, en 2019, y dirigidos por la Universidad de Birmingham, la Universidad Queen Margaret y Syria Bright Future en colaboración con Islamic Relief Worldwide y la Humanitarian Academy for Development. Los estudios examinaron el papel de la fe en el afrontamiento y la recuperación de las mujeres en contextos de migración forzada y conflicto¹.

Las mujeres que participaron en este estudio, al igual que muchos migrantes forzados, sufrieron lo indecible y experimentaron dificultades como la pérdida de familiares y pertenencias, la guerra y la violencia (incluida la violencia sexual y de género), trayectos que pusieron en peligro sus vidas, la separación de sus familias e indefensión. En su día pertenecían a una comunidad religiosa local y ahora que se encontraban en tránsito se habían aferrado a la religión, a la fe y a una espiritualidad que se desplazaban con ellas. La resiliencia de la fe y el sufrimiento espiritual, a menudo difíciles de comprender para las personas

de fuera, influyeron de distintas maneras en el bienestar de las mujeres. Durante esas experiencias, su identidad, prácticas y creencias religiosas impactaron profundamente sobre su salud mental, tanto paliando su malestar psicológico como contribuyendo al mismo.

La fe viaja con ellas

Los resultados del estudio indican que las mujeres recurrieron en gran medida a los relatos de la fe para encontrar un sentido a su sufrimiento y fundamentar la toma de decisiones críticas, como las relativas al divorcio y al suicidio. Empleaban diversas prácticas religiosas como principales estrategias de afrontamiento, y valoraban el consejo de formales e informales líderes espirituales hombres y mujeres, y el acceso a espacios y recursos religiosos. Describieron sus prácticas religiosas como una forma de consuelo, una vía de protección contra el peligro, un medio para reducir la ansiedad y un camino para ser orientadas a la hora de tomar decisiones. “Es simplemente como echarle agua al fuego”, compartió Jinan, una mujer de 51 años que vive en un campo de desplazados internos en Irak, hablando de sus prácticas de oración y lectura del Corán. Las creencias religiosas también constituían un marco principal a través del cual la mayoría de las participantes en los



Una refugiada siria leyendo el Corán en su casa en Turquía.

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

tres estudios interpretaban la vida y trataban de entender sus experiencias. Un sentimiento de constante intimidad espiritual con Dios ayudó a las mujeres a perseverar en su lucha.

No obstante, las mujeres de los campamentos y refugios se enfrentaban a barreras logísticas para practicar su fe, como la falta de intimidad y de un espacio dedicado a la oración en sus abarrotados alojamientos. En los países de tránsito y refugio, algunas se sentían demasiado cansadas o preocupadas por el estrés del día a día como para practicar su culto individual, y no podían participar en prácticas religiosas comunales. Habían perdido o tenido que dejar atrás accesorios religiosos como textos sagrados, rosarios o tasbih, y alfombras de oración. Algunas perdieron sus teléfonos móviles en los que tenían instaladas aplicaciones religiosas o no podían recargarlos para usarlas.

Hay quien dio a entender que sus prácticas religiosas habían disminuido como consecuencia de su lucha por encajar lo que había experimentado con su fe en Dios. Para algunas, el declive de su fe fue solo temporal, pero para aquellas que no pudieron resolver la disonancia entre sus experiencias y su fe, o restablecer la estabilidad de sus antiguas prácticas, ese declive estuvo ligado a síntomas de ansiedad y depresión. Necesitaban el consuelo del conocimiento sagrado —que sentían fuera de su alcance— para que les ayudara a procesar las creencias que habían interiorizado y que tenían que ver con los abusos que habían sufrido, y con el sentimiento de culpa.

La ayuda interrumpida

Algunas de las mujeres que participaron en el estudio contaron que les gustaría hablar sobre sus conflictos espirituales en un entorno de asesoramiento formal, pero sentían que se suponía que no tenían que hablar sobre cuestiones religiosas. Una de las encuestadas en Irak dijo: “Está claro, porque cuando hablan con nosotras nunca mencionan nada sobre la religión”. Del mismo modo, una participante en el estudio de Siria dijo que desearía que “los proverbios y ejemplos religiosos... pudieran utilizarse en el tratamiento, porque mi personalidad se inclina hacia la fe y la religión”.

Los proveedores de servicios internacionales y locales tendían a evitar echar mano de la religión y solo lo hacían cuando las mujeres lo solicitaban explícitamente. Pero la actitud del personal y las políticas institucionales definían lo que las mujeres consideraban

seguro revelar. Por ejemplo, el perfil religioso de los migrantes que cruzaban las fronteras en Túnez se suponía a menudo a partir de su apariencia, y no se tenían en cuenta las necesidades religiosas en los procedimientos de cribado durante la recepción, ni en los chequeos médicos o las actividades de apoyo psicosocial. La mayoría de las mujeres de los cuatro países manifestaron su deseo de que hubiera un mayor compromiso de la ayuda para aumentar o restablecer su acceso al apoyo religioso externo que se había visto gravemente interrumpido. Muchas deseaban tener acceso a espacios donde pudieran reunirse con otras mujeres para rezar como hacían antes. Para las mujeres que se encontraban en tránsito, la ubicación de los espacios de oración o de los líderes religiosos era desconocida o remota y, al no poder localizar a sus líderes espirituales, muchas se quedaban en medio de una confusión emocional irrupido.

La mayoría del apoyo de los proveedores de ayuda y SMAPS al que tenían acceso no tenía en cuenta el impacto de la fe sobre el malestar psicológico ni la importancia de facilitarles el acceso a los recursos religiosos para afrontar la situación, sino que se asumía que los líderes religiosos locales se responsabilizarían de esas necesidades. Detrás de ello frecuentemente estaba la preocupación por la neutralidad y la imparcialidad. Por lo que en muchos de estos contextos —localidades de tránsito, centros de internamiento, campamentos y lugares de reasentamiento— las mujeres habían tenido un acceso limitado a estas personas o recursos, o se les había ignorado o dejado fuera de esa ayuda por su género. Aquellos con un mandato humanitario que podrían haber mediado en favor de la igualdad de acceso no les preguntaron a las mujeres que participaron en el estudio sobre sus necesidades relacionadas con la fe y evitaron hablar de religión en las evaluaciones y los planes de respuesta. Como consecuencia, muchas de ellas carecieron de apoyo externo para desarrollar sus estrategias de resolución de problemas.

Una SMAPS sensible con la fe para las mujeres musulmanas

Aunque dejar a un lado las preocupaciones religiosas de las poblaciones desplazadas podría provocar daños, también podría ser perjudicial exagerar la importancia de la fe para una población o dar por sentadas sus necesidades espirituales basándose en una religión mayoritaria. La ayuda debería amoldarse tanto a las personas que desean hacer uso de la fe

como a las que de ninguna manera quieren tener nada que ver con ella. Por tanto, la sensibilidad religiosa en la prestación de ayuda y SMAPS debería empezar por preguntar a la población desplazada cuáles creen que son las causas de sus problemas, cuáles sienten que deberían ser las soluciones y, si es el caso, qué papel les gustaría que desempeñara el lenguaje religioso, los actores religiosos y las prácticas espirituales como parte de ese proceso.

Los fundamentos de la sensibilidad religiosa en la SMAPS están arraigados en las directrices y principios establecidos en la *Guía del IASC sobre SMAPS en Emergencias Humanitarias y Catástrofes*². En ella se ofrecen unas directrices para trabajar con la ayuda religiosa y sobre cómo realizar evaluaciones que tengan en cuenta cuestiones de fe y a los actores religiosos, y se destaca la importancia de aprovechar los recursos y las capacidades disponibles, la participación, los sistemas de apoyo integrados y los derechos humanos. En 2018, se desarrollaron más directrices prácticas sobre la sensibilidad religiosa en la SMAPS³. Basándonos en estas y en los datos de este estudio, ofrecemos una serie de recomendaciones para trabajar específicamente con las mujeres musulmanas.

La SMAPS y otros agentes dedicados a la ayuda deberían asumir la responsabilidad de evaluar, facilitar y supervisar la igualdad de acceso a los recursos y espacios religiosos para mujeres y hombres, colaborando estrechamente con líderes religiosos oficiales y extraoficiales, y reconociendo que el acceso a los recursos religiosos está condicionado por el género. Es importante identificar en el contexto local a las líderes religiosas extraoficiales a las que las demás mujeres acuden en busca de apoyo espiritual y emocional. Y contar con ellas en el diseño y la ejecución de los programas de apoyo psicosocial, incluida la formación en primeros auxilios psicológicos.

El personal dedicado a la SMAPS debería ser consciente de la existencia y relevancia de las enseñanzas religiosas clave y de los proverbios locales que los individuos y las comunidades utilizan para afrontar su situación. Además, sentirse identificados con los profetas y las figuras femeninas ejemplares de los relatos religiosos puede ser una fuente de consuelo, ya que ellos también sufrieron desplazamientos, persecución y pérdidas. Una mayor concienciación del personal sobre estas estrategias de afrontamiento podría mejorar la efectividad de los programas.

Las herramientas para la salud mental deberían tener en cuenta los modismos locales para expresar la angustia, que a menudo incluyen lenguaje religioso para describir los síntomas de los trastornos de salud mental; por ejemplo, en Irak se utilizaba la expresión "alma cansada" para referirse a la depresión.

Debería tenerse en cuenta el papel de las experiencias adversas relacionadas con la identidad religiosa a la hora de evaluar las causas fundamentales del malestar psicológico, especialmente en el caso de las poblaciones expuestas a las atrocidades de la guerra y a las persecuciones religiosas, a la discriminación religiosa y racial. Una mayor comprensión de las funciones positivas y negativas de las creencias locales con respecto a la culpa y el castigo divino, y su impacto sobre los niveles de malestar psicológico y las estrategias de afrontamiento, ayudaría a los proveedores a desarrollar unas respuestas y una atención a medida.

Los grupos de apoyo psicosocial entre iguales diseñados y dirigidos por mujeres pueden ser especialmente eficaces a la hora de mejorar el bienestar, especialmente cuando se integran en proyectos educativos y de generación de ingresos. En estas iniciativas también se podrían incluir actividades religiosas para el afrontamiento como ofrecer apoyo entre semejantes para restablecer los rituales y el espacio para el debate religioso, y para hablar sobre otras preocupaciones.

Kathleen Rutledge KRutledge@qmu.ac.uk

Directora de Respuesta Humanitaria; investigadora doctoral, Universidad Queen Margaret

Sandra Iman Pertek S.M.Pertek@pgr.bham.ac.uk

Asesora de género; investigadora doctoral, Universidad de Birmingham

Mohammad Abo-Hilal Mahila13@gmail.com

Psiquiatra sirio; fundador de Syria Bright Future

Atallah Fitzgibbon

Atallah.Fitzgibbon@irworldwide.org

Asesor en colaboraciones de carácter religioso, Islamic Relief Worldwide

1. Participaron 246 mujeres, la mayoría musulmanas (96 %) y el resto cristianas, con edades comprendidas entre los 18 y los 64 años. El estudio también incluyó 22 entrevistas con profesionales humanitarios y en materia de SMAPS.

2. IASC (2007) *Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes*
bit.ly/IASC-MHPSS-guidelines-sp

3. Islamic Relief Worldwide y Federación Luterana Mundial (2018) *A faith-sensitive approach in humanitarian response: Guidance on mental health and psychosocial programming*.
bit.ly/IRW-LWF-faith-sensitive-MHPSS-2018

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

El papel y las responsabilidades de los mediadores culturales

Emilie Venables, Katherine Whitehouse, Caterina Spissu, Lilian Pizzi, Ahmad Al Rousan y Stefano di Carlo

La mediación cultural es fundamental para optimizar tanto el acceso como la calidad de los servicios de salud mental.

Cada vez se reconoce más la necesidad de la mediación cultural —un enfoque que va más allá de la mera prestación de servicios de traducción e interpretación— para satisfacer las necesidades de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados¹. Los mediadores culturales trabajan con una gran variedad de organizaciones como ONG, hospitales, centros de salud y policía, y prestan asistencia a las poblaciones desplazadas en ámbitos como servicios médicos y paramédicos, promoción de la salud, servicios psicológicos y asesoramiento jurídico.

Médicos Sin Fronteras (MSF), que desde 1999 presta ayuda de diverso tipo a migrantes en toda Italia, realizó un estudio para entender el papel de la mediación cultural para facilitar la prestación de servicios de salud mental y los retos a los que se enfrentan quienes prestan servicios de mediación cultural, y para conocer mejor las experiencias y necesidades de apoyo de los propios mediadores culturales². Se llevaron a cabo 25 entrevistas en profundidad con mediadores culturales, personal de MSF e informantes clave de instituciones académicas y organizaciones expertas en el uso de la mediación cultural con poblaciones desplazadas³.

El papel fundamental de los mediadores culturales

La comunicación y la traducción son las principales tareas de cualquier mediador cultural, ya que permiten un intercambio de información relevante y ayudan a generar confianza. La comunicación a tres bandas que se produce entre los mediadores culturales, sus clientes y otros miembros del equipo (como los psicólogos) constituye una relación triangular extremadamente importante que ayuda a los beneficiarios a acceder a los servicios esenciales y a beneficiarse de ellos. Esta relación ayuda a generar confianza entre el mediador cultural y el cliente, lo que mejora a su vez la comunicación entre este último y el proveedor de servicios.

Los mediadores culturales suelen ser el primer punto de contacto de la gente con los servicios de salud mental. Los mediadores a menudo pueden facilitar una comprensión más adecuada y temprana de las necesidades y evitar que se cometan errores o que se pierda la oportunidad de que accedan a tiempo a la atención y los servicios. Este contacto inicial fue beneficioso a la hora de evaluar las necesidades inmediatas de las poblaciones desplazadas, sobre todo en lo que respecta al malestar psicológico agudo.

Algunos mediadores culturales asisten a los facultativos o al personal de los servicios de salud mental durante las consultas individuales, o trabajan con supervivientes de la tortura y mujeres víctimas de trata. Otros trabajan con entidades jurídicas o de seguridad, proporcionándoles información y servicios de traducción durante las vistas orales. Traducen tanto las palabras como los conceptos entre los clientes y los proveedores de servicios, garantizando que se entienda al cliente y que así pueda acceder a la atención y el apoyo que necesita.



Un mediador cultural de MSF trabajando con personas desplazadas en Italia.

Un trabajo emotivo y que es todo un reto

Esta labor es también un reto para los propios mediadores. Con frecuencia ellos mismos proceden de la comunidad de refugiados y muchos han pasado por trayectos y experiencias migratorias similares, a menudo traumáticas, a las de las personas a las que intentan ayudar; por tanto, les resulta más difícil establecer un distanciamiento adecuado, objetivo y profesional. Cuando ellos mismos han pasado por un proceso de asilo difícil en Italia, posiblemente no estén seguros de si deberían compartir (o cómo deberían hacerlo) esas experiencias con sus clientes. A veces se les acusa de no ser imparciales o se les pide que mientan u oculten información, lo que les pone en una tesitura muy complicada.

Por otro lado, como dijo un miembro del personal de MSF, el hecho de que algunos de los mediadores culturales hubieran hecho el mismo viaje y se encontraran en una situación estable “era un mensaje positivo para la gente... el mero hecho de estar allí, incluso a veces sin hablar, ya era un valor añadido en esta situación, para disminuir la tensión, el miedo...”

Los clientes no siempre quieren la ayuda de un mediador cultural o tenerlo cerca, y no siempre quieren hablar en su lengua materna durante las sesiones psicológicas o clínicas. Como explicó un experto en mediación cultural, “es la lengua de sus torturadores”. Algunos prefieren expresarse en francés o en inglés sin un mediador cultural que les ayude con la traducción. Aunque los clientes de MSF tienen actualmente derecho a rechazar la ayuda de un mediador cultural durante sus sesiones, es necesario trabajar más para informarles (y así darles tranquilidad) sobre los códigos de conducta y la confidencialidad para ayudarles a decidir si quieren o no contar con la asistencia de un mediador cultural.

Si bien el hecho de que estén familiarizados con sus experiencias tranquiliza a los clientes, compartir experiencias con las personas a las que asisten hace que para el mediador cultural su trabajo sea un reto a nivel emocional y que el riesgo de sufrir traumas o desgaste por empatizar sea extremadamente alto. Los mediadores culturales pueden adoptar estrategias personales de resolución de problemas, pero es necesario contar con un apoyo psicológico y una supervisión bien integrados para protegerles plenamente, en especial a quienes están expuestos a ciertas cuestiones extremadamente delicadas que giran en torno a la salud mental, la violencia o la tortura.

Es necesario que, de forma ordinaria, los mediadores culturales se reúnan con sus colegas homólogos — como psicólogos, fisioterapeutas o facultativos— antes y después de las interacciones con los clientes. Sin embargo, como muchos mediadores culturales no trabajan a tiempo completo, o pueden estar trabajando con diferentes organizaciones simultáneamente, puede suponer un reto asistir a estas reuniones. Además, la precariedad de su situación laboral exacerba aún más los problemas a los que se enfrentan.

El acceso a tiempo a los servicios de salud mental para los refugiados y solicitantes de asilo es un componente fundamental de la prestación básica de servicios médicos, tanto en Italia como en el resto del mundo. Los mediadores culturales son fundamentales para ello, pero es mucha la presión a la que están sometidos en el desempeño de sus funciones. Un mayor enfoque en la formación y el desarrollo de las aptitudes de los mediadores culturales y del personal que trabaja con ellos también ayudaría a garantizar una mayor claridad de cuáles son sus funciones y una mejor calidad en la prestación de sus servicios, y reduciría el potencial aumento de traumas.

Emilie Venables emiliecvenables@gmail.com

Unidad de Investigación Operativa de Luxemburgo, Médicos Sin Fronteras (MSF) Luxemburgo; División de Ciencias Sociales y del Comportamiento, Facultad de Salud Pública y Medicina Familiar, Universidad de Ciudad del Cabo

Katherine Whitehouse kitwhitehouse@gmail.com

Unidad de Investigación Operativa de Luxemburgo, MSF Luxemburgo

Caterina Spissu caspissu@gmail.com

Misión italiana, MSF

Lilian Pizzi lilian.pizzi@gmail.com

Misión italiana, MSF

Ahmad Al Rousan ahmad.alrousan@rome.msf.org

Misión italiana, MSF

Stefano di Carlo ste.dicarlo@gmail.com

Misión italiana, MSF

1. Utilizamos los términos “mediación cultural” y “mediadores culturales” para reflejar las directrices de MSF en el momento en que se realizó el estudio. Las descripciones empleadas en un trabajo actualizado con posterioridad hacen referencia a la “mediación intercultural”.

2. El equipo de investigación desearía agradecer las inestimables contribuciones de los participantes en el estudio, así como el apoyo de MSF Italia. Nos gustaría dar las gracias especialmente a Francesca Zuccaro y a Adeline De Grate por su apoyo y sus aportaciones a este estudio de investigación.

3. Puede ver la presentación a través de <https://f1000research.com/slides/5-1331>.

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

La violencia de género y la salud mental entre las mujeres refugiadas y de la comunidad de acogida en el Líbano

Alina Potts, Rassil Barada y Angela Bourassa

Los desequilibrios de poder y de género subyacentes que exponen a las mujeres y niñas desplazadas al riesgo de sufrir violencia de género se ven exacerbados por las vulnerabilidades relacionadas con su condición jurídica, la seguridad económica, el acceso a los servicios y las condiciones de vida.

ABAAD, una organización libanesa que trabaja en todos los aspectos de la prevención y la respuesta a la violencia de género¹, y el Global Women's Institute (GWI)², con sede en EE. UU., realizaron una encuesta a mujeres libanesas y mujeres refugiadas palestinas y sirias en el Líbano para conocer sus experiencias con la violencia de género y la prestación de salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS). La encuesta se llevó a cabo en mayo de 2019 en colaboración con proveedores de servicios e intelectuales libaneses especializados en violencia de género y SMAPS. Se complementó con datos cualitativos recopilados a través de debates con grupos focales compuestos por líderes comunitarios, profesionales en materia de violencia de género y SMAPS, y miembros de la comunidad con el objetivo de entender mejor cuál era su percepción del bienestar y qué obstáculos encontraban, y qué factores respaldan los servicios coordinados entre estos dos sectores³.

De las 969 mujeres entrevistadas, el 90 % declaró tener problemas graves debido a una o más vulnerabilidades relacionadas con el entorno: inseguridad alimentaria (71 %), salud física (62 %), separación de la familia (56 %) y falta de seguridad en el lugar donde viven (50 %). Las participantes en los debates con grupos focales identificaron la falta de acceso a recursos financieros como la principal causa de estas vulnerabilidades tanto en las comunidades de acogida como en las de refugiados. La violencia de género es común entre esta población. Más de un tercio de las mujeres señalaron que habían sido casadas antes de los 18 años y más de tres cuartas partes de las que tenían o habían tenido pareja declararon haber sufrido violencia dentro de la pareja, aproximadamente la mitad el año anterior. Ocho de cada diez mujeres que habían sufrido violencia de pareja manifestaban síntomas de malestar psicológico grave⁴. El control coercitivo es otro factor importante para sufrir malestar psicológico. El matrimonio forzado o infantil era una de las mayores causas de dicho malestar que ejercía una inmensa presión

sobre las menores casadas, lo que afectaba a su relación con el cónyuge y con sus futuros hijos.

Un mayor número de mujeres sirias que libanesas manifestaban síntomas de malestar psicológico grave. En los debates con grupos focales, se explicó que esta diferencia se derivaba de la presión o la preocupación (expresada en árabe como *daghet*) resultante del estrés financiero y familiar, la incertidumbre sobre el presente y del futuro, la separación familiar y el estigma asociado a la condición de refugiado. Tener un problema grave incluso en una sola dimensión de la vulnerabilidad debida al entorno se asoció con una tasa significativamente mayor de malestar psicológico severo en comparación con quienes no tenían problemas graves. El número de vulnerabilidades que dan lugar a este tipo de problemas se asoció en mayor medida con el aumento de las tasas de malestar psicológico grave.

Tanto las mujeres libanesas como las sirias mencionaron la interrelación natural de la salud física y la salud mental, y cómo el hecho de tener enfermedades crónicas o dolencias físicas puede llegar a impedir que se traten, y de cómo la salud mental puede manifestarse en forma de síntomas físicos.

Las respuestas de las mujeres

Fueron más las mujeres sirias las que acudieron a servicios para dar respuesta a la violencia, principalmente apoyo psicosocial o servicios de salud mental, mientras que las libanesas optaron más por la educación y la formación profesional. La principal barrera para acudir a los servicios disponibles era que las mujeres simplemente no sabían de su existencia, seguida de la creencia de que no necesitaban servicios para abordar la violencia. Del mismo modo, el principal factor de apoyo para buscar ayuda fue que los servicios estuvieran claramente dirigidos a personas de su origen o condición, en especial para las mujeres sirias. Esto tiene que ver con la forma en que se publicitan los servicios, su ubicación (si están situados en centros urbanos o cerca de los asentamientos

donde viven los refugiados) y su estructura (si se ofrecen como centros independientes o dentro de centros polivalentes gestionados por el Gobierno junto con otros proveedores de servicios).

La mayoría de las mujeres buscaban consuelo en su religión para lidiar con la violencia. La oración fue la única estrategia para afrontar el problema común entre las participantes en la encuesta y las de los grupos focales. Una mujer describió cómo hacía uso de la espiritualidad para hacer frente a las experiencias del día a día: "Subo hasta el final del valle y hablo con Dios. Me siento, me tomo una infusión, me fumo un cigarrillo, grito a pleno pulmón y vuelvo".

Entre las estrategias para la resolución de problemas que, según decían, les resultaban útiles, se encontraba la búsqueda de empleo, contar con los líderes comunitarios para que se responsabilizaran de la seguridad en los asentamientos informales donde se encontraban acampados, y el uso de analgésicos u otra medicación. Alrededor de tres cuartas partes declararon haber buscado asesoramiento sobre qué hacer y consideraron útil el apoyo emocional de personas cercanas. Se describió el llorar o desahogarse como "inútiles", porque la "pena se queda dentro".

Las anecdóticas pruebas recabadas por el personal de ABAAD sugieren que las vulnerabilidades han aumentado significativamente entre todos los residentes del Líbano desde la recopilación de datos que se llevó a cabo en mayo de 2019, ya que muchos han perdido sus ingresos, y las mujeres denuncian mayores niveles de violencia de género y de malestar psicológico. Esta situación se ha agravado aún más desde la explosión que tuvo lugar en Beirut el 4 de agosto de 2020 y el inicio de la pandemia de la COVID-19 que aceleró el colapso económico del Líbano, aisló a las supervivientes de la violencia de género con sus agresores y creó barreras físicas entre las personas afectadas y sus sistemas de apoyo. Además, durante la pandemia, muchos servicios se han suspendido o adaptado, lo que ha hecho que el acceso a los mismos se limite para las supervivientes.

En los debates con grupos focales surgieron palabras como *daghet*, que puede traducirse vagamente como "presión" o "preocupación" y *ghadab*, "ira" o "furia", como sentimientos asociados a una mala salud mental. Aunque en inglés estos términos pueden no ser indicativos de problemas de salud mental, en este contexto la población tiende a subestimar sus síntomas debido al estigma y a la presión social de que hay que "ser fuerte" o saber "reponerse" (*shedde halik*).

Recomendaciones

Los proveedores de servicios deberían tratar de ofrecer servicios integrales (de bajo coste o gratuitos) en materia de violencia de género y de SMAPS, con apoyo para derivar a las personas, en lugares seguros, y todos en las mismas instalaciones, según proceda (para reducir los costes de transporte). Siempre que sea posible, se debería proporcionar un transporte seguro y un servicio de guardería. Las vías de derivación entre los proveedores de servicios en materia de violencia de género y los de SMAPS se podrían ampliar aún más si se garantizan unos que sean adecuados para cada edad. Algunos, como el apoyo psicosocial, solían estar disponibles para los adultos jóvenes y de mediana edad, pero no siempre eran accesibles para los niños, adolescentes y personas mayores.

Las participantes en los grupos focales se refirieron al enorme estigma sobre la búsqueda de ayuda para la salud mental, a la falta de proveedores de servicios cualificados y a la ausencia de espacios seguros y confidenciales en los campamentos como barreras para la atención. Algunos enfoques novedosos, como servicios móviles con un espacio físico, seguro y confidencial para su prestación podrían servir para abordar estas preocupaciones.

Se necesitan sesiones de concienciación para abordar la culpabilización de las víctimas (culpar a las supervivientes de la violencia de género por su experiencia, lo que repercute negativamente en su salud mental y también perpetúa el estigma) y para dirigirse no solo a los miembros de la comunidad, sino también a los propios proveedores de servicios. Los agentes contra la violencia de género deberían seguir llevando a cabo sesiones de concienciación a nivel comunitario sobre género y violencia de género, reconociendo los casos de malestar psicológico y dándoles respuesta, además de ofrecerles estrategias de afrontamiento que les ayuden. Las formaciones deberían incluir medidas de prevención y respuesta a la explotación y los abusos sexuales, especialmente teniendo en cuenta la actual crisis económica. Los agentes que trabajan contra la violencia de género deberían seguir realizando sesiones de sensibilización sobre los efectos físicos, psicológicos y sociales negativos de los matrimonios forzados y prematuros. Las campañas basadas en la comunidad deberían emprender la desestigmatización de las conversaciones sobre salud mental utilizando los términos locales pertinentes. Los que se utilizan para describir la salud mental (o la mala salud) entre esta población se apartan de la terminología habitual (como "depresión", *ikti'eb*).

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

Muchas de las personas participantes en los grupos focales subestimaron sus experiencias con la salud mental utilizando términos más suaves o eufemismos (como *daghet*) para describir síntomas más graves como la ansiedad severa.

Garantizar que los servicios sean claramente accesibles para todos puede ayudar a superar las barreras que impiden su acceso a miembros de la comunidad de acogida, refugiados y trabajadores del hogar que son migrantes; muchos tendrán un conocimiento limitado de la existencia de esos servicios o creerán que no están dirigidos a su grupo demográfico.

Las actividades de empoderamiento económico son importantes para contrarrestar el efecto de las vulnerabilidades relacionadas con el entorno. Los programas deben minimizar activamente el riesgo de violencia de género a raíz del desafío que los ingresos de una mujer supondría para los roles de género dominantes, llevando a cabo una evaluación exhaustiva de las cuestiones de género y violencia de género para fundamentar su diseño, seguimiento y evaluación, con el asesoramiento técnico de los agentes contra la violencia de género.

Por último, es importante reconocer que las personas refugiadas sufren vulnerabilidades específicas y pueden sentirse más cómodas

buscando apoyo de proveedores de servicios cuyo origen sea similar al suyo siempre que sea posible. Contar con los miembros sirios de las organizaciones humanitarias para las tareas de divulgación u otros servicios, o trabajar con proveedores informales de servicios que sean de origen sirio o con los líderes de la comunidad para generar una relación de confianza con los refugiados, podría ayudar a resolver este problema.

Alina Potts apotts@gwu.edu @alina_potts

Investigadora científica, The Global Women's Institute

Rassil Barada rbarada@gm.slc.edu

Asesora en Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual y la Violencia de Género, ABAAD-MENA

Angela Bourassa

abourassa@gwu.edu @ABourassaMPH

Investigadora adjunta, The Global Women's Institute

1. Véase también www.fmreview.org/es/detencion/anani
2. Instituto de investigación con sede en la Universidad George Washington <https://globalwomensinstitute.gwu.edu/>
3. Próxima publicación de los resultados completos examinados por pares.
4. Se empleó la herramienta de evaluación K6+ para medir el malestar psicológico. Véase Segal S P, Khoury V C, Salah R y Ghannam J (2018) "Contributors to Screening Positive for Mental Illness in Lebanon's Shatila Palestinian Refugee Camp", *Journal of Nervous and Mental Disease* 206(1) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28976407>

Enfoques comunitarios de la SMAPS

Dmytro Nersisian, Marine Ragueneau, Heide Rieder y Guglielmo Schinina'

Los límites operativos en contextos humanitarios no siempre permiten dedicar el tiempo y los recursos suficientes a los procesos participativos vitales para establecer enfoques comunitarios de SMAPS.

Las fuentes de estabilidad de la población —como la identidad individual y grupal, el sentido de lugar y pertenencia, y el estatus legal y social— pueden verse menoscabadas por el desplazamiento y los factores de estrés que lleva asociados. La salud mental y el apoyo psicosocial (SMAPS) pueden restablecer la sensación de normalidad, sanar las heridas colectivas y contribuir a la transformación de las identidades individuales y colectivas.

Sin embargo, las respuestas humanitarias suelen estructurarse a partir de unas relaciones de poder desiguales. Se valora más la experiencia profesional en una cuestión que el conocimiento local; y, en ocasiones, se impone la primera. A menudo, no se cuenta con aquellos a quienes más afectan los

programas para su diseño, implementación y evaluación, mientras que las organizaciones responden ante los donantes en vez de hacerlo exclusivamente ante las comunidades afectadas por la crisis a las que sirven. En el ámbito de la salud mental, las culturas, los sistemas de creencias y las dinámicas de poder tienen un gran impacto en la conceptualización de las enfermedades, incluida la sintomatología, y en la configuración de las respuestas como los tratamientos y las intervenciones psicológicas. Por tanto, existe un riesgo inherente de que los programas de SMAPS en contextos humanitarios puedan replicar las dinámicas problemáticas de las intervenciones humanitarias y de la atención para la salud mental, a) centrándose en las vulnerabilidades

de los desplazados forzosos, sin tener en cuenta su capacidad de recuperación y su voluntad; b) entendiendo las reacciones a la adversidad desde un enfoque biomédico y, por lo tanto, arriesgándose a patologizar a los participantes en los programas de SMAPS; y c) creando sistemas de dependencia de la asistencia que perpetúen las dinámicas de poder desiguales.

Una forma de sortear estos riesgos y, en su lugar, apoyar a las comunidades afectadas por la crisis a la hora de desarrollar sus propias respuestas a la adversidad es utilizar enfoques comunitarios, es decir, enfoques basados en la idea de que las comunidades pueden impulsar sus propios cuidados y su propio cambio, y que deberían participar significativamente en todas las etapas de las respuestas en materia de SMAPS.

Los enfoques comunitarios sobre SMAPS se caracterizan por:

- Entender la importancia de las reacciones colectivas ante la adversidad y de la cohesión social para determinar el bienestar individual y social.
- La activación de sistemas de apoyo multidisciplinarios y específicos para cada contexto que se basen en las fortalezas de las comunidades afectadas, en lugar de limitarse a prestar servicios para subsanar las carencias provocadas por la emergencia.
- El compromiso de participación de las comunidades en todas las fases de los proyectos.
- El objetivo de restablecer o reforzar las estructuras y sistemas colectivos esenciales para su día a día y para su bienestar¹.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha identificado siete niveles diferentes de participación comunitaria en los programas de SMAPS². En los tres primeros niveles, en los que las comunidades no tienen ningún poder de decisión, la información se comparte con las comunidades, se obtiene de ellas, o simplemente se les consulta. Los dos niveles siguientes son, en primer lugar, aquellos en los que las comunidades participan en la planificación de actividades, pero su poder sigue siendo limitado (lo que se conoce como participación comunitaria "funcional") y, en segundo lugar, aquellos en los que las comunidades participan completamente en los procesos de toma de decisiones (participación "interactiva"). Los dos últimos niveles se caracterizan por la apropiación comunitaria,

en la que las comunidades controlan la toma de decisiones y los organismos actúan como facilitadores; y por el empoderamiento, por el que las comunidades son capaces de responder a las necesidades existentes con un apoyo externo limitado. Aunque los programas de SMAPS deberían siempre apuntar a niveles de empoderamiento de la comunidad, el personal debe tener claras sus limitaciones.

Un enfoque comunitario en Bangladés y Sudán del Sur

Los programas de la OIM en Bangladés y Sudán del Sur demuestran lo necesaria que es una evaluación participativa continua y la importancia de trabajar junto con la sociedad civil y las partes interesadas del Gobierno en el sector de la SMAPS para fomentar la capacidad de prestar servicios y el intercambio de conocimientos, lo que perdurará más allá de cualquier intervención única de salud mental y apoyo psicosocial.

En Bangladés, donde se estima que hay 720 000 rohinyás desplazados, los equipos de SMAPS de la OIM trabajan con voluntarios de la comunidad, tanto de la rohinyá como de la de acogida; y colaboran, entre otros, con curanderos tradicionales y líderes religiosos. Como las estrategias de resolución de problemas señaladas por las comunidades se basaban en el apoyo familiar y social y las prácticas religiosas, los equipos se centraron en facilitar actividades colectivas basadas en la preservación de la cultura, en ritos y celebraciones. Entre estas actividades se incluían la creación de cocinas colectivas, facilitar el diálogo familiar, la celebración de ceremonias de sanación y la creación de un Centro de Memoria Cultural (CMC). Las cocinas y los diálogos familiares proporcionaron espacios seguros para debatir cuestiones apremiantes. Además, reunirse de manera informal para una actividad tradicional fomentó el sentimiento de comunidad. Las ceremonias de sanación tenían un fuerte componente intergeneracional y permitían a los miembros de la comunidad participar del relato histórico y de su identidad cultural y comunitaria, además de aumentar las oportunidades de conexión social. El CMC, a través de la recopilación, producción y exposición de artesanía tradicional ofrecía una forma de participación a los miembros de la comunidad rohinyá para preservar su identidad y su patrimonio cultural, y para garantizar asimismo su continuidad entre las generaciones más jóvenes.

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

La preservación de la identidad colectiva y el patrimonio cultural demostraron ser componentes indispensables para restablecer y mantener la salud mental, y el bienestar psicosocial de los individuos y de la comunidad rohinyá en general.

Los programas de SMAPS suelen hacer hincapié en la sostenibilidad mediante el refuerzo de los sistemas de servicios sanitarios y sociales. En Sudán del Sur, donde 7,5 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, incluidos 1,3 millones del total de 1,6 millones de desplazados internos del país, no es posible llegar a una gran parte de la población a través de los servicios de salud mental existentes. Por tanto, el programa de la OIM se centra en reforzar las estructuras y el apoyo familiar y de la comunidad, en colaboración con los proveedores de servicios sociales y de salud actuales. Además de ofrecer servicios directos a las comunidades desplazadas en entornos de tipo campamento, el programa amplió el alcance de sus intervenciones, en 2017, para incluir el desarrollo de las capacidades de las partes interesadas gubernamentales y para atender a las comunidades de acogida. A través de una colaboración con el Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social, el programa incluye actualmente a 35 trabajadores sociales del Ministerio estatal en Wau, en Bahr el Ghazal Occidental que complementan al personal de la OIM dedicado a la SMAPS. Esto ha contribuido a la profesionalización y a la adquisición de experiencia práctica de este grupo concreto a través de la capacitación durante el servicio, que combina destrezas propias del trabajo social y de la SMAPS como la asistencia individualizada, los primeros auxilios psicológicos, la orientación básica y la derivación.

Los trabajadores sociales se centran en desarrollar la autosuficiencia y el albedrío de los miembros de la comunidad. Gracias a su constante presencia y colaboración, se han ganado la confianza de los líderes y miembros de la comunidad, lo que ha posibilitado iniciar debates sobre temas críticos como el embarazo precoz, el consumo de drogas y la violencia juvenil, y derivar a los afectados a los servicios pertinentes en caso necesario.

Los trabajadores sociales y el personal especializado en SMAPS también facilitan conjuntamente sesiones de diálogo intergeneracional en las comunidades de acogida y en las zonas de retorno, trabajando directamente o en colaboración con ONG nacionales. Así, a los jóvenes y a los mayores

se les concede el mismo espacio para expresar sus quejas: la falta de respeto y de conexión dentro del sistema familiar que experimentan los mayores; y el abandono que sufren los jóvenes. Este proceso requiere de tiempo y de repetidas visitas del personal a las mismas familias y comunidades para que tenga éxito. El trabajo con los trabajadores sociales y demás personal dedicado a la atención sanitaria y los servicios sociales sienta las bases para que la comunidad impulsada por el empoderamiento colabore en los programas de SMAPS, transfiriéndole así los recursos e intercambiando conocimientos con aquellos agentes nacionales que seguirán prestando servicios una vez que los socios humanitarios se hayan marchado.

Un enfoque comunitario de la SMAPS es fundamental para respaldar la capacidad de resiliencia y la voluntad de las personas y las comunidades que se encuentran en contextos de desplazamiento; para proporcionar unos servicios de SMAPS éticos, culturalmente apropiados y sostenibles a las personas de diversos orígenes; y para abordar el bienestar psicosocial individual y comunitario dentro de unas estructuras sociales, políticas y económicas más amplias que afectan a la vida de las personas desplazadas. Aunque los contextos de emergencia y las estructuras humanitarias, en general, no suelen fomentar los enfoques comunitarios en materia de SMAPS, el apoyo de las comunidades sigue siendo posible si los agentes colaboran con ellas y se aseguran de que los programas reflejen sus necesidades y recursos particulares.

Dmytro Nersisian dnersisian@iom.int
Director de programa SMAPS, Bangladés

Marine Ragueneau contactpss@iom.int
Coordinadora, Sección Global de Salud Mental, Respuesta Psicosocial y Comunicación Intercultural

Heide Rieder hrieder@iom.int
Directora de programa SMAPS, Sudán del Sur

Guglielmo Schinina
[@metonimia](mailto:contactpss@iom.int)
Jefe de la Sección Global de Salud Mental, Respuesta Psicosocial y Comunicación Intercultural

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Las opiniones expresadas en este artículo son las de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la OIM.

1. IASC Community-Based Approaches to MHPSS Programmes: A Guidance Note bit.ly/IASC-MHPSS-community-based
2. OIM (2019) Manual on Community-Based MHPSS in Emergencies and Displacement www.iom.int/mhpssd

Actividad física, salud mental y apoyo psicosocial

Simon Rosenbaum, Alastair Ager, Leslie Snider, Ajwang Warriia, Holly Collison, Sabrina Hermosilla y Davy Vancampfort

La actividad física (incluido el deporte) es una estrategia con base empírica, aunque poco reconocida, para proteger y promover la SMAPS entre las poblaciones desplazadas.

A nivel mundial, el reconocimiento de la relación entre la salud física, la salud mental y el bienestar psicosocial está aumentando rápidamente. Dado que la salud mental, al igual que la salud física, es una cuestión transversal, un gran número de sectores, organismos y actores tienen su papel a la hora de conseguir resultados óptimos en este ámbito para las poblaciones de desplazados forzados. Cada vez más, tanto en entornos de altos como de bajos recursos, se están integrando profesionales de la actividad física con formación en salud mental en equipos multidisciplinares que promueven la salud mental y el bienestar psicosocial. Deberían valorarse oportunidades similares para las poblaciones desplazadas para maximizar el impacto potencial de la actividad física como estrategia de SMAPS.

La actividad física¹ suele verse como la piedra angular de la prevención y el tratamiento de las enfermedades no transmisibles; pero las poblaciones más vulnerables de todo el mundo, entre ellas las que viven en situación de desplazamiento, las mujeres y las personas con discapacidad suelen ser las que menos acceso tienen a programas específicos, infraestructuras u oportunidades para la actividad física. Sin embargo, es más que evidente el valor de integrar las intervenciones basadas en la actividad física como un componente rutinario de la atención a la salud mental —como la provisión de servicios de SMAPS— que se presta a las poblaciones desplazadas.

La actividad física es una estrategia probada tanto para prevenir como para tratar los trastornos mentales, para promover el bienestar y la conexión social, y para fomentar el sentimiento de comunidad. Esto incluye aliviar la carga de los trastornos mentales reduciendo los síntomas de depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno de estrés postraumático y trastornos por consumo de sustancias². Las pruebas señalan que, en lo que respecta a los beneficios para la salud mental, el tipo o la intensidad de la actividad física son menos importantes que

el tiempo total dedicado. Otro factor clave es priorizar el disfrute, fomentar la autoeficacia (la creencia de un individuo en su capacidad para alcanzar objetivos de rendimiento específicos) y la preferencia personal, factores de predicción todos ellos del compromiso a largo plazo con la actividad física.

La actividad física y el deporte deben considerarse en los niveles 2-4 de la pirámide del IASC³, incluso como parte del apoyo comunitario y familiar (nivel 2), como apoyo no especializado (nivel 3) y como componente de la atención especializada del SMAPS (nivel 4)⁴. Los juegos y actividades físicas propias del lugar de origen de los migrantes pueden ser una parte importante de su pasado y contribuir a preservar la cultura y a conectar con futuras narrativas sobre el dolor y la sanación. El deporte y la actividad física pueden también desempeñar un papel importante para la integración de los desplazados en las comunidades.

Además de reducir los síntomas de los trastornos mentales, están apareciendo evidencias que demuestran que la actividad física protege contra futuros episodios de mala salud mental. Entre los niños que están expuestos a acontecimientos adversos durante la infancia, su participación en deportes de equipo les protege contra futuros trastornos mentales. Y es que la participación en el deporte está reconocida como un factor fundamental para alcanzar las cinco “C” del desarrollo positivo infantil: competencia, confianza, carácter, conexiones y compasión/aprendizaje. Esto es además de contribuir al desarrollo social y emocional de los niños de todas las edades respecto a la resolución de conflictos, los principios de la ecuanimidad, el desarrollo de la iniciativa, el liderazgo y la comunicación no violenta.

La actividad física, la SMAPS y los contextos humanitarios

Los rohinyás en Bangladés: Una evaluación rápida realizada en Cox's Bazar, en 2019, halló que los refugiados rohinyás identificaban

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

la actividad física como una estrategia psicosocial que ayudaba a aliviar la “tensión”, una expresión local para referirse al malestar psicológico⁵. La falta de recursos (incluidos espacios y equipación) era el mayor obstáculo para la participación, a pesar del fuerte apoyo a la actividad física por parte de los líderes comunitarios. El acceso para determinados colectivos estaba limitado también, como las personas con discapacidad, los adultos más mayores y, debido al miedo por su seguridad y a las actitudes culturales, las mujeres. El informe ofrece recomendaciones para los proveedores de SMAPS, entre las que se incluyen la promoción de juegos y actividades respetuosos con la cultura, garantizar que el personal en materia de SMAPS cuente con formación y sea consciente de los beneficios de la actividad física, y el uso de espacios adaptados diseñados a medida para poder ofrecer programas de actividad física a mujeres y niños⁶.

ClimbAID: ClimbAID es una organización sin ánimo de lucro de deporte para el desarrollo que utiliza la escalada como intervención psicosocial y de salud mental. Su programa

en el Líbano incluye el “Rolling Rock”, un rocódromo móvil que lleva la escalada enfocada en la SMAPS y otras actividades físicas a niños y jóvenes de la población local y de la comunidad refugiada. Los resultados preliminares de la evaluación del programa ClimbAID destacan su contribución a la mejora de las relaciones entre las comunidades de refugiados y las de acogida, al cuestionamiento de los sesgos de género y al aumento de la autoeficacia.

El surf terapéutico: El surf se utiliza en poblaciones vulnerables de todo el mundo para promover la salud, el empoderamiento, las mentorías, la inclusión y la asociación con la comunidad. Los principios y el aprendizaje de los programas de surf terapéutico y la creación de la International Surf Therapy Organization (Organización Internacional de Surf Terapéutico)⁷ proporcionan una base para desarrollar, evaluar y ampliar los programas de actividad física con objetivos orientados a la salud mental.

Arsenal Football Club y Save the Children: Coaching for Life, una alianza entre un



ClimbAID / Jameson Schultz

Sesión de escalada basada en el apoyo psicosocial a cargo de ClimbAID en Saadnayel, Valle de la Becá, Líbano.

equipo de fútbol profesional y una ONG, se creó en respuesta al estudio de investigación realizado por Save the Children como estrategia de SMAPS para abordar las consecuencias negativas de una exposición prolongada al estrés en los niños. El proyecto piloto se llevó a cabo en Jordania e Indonesia y utiliza el fútbol para ayudarles a desarrollar habilidades en materia de gestión de las emociones, comunicación, toma de decisiones, autoestima y gestión de conflictos.

Competencia versus participación en Uganda:

No todos los programas de deporte para el desarrollo tienen un impacto positivo sobre los resultados en materia de salud mental y apoyo psicosocial. En el norte de Uganda, se descubrió que una liga de fútbol competitiva había tenido un impacto negativo sobre la salud mental de los niños que participaron. Las recomendaciones resultantes destacan la necesidad de mejorar la capacidad local y la provisión de recursos para la actividad física recreativa de carácter no competitivo, y la importancia de integrar la formación en SMAPS para entrenadores y profesionales del deporte⁸.

La Olympic Refuge Foundation (ORF):

La ORF fue fundada en 2017 por el Comité Olímpico Internacional (COI) con el fin de contribuir a la protección, el desarrollo y el empoderamiento de los niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad a través del deporte. El *Sport for Protection Toolkit: Programming with Young People in Forced Displacement Settings* (Kit de herramientas “Deporte para la Protección: programa para jóvenes en contextos de desplazamiento forzado”)⁹ fue el resultado de una colaboración interinstitucional entre ACNUR, el COI y Terre des Hommes para desarrollar un recurso práctico con el que los profesionales que trabajan con el deporte pudieran mejorar los resultados para la población joven que vive en situación de desplazamiento. Incluye orientación teórica y práctica paso a paso. Tras el éxito del desarrollo del kit de herramientas, en julio de 2020, se llevó a cabo el lanzamiento del laboratorio de ideas de la ORF, con el objetivo de aumentar la visibilidad del papel del deporte como estrategia de SMAPS con base empírica, al tiempo que se contribuye a generar evidencias y recursos. El laboratorio de ideas de la ORF incluye a representantes de diversos ámbitos, como el desarrollo internacional y los contextos de emergencia, las disciplinas clínicas

(psiquiatría, psicología, fisioterapia, fisiología del ejercicio), la protección de la infancia, la educación y los programas posconflicto. Esta diversidad ofrece una oportunidad de romper el tradicional hermetismo sectorial que existe en los contextos humanitarios y ayudará a alcanzar unos resultados tangibles con un elevado impacto potencial.

Integrar la actividad física como núcleo de la SMAPS

Los profesionales de la SMAPS y el deporte que trabajan con comunidades desplazadas pueden aprovechar todo el potencial de la actividad física para proteger y promover la salud mental y el bienestar psicosocial de diversas maneras. En primer lugar, los profesionales de la SMAPS han de contar con formación en los principios básicos de la promoción de la actividad física y quienes se encarguen de impartir programas de actividad física y deportiva deberían, como mínimo, tener formación en lo que respecta a los principios y destrezas básicas de apoyo psicosocial, incluidos los primeros auxilios psicológicos. En segundo lugar, se necesita un nivel básico de infraestructuras para impartir programas de actividad física y deportiva y garantizar que no se deje atrás a los más vulnerables. En tercer lugar, resultaría fundamental pensar no solo en los hombres jóvenes y sin impedimentos físicos y ampliar los servicios de actividad física para incluir de forma segura y adecuada a las mujeres y a las personas con discapacidad. Por último, la actividad física —y los deportes de equipo en particular— pueden ofrecer la oportunidad de actuar como mentorías o vías hacia la consecución de un medio de subsistencia, y estas deberían tenerse en cuenta a la hora de desarrollar programas de actividad física cuyo objetivo sea la SMAPS.

Simon Rosenbaum

s.rosenbaum@unsw.edu.au @simon_rosenbaum
Profesor adjunto, Facultad de Psiquiatría, UNSW Sídney

Alastair Ager aager@qmu.ac.uk @AlastairAger

Profesor, Institute for Global Health and Development, Universidad Queen Margaret

Leslie Snider les@redbarnet.dk @LeslieMSnider

Directora, The MHPSS Collaborative, auspiciado por Save the Children Dinamarca

Ajwang Warria ajwang.warria@wits.ac.za

Profesora titular, Universidad del Witwatersrand

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

Holly Collison *H.Collison@lboro.ac.uk*
Profesora titular, Institute for Sport Business,
Universidad de Loughborough, Londres

Sabrina Hermosilla
shermosi@umich.edu @HermosillaSabri
Investigadora, Universidad de Michigan

Davy Vancampfort *davy.vancampfort@kuleuven.be*
@DavyVancampfort

Profesor adjunto, Departamento de Ciencias de la
Rehabilitación de la KU Leuven y Centro Psiquiátrico
Universitario de la KU Leuven

1. La actividad física se refiere a cualquier movimiento corporal e incluye el deporte y el ejercicio.
2. Ashdown-Franks G et al (2020) "Exercise as Medicine for Mental and Substance Use Disorders: A Meta-review of the Benefits for Neuropsychiatric and Cognitive Outcomes", *Sports Medicine* 50(1) <https://link.springer.com/journal/40279/volumes-and-issues/50-1>
3. IASC (2007) *Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes* pp11-13 bit.ly/IASC-MHPSS-guidelines-sp

4. Stubbs et al (2018) "EPA guidance on physical activity as a treatment for severe mental illness: a meta-review of the evidence and Position Statement from the European Psychiatric Association (EPA), supported by the International Organization of Physical Therapists in Mental Health (IOPTMH)", *European Psychiatry* <http://doi:10.1016/j.eurpsy.2018.07.004>

5. Wells R et al (2019) "Physical activity as a psychosocial intervention among Rohingya refugees in Bangladesh: a rapid ecological community assessment", *Intervention* 17(2) bit.ly/Intervention-Wells-et-al-2019

6. Ahmed M S et al (2019) "Sports and physical activity in psychosocial interventions with adolescent groups of the Rohingya community in Bangladesh: potential, limitations and critical factors for success", *Intervention* 17(2) bit.ly/Intervention-Ahmed-et-al-2019

7. <https://intlsurftherapy.org>

8. Richards J et al (2014) "Physical fitness and mental health impact of a sport-for-development intervention in a post-conflict setting: randomised controlled trial nested within an observational study of adolescents in Gulu, Uganda", *BMC Public Health* 14(1) bit.ly/BMCPublicHealth-Richards-et-al-2014

9. bit.ly/Sport-for-protection-toolkit-2018



ACNUR/Hussein Baydoun

"Cuando surfeo, me olvido de todo", dice Ali, un refugiado sirio de 16 años que surfea las olas de Jiyeh, al sur de Beirut.

Del lugar al espacio: reflexión sobre la adaptación en los campos de los espacios adaptados a los niños durante la COVID-19

Janna Metzler, Aimyleen Gabriel, Frieda Mwebe y Kevin Savage

Aunque la COVID-19 no se percibe actualmente como una amenaza grave para la salud de los niños, las repercusiones indirectas que la pandemia tiene en sus vidas y en su bienestar psicosocial pueden ser profundas. Por tanto, los espacios adaptados a los niños pueden ser aún más importantes, especialmente en los frágiles contextos de desplazamiento.

Los Espacios Adaptados a los Niños (CFS, por sus siglas en inglés) —una de las intervenciones humanitarias más utilizadas para apoyar, cuidar y proteger a los niños refugiados y desplazados— ofrecen lugares físicos que son entornos seguros y estables para que estos prosperen y alcancen los hitos de su desarrollo. Los objetivos primordiales de los CFS son promover su bienestar psicosocial, servir como mecanismo de protección contra el abuso, la explotación y la violencia, así como movilizar a las comunidades para que apoyen, cuiden y protejan a los niños¹. Aunque existen versiones móviles, los CFS suelen ser estáticos; ofrecen una serie de actividades estructuradas y de juego no estructurado que promueven que los menores establezcan vínculos significativos con sus semejantes y con los adultos, fomentan su capacidad de alfabetización funcional y mejoran su bienestar psicosocial.

Sin embargo, los modelos tradicionales que se emplean para los programas de salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS) no han sido diseñados para contextos de epidemias, como la de ébola o la pandemia de COVID-19, en los que las medidas de salud pública para reducir la transmisión de enfermedades infecciosas y salvar vidas imponen unas restricciones drásticas al movimiento, la interacción social y la prestación de servicios. En medio de la pandemia de coronavirus, intervenciones como los CFS se ven obligadas a quedar en pausa debido al riesgo de transmisión, por lo que los profesionales se enfrentan como nunca antes al desafío de dar con la forma de contribuir al bienestar social y emocional de los niños, principalmente a través de medios remotos. Nos hemos preguntado cómo podemos trasladar la premisa original de estos modelos de prestación de servicios basados en el lugar al contexto de la COVID-19. ¿De qué forma podemos cambiar de un lugar físico a un espacio conceptual que se mantenga fiel a los objetivos originales

y a los resultados probados² de los CFS? ¿Es posible promover unos resultados positivos en materia psicosocial y de salud mental para los niños, al mismo tiempo que se mitiga el riesgo de transmisión de la COVID?

Comenzamos a explorar estas cuestiones entre los programas de CFS (en respuesta a la crisis de refugiados en el Nilo Occidental, Uganda) a través de un ensayo aleatorio controlado iniciado en 2018. Con la declaración de la pandemia en marzo de 2020, el Gobierno ugandés ordenó el cierre de todas las instituciones educativas, incluidos los CFS. Solo se permitió la continuación de los servicios considerados esenciales y los que eran necesarios para salvar vidas. Ahora estamos recurriendo a nuestro trabajo existente para determinar cuál es la mejor manera de adaptar los CFS para abordar las necesidades actuales en materia de salud mental y apoyo psicosocial de los menores y sus familias como consecuencia y en el contexto de la COVID-19. A partir de esta experiencia, hemos desarrollado cuatro series de recomendaciones para adaptar la programación de los CFS y para detectar diferentes modalidades de aprendizaje que ya están en uso o accesibles para los niños dentro de sus comunidades.

El bienestar de los cuidadores

Más de un tercio de los niños y sus cuidadores encuestados mencionaron nuevas fuentes de estrés para estos últimos o relacionadas con la prestación de cuidados en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Algunas de ellas son el cierre de las iglesias, el cierre de las fronteras (que restringe los traslados de vuelta a Sudán del Sur), la inseguridad económica, la falta de bienes materiales para cubrir las necesidades básicas, la falta de apoyo de los familiares y el miedo al propio coronavirus. También se registraron nuevos estresores relacionados con la COVID para los cuidadores

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66



ACONUR/Esther Ruth Mbabazi

Tras el cierre de las escuelas en Uganda a causa de la pandemia, los docentes han preparado clases para aprender desde casa para que los niños refugiados puedan seguir estudiando.

cuando se redujo la exposición de los niños a sus amistades. Los dos estresores más frecuentes a los que se hizo referencia fueron la falta de alimentos y de acceso a la educación.

En el Nilo Occidental, el personal local ya había organizado actividades móviles que les permitían llegar hasta los cuidadores y sus hijos en los campamentos, respetando las medidas de seguridad y el distanciamiento social. Los cuidadores reciben sesiones de crianza positiva que siguen el Manual de Crianza del Ministerio de Género, Trabajo y Desarrollo Social de Uganda y el Módulo de Crianza de World Vision. Cuando se preguntó a los cuidadores y a los niños qué método de aprendizaje preferían para que se les impartiera educación durante la situación de la COVID, la radio fue el más mencionado, aunque también se apuntó de manera abrumadora a los libros y los materiales impresos. Por tanto, las emisiones de radio podrían ser un medio útil y de gran alcance para promover mensajes de crianza positiva y para disipar cualquier estigma o información errónea relacionada con la COVID. Las emisiones de radio pueden incluir información sobre la COVID, la prevención de la violencia, el autocuidado y la conciencia plena, el deporte y el ejercicio físico autodirigido, y actividades de alfabetización funcional y aritmética. Dado que aproximadamente solo una cuarta parte de los participantes posee

una radio en el hogar, sería ideal distribuir estos aparatos y contar con un programa para su mantenimiento. Las campañas existentes para proporcionar radios a los hogares a cargo de menores pueden ampliarse para seguir respaldando los objetivos de los CFS para todos los niños del campo en el que se encuentra su asentamiento. Estas campañas también pueden proporcionar materiales directos a las familias, ya sea informativos, educativos o de comunicación o kits de juegos psicosociales para acompañar las actividades dirigidas por los facilitadores durante las emisiones radiofónicas.

El apoyo comunitario a las familias

Dado que el acceso a la comunidad es ahora más difícil debido a las restricciones de la COVID-19, varios colectivos comunitarios han liderado los esfuerzos para reducir la transmisión de la enfermedad e identificar a las familias que necesitan apoyo psicosocial general y ayuda especializada en materia de salud mental. Trabajadores sanitarios con formación y voluntarios de la comunidad han colaborado en la difusión de mensajes sobre la COVID. Esta iniciativa podría ampliarse para desarrollar y difundir mensajes sobre SMAPS adaptados a los niños y para reforzar los esfuerzos de los colectivos comunitarios, de los comités de protección de la infancia y de los líderes religiosos que ya trabajan en informar

para prevenir la propagación del virus y abordar el estigma y otros conceptos erróneos.

Los trabajadores sociales y los miembros de los comités de protección de la infancia han trabajado juntos para identificar y derivar los casos de alto riesgo de problemas de salud mental y movilizar más recursos para los niños con discapacidad. Los métodos tradicionales de asistencia individualizada se han adaptado para ofrecer apoyo a distancia por medio de teléfonos móviles con los que se hace un seguimiento de los casos, y se contacta regularmente con los cuidadores, sobre todo con aquellos cuyo caso se considera de alto riesgo. No obstante, muy pocos hogares tienen acceso a teléfonos móviles. En medio de este vacío, los miembros de los comités de protección de la infancia han desempeñado una importante labor como intermediarios entre el trabajador social y los cuidadores. Reforzar las competencias de los miembros de los comités de protección de la infancia en materia de Primeros Auxilios Psicológicos, como componente clave de un conjunto de herramientas más amplio, puede mejorar su comprensión de cuál es la mejor manera de responder a las personas que sufren malestar psicológico, lo que conduce a una adecuada detección y derivación de los casos de alto riesgo en cuanto a problemas de salud mental. Un reciente estudio llevado a cabo tras el brote de ébola en Sierra Leona observó que incluso una formación de un día resultaba efectiva, aunque quienes la habían recibido debían seguir formándose con instructores cualificados para actualizarse y garantizar que los conocimientos adquiridos se apliquen correctamente³.

Los clubes infantiles y juveniles

En su inmensa mayoría, los niños encuestados señalaron que no poder volver a la escuela —y estar con sus amigos— era su principal fuente de preocupación. Antes del cierre de los CFS en el asentamiento, los clubes infantiles y juveniles podían reunir a los menores y promover la cohesión social, la consolidación de la paz y la protección de la infancia, y también servían para permitirles liderar la defensa de algunas causas. En ausencia de los CFS, estos pequeños clubes infantiles y juveniles han prosperado fuera de los confines de su antigua sede. Facilitadas por colectivos comunitarios y líderes religiosos, entre sus actividades se incluyen las que normalmente tendrían en los CFS. Los grupos siguen una serie de sesiones

adaptadas de un plan de estudios para la consolidación de la paz dirigido por los niños. Los miembros de los clubes infantiles que cuentan con formación en periodismo también han ayudado en las actividades de respuesta a la COVID a través de información adaptada a los niños sobre la prevención del coronavirus y la higiene personal, ya sea cara a cara o a través de teléfonos móviles, compartiendo información sobre la protección de la infancia a través de la radio y durante las reuniones comunitarias, y promoviendo la protección de los menores frente a la violencia. Los miembros de los clubes también se dirigen a los hogares encabezados por menores para hacerles llegar mensajes básicos sobre protección infantil y apoyo psicosocial.

Aunque no se recomiendan durante la respuesta sanitaria a un brote, estos clubes infantiles y juveniles pueden resultar un vehículo útil para los esfuerzos de respuesta liderados por niños, incluido el desarrollo y la difusión de información sobre la SMAPS y la protección de la infancia que podría salvar vidas. Estos pequeños grupos pueden además contar con el apoyo de miembros de la comunidad y voluntarios para adaptar los currículos psicosociales existentes (como el Catálogo de actividades de los Espacios Adaptados a los Niños) para realizar ejercicios entre semejantes o en pequeños grupos⁴. Por último, un nuevo módulo desarrollado por World Vision sobre enfermedades infecciosas puede ayudar a los clubes infantiles y juveniles a adaptar los mensajes y materiales relativos a la salud mental y psicosocial a los niños y adolescentes.

La defensa de la SMAPS y de la protección de la infancia como servicios esenciales

El cierre de los CFS como servicio no esencial por parte del Gobierno supuso que la tan necesaria protección de la infancia y el apoyo en materia de SMAPS fueran inaccesibles. Gracias a los esfuerzos de defensa del programa de CFS y la colaboración con la task force local sobre la Protección de la Infancia, se pudieron reintroducir gradualmente los servicios de protección de la infancia y de SMAPS a través de trabajadores sociales, sanitarios con formación al respecto, docentes y líderes comunitarios. Las modalidades de prestación de servicios descritas anteriormente se adaptaron rápidamente en consulta con las comunidades, incluidos los niños. Se identificaron los casos de alto riesgo para la

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

salud mental y la protección de la infancia trabajando de cerca con los distintos colectivos y sectores de los campamentos. Los grupos de coordinación para la protección de la infancia colaboran frecuentemente con las autoridades locales para compartir novedades relativas a la evaluación, con el fin de respaldar la defensa de la causa y mejorar la respuesta a las lagunas en los servicios de protección de la infancia y de SMAPS.

Conclusión

Los testimonios de epidemias pasadas demuestran que, en estos contextos, los niños se enfrentan a un mayor riesgo de sufrir violencia, abandono, abusos y explotación, y a la interrupción o colapso de los servicios, incluidos los sistemas de protección, lo que hace que programas como las SMAPS sean aún más cruciales⁵. Como las operaciones humanitarias en todo el mundo se han visto muy afectadas por la COVID-19, la adaptación de sus programas se ha convertido en un punto clave para los organismos: ¿cómo se podrían adaptar las herramientas y los enfoques para mantener los servicios esenciales y la ayuda humanitaria por igual?⁶ Esperamos que nuestras reflexiones sean útiles para quienes estén tratando de responder a esta pregunta y adaptarse en los próximos años mientras seguimos lidiando con esta y con futuras pandemias. Actualmente, World Vision está priorizando el aprendizaje y la adaptación de sus herramientas y enfoques básicos a la COVID-19 y busca colaboración y alianzas, en especial en materia de protección de la infancia y SMAPS.

Janna Metzler jl2200@cumc.columbia.edu
Profesora asistente adjunta, Mailman School of Public Health, Universidad de Columbia

Aimyleen Gabriel

aimyleen.gabriel@worldvision.org.uk

Asesora superior del Programa de Protección de la Infancia, World Vision UK

Frieda Mwebe frieda_mwebe@wvi.org

Especialista en Protección de la Infancia en Situaciones de Emergencia, World Vision International

Kevin Savage kevin_savage@wvi.org

Director de Investigación Humanitaria, World Vision International

Los autores agradecen la contribución de los equipos de WV Uganda y Africhild que han respaldado el estudio sobre los Espacios Adaptados a los Niños (CFS) en el que se basa este artículo, que fue financiado por Elrha, R2HC, el DFID, Wellcome Trust y el NIHR.

1. Grupo Temático sobre Educación Mundial, Grupo Temático Mundial sobre Protección, INEE y UASC (2011) *Guidelines for child friendly spaces in emergencies* <https://inee.org/resources/guidelines-child-friendly-spaces-emergencies>
2. Hermosilla S, Metzler J, Savage K, Musa M y Ager A (2019) "Child friendly spaces impact across five humanitarian settings: a meta-analysis", *BMC Public Health* 19(1): 576 <https://doi.org/10.1186/s12889-019-6939-2>; Metzler J, Savage K, Yamano M and Ager A (2015) *Evaluation of Child Friendly Spaces: An inter-agency series of impact evaluations in humanitarian emergencies* DOI: 10.13140/RG.2.1.2745.4807
3. Sijbrandij M et al (2020) "The Effect of Psychological First Aid Training on Knowledge and Understanding about Psychosocial Support Principles: A Cluster-Randomized Controlled Trial", *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17(2) www.mdpi.com/1660-4601/17/2/484
4. <https://app.mhpps.net/?get=49/cfs-activity-catalogue.pdf>
5. World Vision International (2020) COVID-19 *Aftershocks: Secondary impacts threaten more children's lives than disease itself* bit.ly/WVI-C19Aftershocks-2020
6. ACAPS (2020) COVID-19 Impact on humanitarian operations: Quick survey bit.ly/ACAPS-covid-impact-survey-April2020

Colaborar con RMF para impulsar la oferta de financiación

Los proveedores de financiación quieren ver cómo se divulgan sus hallazgos, resultados y lecciones a un público lo más amplio posible, incluidos los encargados de la formulación de políticas. Y quieren pruebas de su repercusión. Es aquí donde RMF puede ayudarle.

Valore la posibilidad de incluir un número o un suplemento de RMF en su propuesta (y presupuesto) para aumentar el nivel de divulgación y de repercusión de los resultados de su proyecto. Nosotros podemos ofrecerle información y presupuestos a medida, además de pruebas de nuestro alcance y repercusión. Si desea hablar sobre las opciones disponibles, contacte con las editoras a través de la dirección de correo electrónico fmr@qeh.ox.ac.uk.

Datos y pruebas sobre el desplazamiento forzado: reflexiones sobre los avances y los retos

Ewen Macleod

En las últimas décadas, las comunidades humanitarias y de desarrollo han logrado avances sustanciales en lo que respecta a la recopilación y el uso de datos en los que basar los programas. Pero siguen existiendo importantes retos y lagunas que requieren de nuevos enfoques y alianzas.

Cuando en septiembre de 2015 se adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 en Nueva York, su ambición por “no dejar a nadie atrás” y “llegar primero a los más rezagados” fue el reflejo de una renovada solidaridad mundial sobre una mayor reducción de la pobreza. Aunque los propios ODS no contenían disposiciones específicas para las poblaciones desplazadas y marginadas, parecía claro que su inclusión era una prioridad si se quería cumplir con ese objetivo específico. Menos obvio resultaba cómo se generaban los datos y las pruebas para demostrar cómo se realizarían avances en materia de desarrollo entre esas poblaciones. En especial, ¿cómo podrían aprovecharse los avances en materia de datos y tecnología digital para llegar a aquellos países y personas aparentemente atrapados en una larga espiral de conflictos, exclusión y pobreza?

Las disposiciones detalladas de los ODS incluyen un útil, aunque ambicioso, conjunto de objetivos e indicadores para medir los progresos¹ en la Agenda 2030. Se inspiraron en parte en los rápidos avances de la tecnología y las competencias digitales que habían permitido ampliar y hacer más eficiente la captura de datos durante las dos décadas anteriores. La necesidad de contar con datos y evidencias más precisas también se puso de manifiesto en el Pacto Mundial sobre los Refugiados y en el Pacto Mundial para la Migración, respectivamente.

Debido sobre todo a los esfuerzos del Grupo de Expertos sobre Estadísticas de los Refugiados y los Desplazados Internos (EGRIS, por sus siglas en inglés) establecido bajo el auspicio de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en 2016, se desarrolló un indicador específico para la inclusión de las poblaciones desplazadas². Es un buen augurio para una inclusión más sistemática de estos colectivos en los esfuerzos nacionales para las estadísticas y la recopilación de datos. También impulsa la tan necesaria reflexión sobre las numerosas cuestiones de definición en torno al desplazamiento que todavía requieren una resolución.

A pesar de los avances en el plano normativo, rápidamente aparecieron una serie de retos conocidos. La inseguridad, los conflictos y la violencia impedían la recopilación de datos precisos y seguros en muchos de los países más pobres del mundo. La pobreza se concentra cada vez más en esos mismos Estados, donde el Gobierno cuenta con poca capacidad para generar estadísticas nacionales. Como consecuencia, los datos eran insuficientes para permitir el análisis necesario. Entre los 1500 millones de personas que corren un mayor riesgo de quedar excluidas de los compromisos de la Agenda 2030 se encuentran los 79 millones de desplazados que se calcula que están dentro y fuera de su país³.

Por su propia naturaleza, el desplazamiento y la movilidad plantean problemas a nivel práctico y de economía política que pueden impedir la inclusión de las personas refugiadas, migrantes, apátridas y desplazadas internas en los censos nacionales y en los registros civiles. En el caso de los refugiados y de los migrantes, muchos Gobiernos de acogida no están dispuestos a dedicar recursos a la recopilación de datos detallados sobre los ciudadanos de otro país. La seguridad, el acceso, la movilidad y la voluntad política con frecuencia impiden priorizar la recopilación de datos sobre los desplazados internos. Y, a pesar de la eficiencia que se ha conseguido gracias a la innovación técnica, existen problemas con respecto a la protección y la confidencialidad que hacen que la recopilación de información por parte de los Estados sobre las poblaciones vulnerables y marginadas sea más compleja y sensible.

Tradicionalmente, han sido las organizaciones humanitarias y sus homólogas gubernamentales quienes se han encargado en su mayor parte de la recopilación de datos sobre las poblaciones desplazadas durante las emergencias. Se han centrado sobre todo en la recopilación de información cuantitativa y en la evaluación de las necesidades esenciales indispensables. Con el tiempo, el alcance, la calidad y la realización de estas evaluaciones

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

han mejorado considerablemente. Los datos desglosados sobre la vulnerabilidad se han convertido en una característica estándar de las encuestas humanitarias.

La aplicación de la tecnología digital también ha tenido un importante impacto en la infraestructura, el personal y la eficiencia de los organismos. La rápida recopilación de datos y su incorporación más sistemática al diseño de programas y a la elaboración de presupuestos han favorecido la implementación y el uso de los recursos. La aplicación de la tecnología móvil para el envío eficiente de transferencias de efectivo es un claro ejemplo. Estos desarrollos positivos representan avances sustanciales en las prácticas humanitarias.

Riesgos, retos y preocupaciones

Sin embargo, siguen existiendo problemas y lagunas importantes debido, por un lado, a la propia proliferación de sistemas y aplicaciones de datos; y, en parte, al aumento del número de crisis prolongadas. En ocasiones se han exagerado las afirmaciones sobre su potencial transformador, mientras que en otras se han pasado por alto los riesgos relacionados con la recopilación, el almacenamiento y la transmisión de datos por las prisas por abrazar las competencias digitales.

La gran disponibilidad de las nuevas tecnologías de la información también ha generado nuevos y diferentes retos tanto para proveedores como para receptores de la ayuda. Las potenciales ventajas de los datos biométricos interfuncionales, por ejemplo, podrían ser evidentes para los ciudadanos de un país. Pero estos sistemas pueden preocupar a los refugiados por cuestiones legales y de seguridad, y representar obstáculos en la práctica para su inclusión si se establecen en paralelo a los modelos nacionales.

El potencial aumento de la eficiencia derivado del uso de la tecnología digital coincidió con un aumento del hincapié de los Estados donantes hacia la rentabilidad y la rendición de cuentas. Al mismo tiempo, el uso más generalizado de la tecnología de datos requiere una mayor inversión de capital y en equipos, personal y formación especializada. Un mayor volumen de datos disponibles también implica más esfuerzo en su procesamiento y comunicación. A falta de unos principios y procedimientos operativos estándar consensuados para la producción, recopilación y transmisión de datos, la preocupación por su calidad y seguridad ha aumentado.



Un refugiado sursudanés es censado en el centro de tránsito de Aru, provincia de Ituri, República Democrática del Congo.

Conforme ha aumentado el número de encuestas y evaluaciones, también lo ha hecho la necesidad de una mayor coordinación sobre su contenido y suministro para evitar duplicar datos y el agotamiento que producen las entrevistas. Se han producido importantes desequilibrios entre el volumen de datos recién generados y la capacidad de analizarlos en profundidad o de convertirlos en políticas y programas. El hecho de que las propias personas desplazadas tengan un mayor acceso a la información y los datos y los asuman como propios ha trastocado en parte la relación con los proveedores de ayuda y ha motivado una nueva forma de pensar en torno a la desigualdad y a la responsabilidad.

Sin embargo, la tecnología de por sí no va a transformar necesariamente las desigualdades ni a reducir de forma automática las vulnerabilidades. Por el contrario, puede reforzar e intensificar las asimétricas relaciones de poder a nivel organizativo, local, familiar e individual. La brecha digital también tiene una dimensión de género, étnica y racial. Para abordar estos desequilibrios es necesario que los políticos se comprometan a una mayor inclusión, a unas políticas favorables y a unos planes de implementación que las respalden.

Una captura de datos más eficiente y amplia también eleva la apuesta en materia de seguridad y confidencialidad. La posible fuga o filtración, accidental o no, de información personal y privada presenta riesgos particulares para las poblaciones vulnerables y para los proveedores de asistencia humanitaria en entornos operativos inseguros. La convergencia de intereses entre las empresas de datos del sector privado y los Estados en el ámbito de

la seguridad y la recopilación de información también da lugar a una serie de señales de alerta para las organizaciones de ayuda humanitaria.

Aun así, el creciente número de países que se encuentran atrapados en crisis prolongadas pone de manifiesto la urgente necesidad de reducir la vulnerabilidad y la dependencia de los programas y la financiación de emergencia a corto plazo. Como bien se ha reconocido, son insostenibles y pueden desincentivar el aumento de las competencias nacionales. El aumento de los costes también ha impulsado nuevos compromisos para respaldar una mayor cooperación y complementariedad entre los agentes humanitarios, de desarrollo y de paz y de resolución de conflictos; uno de sus componentes importantes es el interés y el compromiso en común de generar datos y pruebas fiables.

Se necesitan datos más detallados sobre el consumo, los activos y las fuentes de ingresos de los hogares para planificar unas políticas y programas adecuados destinados a combatir la pobreza y promover el desarrollo socioeconómico. En contextos de desplazamiento, estas encuestas deberían incluir a todas las poblaciones afectadas para afianzar la cohesión social y garantizar la paridad. Diseñar y poner en práctica estos ejercicios requiere un esfuerzo, un tiempo y unos recursos considerablemente mayores. Pero, sin esta inversión, faltarán las bases para un apoyo más equitativo y a largo plazo.

La magnitud de la crisis siria no solo puso de manifiesto la necesidad de evaluar las repercusiones sociales y económicas para las poblaciones desplazadas, sino también para las economías y poblaciones de los países de acogida. También reveló importantes lagunas en el sistema mundial de recopilación de datos, en las definiciones y en las metodologías desplegadas básicamente para los objetivos humanitarios. Para abordarlas no bastará solo con aumentar la inversión en tecnología para generar datos. En muchos países afectados por crisis, también implica superar muchos obstáculos a nivel práctico, como las malas infraestructuras, la escasa conectividad, el acceso restringido y las imprevisibles condiciones de seguridad. Por último, pero no por ello menos importante, convertir los datos en pruebas que puedan impulsar el cambio de políticas y competencias institucionales y en torno a la implementación no se consigue mediante procesos puramente técnicos. Han de ir acompañados de una diplomacia

perspicaz y de unas destrezas políticas que fomenten e incentiven la transformación⁴.

Cuando se presentaron los ODS, las estadísticas sobre el desplazamiento global a menudo se basaban en actividades iniciales de inscripción en el registro en emergencias o se derivaban de fuentes secundarias⁵. Casi no había conjuntos de datos o instrumentos individuales que captasen cuáles eran los efectos socioeconómicos del desplazamiento a largo plazo sobre las perspectivas de desarrollo de las poblaciones afectadas. Desde entonces, ha aumentado notablemente el número de estudios, encuestas y evaluaciones realizadas en un amplio abanico de países, muchas de ellas a través de sistemas nacionales⁶. Su cobertura sigue siendo modesta, por lo que sigue urgiendo ampliarla. Pero los progresos han sido alentadores y cada vez más países reconocen las oportunidades que ofrece la obtención de datos precisos y comparables.

Las capacidades nacionales para la realización de estadísticas y la recopilación de datos en los países afectados por conflictos violentos necesitan urgentemente un desarrollo y fortalecimiento institucional. La ampliación de las competencias digitales y la instalación de unas infraestructuras y una conectividad adecuadas son vitales para respaldar otros objetivos más amplios de desarrollo nacional y humano. El Pacto Mundial sobre los Refugiados destaca específicamente la necesidad de movilizar más recursos para apoyar estas necesidades en los contextos de desplazamiento.

Además, sigue habiendo importantes obstáculos políticos para la inclusión de las personas desplazadas. Más allá de las cuestiones prácticas relacionadas con el acceso y los recursos, también existen reservas en torno a la demografía étnica o religiosa y al potencial uso de datos y pruebas con fines políticos y de seguridad. En estos contextos, además de los indudables beneficios que la inversión en nuevas tecnologías digitales tiene para el desarrollo, también hay que tener en cuenta el posible uso indebido de los datos, especialmente en lo que respecta a la información de carácter personal. Esta preocupación debe tener más en cuenta el contexto político y de seguridad, el marco de gobernanza y las metodologías y protocolos que utilizan los proveedores de datos. Para las personas desplazadas, los servicios de mensajería pueden suponer fuentes de información empoderadoras y los teléfonos móviles les pueden servir para realizar transferencias de efectivo y como un medio

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

útil para informarse sobre las condiciones de bienestar que tienen en cuenta los organismos de ayuda cuando el acceso es limitado. Pero para los Gobiernos que pretenden controlar o desincentivar la movilidad, también pueden revelar datos de vital importancia acerca de sus movimientos, ubicaciones e intenciones.

En el peor de los casos, el uso por parte de los Estados de la tecnología digital avanzada les otorga una mayor capacidad de vigilancia y recopilación de información que puede utilizarse para capturar, detener y excluir a colectivos y particulares. El poder de los Gobiernos sobre el uso discrecional de la información requiere que se preste atención a los términos y condiciones del intercambio de datos por parte de los socios humanitarios y de desarrollo.

Existen importantes cuestiones éticas en torno a la recopilación y el intercambio de información de carácter personal extraída de poblaciones vulnerables, en especial de los refugiados y los migrantes (a quienes puede que no amparen las legislaciones nacionales en materia de protección de datos y seguridad). Estas cuestiones van desde la obtención del consentimiento para la recopilación y el uso de dichos datos por parte de las personas seleccionadas, hasta el compromiso oficial de garantizar la seguridad en los procesos de protección, almacenamiento y transmisión de datos, pasando por la anonimización sistemática de todos los identificadores personales que puedan comprometer la seguridad de los individuos.

En la última década, la proliferación y la rápida evolución de la tecnología digital ha impulsado un nada despreciable grado de innovación tanto en lo que respecta a las aplicaciones como a los equipos. Pero también ha provocado una fragmentación en torno a la recopilación y el uso de datos en entornos humanitarios, atribuible en parte al aumento del número de participantes. En respuesta a esto, también se ha incrementado considerablemente la creación de protocolos para la protección de datos, de acuerdos de intercambio de datos, y de directrices éticas y técnicas generales para regular este ámbito.

En conjunto, representan un corpus considerable de buenas prácticas con un potencial real de extender el principio humanitario esencial de “no hacer daño” al ámbito digital. Esto refleja cómo los profesionales están más concienciados sobre la necesidad de moderar su entusiasmo por la tecnología de datos y de ser más prudentes en cuanto a su

aplicación ética y a su uso. Sin embargo, dada la dinámica naturaleza de este sector, quizá lo que haga falta sea sintetizar algunos principios básicos en un Código de Conducta o conjunto de Normas Mínimas que todas las partes interesadas se comprometiesen a respetar.

Un enfoque conjunto para reforzar las capacidades

En respuesta al creciente interés por las pruebas socioeconómicas y el fortalecimiento del sistema mundial de datos relacionados con los desplazamientos prolongados, el Banco Mundial y ACNUR acordaron aunar fuerzas y recursos para crear el Centro de Datos Conjunto sobre Desplazamiento Forzado (JDC, por sus siglas en inglés) en Copenhague. Uno de sus objetivos concretos era apoyar enfoques humanitarios y de desarrollo complementarios para la producción y el uso de datos básicos por parte de un amplio abanico de partes interesadas involucradas en países afectados por el conflicto y la violencia.

Se establecieron cuatro objetivos principales para el JDC: i) fomentar una recopilación más sistemática de datos socioeconómicos sobre las personas desplazadas; ii) permitir el acceso abierto a los datos sobre desplazamientos forzados garantizando al mismo tiempo la anonimización y las salvaguardas que cumplan con los requisitos legales para la protección de datos; iii) apoyar la innovación para mejorar la recopilación de datos; y iv) reforzar la sostenibilidad de los sistemas globales de recopilación de datos.

La fase inicial del plan de trabajo a cuatro años del JDC coincidió con la actual pandemia de la COVID-19. Es comprensible que esto haya restringido los esfuerzos para respaldar la recopilación de datos sobre el terreno mediante la interacción cara a cara —un objetivo primordial—, pero también ha servido para remarcar la vital importancia de incluir a las poblaciones desplazadas y marginadas en los programas de salud pública y protección social. Un reciente estudio apoyado por el JDC ofrece algunas perspectivas importantes sobre el impacto de la COVID-19 en las poblaciones desplazadas. También es un primer ejemplo de cómo la combinación de una recopilación de datos innovadora, un diseño de muestras preciso y un análisis riguroso puede ofrecer información útil incluso en entornos operativos adversos⁷.

A través de su trabajo y alianzas, el JDC aspira a visibilizar y hacer más accesibles las circunstancias socioeconómicas a medio y largo plazo de las poblaciones

desplazadas, y a reforzar las capacidades de las partes interesadas para ayudar en la mejora de sus resultados. Los artículos de esta sección de Revista Migraciones Forzadas ofrecen una visión de algunas de las principales vías y metodologías que el JDC seguirá y fomentará en el futuro.

Ewen Macleod ewen.macleod@gmail.com

Exdirector de la División de Resiliencia y Soluciones de ACNUR y Asesor Especial del Alto Comisionado

1. ODS 17 <https://sdgs.un.org/goals/goal17>

2. bit.ly/Eurostat-IRRS

3. Banco Mundial (2017) *Forcibly Displaced: Toward a Development Approach Supporting Refugees, the Internally Displaced, and Their Hosts*, Chapter 1 bit.ly/WB-10986-25016

4. Véase Read R, Taithe B y Mac Ginty R (2016) "Data hubris? Humanitarian information systems and the mirage of technology", *Third World Quarterly* 37(8) bit.ly/TWQ-37-8-Read-et-al

5. Véase ACNUR Tendencias Globales: Desplazamiento Forzado en 2015 bit.ly/UNHCR-Global-Trends-2015

e Informe Anual de 2015 del IDMC

www.internal-displacement.org/publications/annual-report-2015

6. Véase por ejemplo, Verme P y Schuettler K, "The Impact of Forced Displacement on Host Communities: A Review of the Empirical Literature in Economics" bit.ly/JDC-Verme-Schuettler-2019

7. www.jointdatacenter.org

La alineación de las encuestas humanitarias con las normas estadísticas internacionales

Felix Schmieding

Elaborar estadísticas que resulten familiares y utilizables para los Gobiernos y sus asociados para el desarrollo tiene enormes beneficios.

Cuando la Oficina Nacional de Estadística de Kenia publicó las estadísticas de población activa de su encuesta integrada a los hogares de 2015-2016, se encontró con que el 72 % de los kenianos en edad laboral estaban empleados¹. En el condado de Turkana, la tasa era del 62 %. Pero esta encuesta nacional no había incluido a los campos de refugiados. Una encuesta encargada por ACNUR y el Programa Mundial de Alimentos en 2016 halló que solo el 16 % de los hogares del campo de refugiados de Kakuma —situado en el condado de Turkana— declaró que al menos una persona de la familia tuviera trabajo².

Estas dos estadísticas son difíciles de comparar por varias razones. La encuesta nacional pregunta sobre el empleo a título individual; la encuesta sobre los refugiados, respecto al hogar. Y mientras que la encuesta nacional, realizada con el apoyo técnico del Banco Mundial, se alinea con las definiciones relativas a las estadísticas laborales prescritas por los organismos y normas internacionales, la encuesta a los refugiados se limita a formular la simple pregunta de "¿Cuántos en casa tienen trabajo?", lo que dificulta aún más la comparación.

Pese a que la implementación de ambas encuestas fue generalmente sólida en cuanto a técnica, este ejemplo ilustra cómo las que son implementadas por las organizaciones humanitarias suelen desarrollarse con un fin humanitario específico en mente, en este caso,

analizar las opciones para ver hacia dónde dirigir la ayuda humanitaria. Al perseguir estos objetivos (que son perfectamente válidos), con demasiada frecuencia son olvidadas o descartadas las normas estadísticas internacionales y las buenas prácticas por no ser aplicables o por ser demasiado complejas³.

Sin embargo, satisfacer el objetivo humanitario primordial de una encuesta y, al mismo tiempo, hacer que vaya en consonancia con las normas estadísticas conlleva enormes ventajas. De hecho, en un momento en el que se reconoce ampliamente la importancia del liderazgo nacional y de la colaboración entre la ayuda humanitaria y la asistencia para el desarrollo a la hora de abordar los desplazamientos forzados, y en el que las situaciones prolongadas suponen la gran mayoría de los desplazamientos forzados, cada encuesta humanitaria que no "habla el idioma" del Gobierno y sus asociados para el desarrollo es una oportunidad perdida.

Los beneficios de la alineación

Alinear el trabajo de las encuestas humanitarias con las normas estadísticas internacionales y con las mejores prácticas permitirá que la información extraída de los datos se utilice de forma más efectiva en el diálogo normativo y las labores de defensa de la causa, ya que las estadísticas obtenidas a partir de las encuestas se basarán en conceptos con los que los órganos

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

decisorios están familiarizados. Además, recopilar datos en consonancia con los métodos nacionales u oficiales para la realización de encuestas permite cierto grado de comparación entre los desplazados forzosos y las comunidades de acogida nacionales o locales, aun cuando estas últimas no estén incluidas explícitamente en la encuesta por muestreo. Además, la aplicación de unas normas estadísticas probadas, testadas (y fácilmente disponibles) puede reducir el coste y la complejidad del diseño de las encuestas. Por último, el uso de prácticas de medición internacionalmente establecidas y reconocidas podría aumentar el valor de los datos para su uso secundario por parte de los investigadores, lo que mejoraría así el impacto y el rendimiento de cualquier inversión en recopilación de datos⁴.

La preocupación de que el uso de estas normas en la realización de encuestas humanitarias pueda ser engorroso o impracticable por la limitación de capacidades y recursos es comprensible, pero en última instancia infundada en la mayoría de los casos, especialmente cuando se trata de contextos de desplazamiento prolongado (en contraposición a las emergencias). Como estas normas internacionales han sido cuidadosamente desarrolladas para ser aplicadas en contextos tan diversos como Noruega y la República Centroafricana, y en todo el espectro socioeconómico de estos países, también son válidas para entornos de desplazamiento forzado. Las normas vienen respaldadas en gran medida por una documentación útil y suelen ir acompañadas de material que busca ofrecer unas directrices a profesionales de los datos de distintos ámbitos. Por último, ya que el coste marginal de ampliar una entrevista con unas pocas preguntas es insignificante, en la mayoría de los casos, su aplicación no suele aumentar los costes de la encuesta de forma notable.

Buenas prácticas en Kenia

ACNUR, en colaboración con el Banco Mundial, realizó otras dos encuestas de hogares en los campos de refugiados de Kalobeyei y Kakuma, en Kenia, en 2018 y 2019 respectivamente⁵. Esta vez, el cuestionario se basó principalmente en la encuesta nacional integrada a los hogares que, a su vez, se ajusta a una amplia variedad de normas estadísticas. Los resultados permiten la comparación directa entre la población de los campamentos y los ciudadanos del lugar de acogida. Ahora sabemos que, en el momento de las encuestas, el 37 % de la población en edad de trabajar que se encontraba en el campamento

de Kalobeyei tenía empleo, frente al 62 % en el condado de Turkana y el 72 % en Kenia en general. También encontramos que el 58 % de los refugiados del campamento viven por debajo del umbral nacional de la pobreza, en comparación con el 72 % de la población del condado de Turkana y el 37 % de toda Kenia.

El gobernador del condado de Turkana, Josphat Nanok, acogió con satisfacción las estadísticas comparables con las palabras “¡El Gobierno ahora tiene datos!” y describió a grandes rasgos cómo se utilizarían para fundamentar la formulación de políticas nacionales y territoriales, incluyendo la incorporación de los refugiados y solicitantes de asilo al sistema educativo nacional. El gobernador también subrayó que la encuesta de Kalobeyei serviría de base para la decisión de la oficina nacional de estadística de ampliar su encuesta nacional de hogares a los campos de refugiados⁶.

La decisión de alinear mejor las encuestas humanitarias a las normas estadísticas internacionales no resulta en un mero intercambio para alcanzar un equilibrio (sobre todo en contextos prolongados), sino que los beneficios superan con creces las preocupaciones. A medida que más encuestas humanitarias incorporen estas normas, se irá reduciendo la brecha metodológica entre estas y sus equivalentes gubernamentales y de desarrollo. Paralelamente, lo aprendido de las encuestas humanitarias alimentará cada vez más el desarrollo y el perfeccionamiento de las propias normas para su realización.

Felix Schmieding *schmiedf@unhcr.org*

Estadístico sénior, Centro de Datos Conjunto sobre Desplazamiento Forzado del Banco Mundial-ACNUR

1. KNBS (2018) *Labour Force Basic Report, 2015/16 Kenya Integrated Household Budget Survey* bit.ly/KNBS-survey-746
2. ACNUR/PMA/Kimetrica (2016) *Refugees Vulnerability Study Kakuma, Kenya* bit.ly/UNHCR-WB-Kimetrica-Kakuma-2016
3. Como las desarrolladas bajo el auspicio de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas o las especificadas en las hojas de metadatos sobre los indicadores de los ODS.
4. Las organizaciones humanitarias se orientan cada vez más hacia un enfoque basado en “microdatos abiertos”. Por ejemplo, en 2020 ACNUR puso en marcha su Biblioteca de Microdatos, en la que buena parte de los que extrae de las encuestas están a disposición de los usuarios de datos externos de forma anónima. <https://microdata.unhcr.org>
5. ACNUR/Banco Mundial (2020) *Understanding the Socioeconomic Conditions of Refugees in Kalobeyei, Kenya: Results from the 2018 Kalobeyei Socioeconomic Profiling Survey* bit.ly/UNHCR-WB-Kalobeyei-2018 Informe de la encuesta de Kakuma; su publicación está prevista para marzo de 2021.
6. Discurso pronunciado en el Foro Mundial sobre Refugiados el 16 de diciembre de 2019. Grabación de audio disponible en: bit.ly/GRF-recording

Incluir a los refugiados y desplazados internos en los sistemas nacionales de datos

Natalia Krynsky Baal

La reciente ratificación de las recomendaciones internacionales acerca de las estadísticas sobre los refugiados y desplazados internos ayudará a sistematizar la inclusión de estos colectivos vulnerables en las políticas nacionales y en los programas de desarrollo. Pero queda mucho trabajo por hacer para que las recomendaciones pasen del papel a la práctica.

En marzo de 2020, días antes de que la COVID-19 confinara Nueva York, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas (UNSC, por sus siglas en inglés) aprobó por unanimidad las primeras Recomendaciones internacionales sobre estadísticas de desplazados internos (IRIS, por sus siglas en inglés) del mundo¹. Estas recomendaciones ofrecían un marco para ayudar a los países a mejorar la definición de los desplazados internos y a obtener unas estadísticas de mayor calidad, más comparables y de titularidad nacional sobre esta tan vulnerable población. Son el reflejo de años de arduo trabajo del Grupo de Expertos sobre Estadísticas de los Refugiados y los Desplazados Internos (EGRIS, por sus siglas en inglés), bajo el mandato de la Comisión de Estadística de la ONU, y se basan en el éxito de las Recomendaciones internacionales sobre estadísticas relativas a los refugiados (IRRS, por sus siglas en inglés) de 2018².

Para mejorar la calidad y la comparabilidad de los datos, y lo confiables que sean, es necesario abordar varios retos básicos como unas definiciones claras, unas metodologías transparentes, voluntad política y la capacidad nacional. Este es el caso, en especial, cuando se trata de grupos de población como los desplazados internos, a menudo excluidos o que no se reflejan adecuadamente en los sistemas estadísticos nacionales. Los dos conjuntos de recomendaciones suponen logros significativos para los encargados de la formulación de políticas y para los profesionales que se ocupan de abordar los desplazamientos forzados, ya que, aunque se centran en aspectos puramente técnicos, se incluyen diversas medidas pioneras desde la perspectiva política en el sentido más amplio.

Las IRRS ofrecen unas definiciones claras y un marco estadístico completo para los refugiados y las poblaciones relacionadas (es decir, que engloba a las personas que necesitan protección internacional, a las que han sido refugiadas y a las que regresan a su país tras buscar protección internacional en el extranjero). Si los países y otras partes interesadas pudieran alinear sus propias

definiciones con las de las IRRS sería más fácil comparar los datos entre países y se reducirían notablemente las confusiones entre los diferentes sistemas de notificación. Las IRRS también sirven de orientación a los países sobre cómo se debe medir y analizar la (re)integración de los refugiados en la sociedad, y proporciona un marco para ello. Otro logro de las IRRS se refiere al consenso en las recomendaciones para coordinar las estadísticas oficiales sobre los refugiados que, en la práctica, puede ser un asunto complejo en el que se dejan pasar muchas oportunidades para mejorar la inclusión de los refugiados.

Asimismo, las IRIS pueden cambiar las reglas del juego. Siguiendo una estructura similar, pero abordando un tema sobre el que no existe un marco jurídico definitivo, las IRIS se enfrentaron a un reto más difícil en el que finalmente pudieron proporcionar un marco estadístico que normalizara la terminología y las clasificaciones clave. Por ejemplo, aclararon que a los hijos de padres desplazados internos que hayan nacido tras el desplazamiento no se les debería incluir en la definición, sino que habrían de clasificarse dentro de una categoría de población “relacionada con los desplazados internos”, y recomendaban que la población total de desplazados internos se dividiera en tres subcategorías (desplazados internos en zonas de desplazamiento, en zonas de retorno y en otras zonas de asentamiento).

En cuanto a la compleja cuestión de determinar en qué momento un desplazado interno debe dejar de ser definido como tal, las IRIS también hacen considerables avances. Se basan en los ocho criterios esbozados en el ampliamente aceptado Marco de Soluciones Duraderas del IASC para los Desplazados Internos y en el trabajo realizado por otro grupo interinstitucional de expertos⁴ para distinguir entre dos medidas: en primer lugar, para juzgar el progreso hacia las soluciones duraderas y, en segundo lugar, para determinar cuándo se han superado las vulnerabilidades clave relacionadas con el desplazamiento, de modo que se pueda sacar a las personas desplazadas de

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

las estadísticas demográficas oficiales. Las IRIS ofrecen un marco claro para estas medidas, pero será necesario seguir trabajando para completar su desarrollo, labor que actualmente está llevando a cabo el EGRIS con el apoyo del Centro de Datos Conjunto sobre Desplazamiento Forzado (JDC, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial y ACNUR.

Las IRIS también ofrecen recomendaciones sobre cómo fomentar los esfuerzos de coordinación estadística a nivel nacional e internacional. Entre ellas se incluyen algunas para reforzar las conexiones con los sistemas estadísticos nacionales, establecer plataformas de coordinación técnica y garantizar el control de calidad de los datos de los desplazados internos. Tienen en cuenta el papel de las partes interesadas, nacionales e internacionales, en este proceso.

En conjunto, estas recomendaciones abordan cuestiones políticamente sensibles y operativamente complejas que se repiten en muchos contextos afectados por el desplazamiento, que con frecuencia se ven perjudicados por definiciones incoherentes de soluciones duraderas, informes contradictorios sobre las cifras de desplazamiento y una limitada transparencia en los métodos de producción de datos.

El progreso en todo el mundo

Desde que se aprobaron las IRRS y las IRIS, el apoyo y el reconocimiento dentro y fuera de la comunidad estadística han ido en aumento. Por ejemplo, el Pacto Mundial sobre los Refugiados incluye algunos párrafos sobre datos y pruebas que hacen referencia directa a las IRRS⁵. El Panel de Alto Nivel sobre Desplazamiento Interno ha incluido explícitamente la recopilación, el análisis y el uso de datos en su ámbito de trabajo y se interesa cada vez más por los logros del EGRIS⁶. Y a nivel institucional, muchas organizaciones están identificando activamente oportunidades para integrar las IRRS y las IRIS en sus propios flujos de trabajo en materia de datos y en sus esfuerzos para contribuir a su implementación a nivel nacional. En el JDC, por ejemplo, estamos trabajando con los Gobiernos y las Oficinas Nacionales de Estadística para incorporar aspectos específicos de las recomendaciones a las recopilaciones de datos y hemos hecho de esto un criterio explícito para la financiación.

Muchos países también están tomando medidas para implementar las recomendaciones, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. Una breve mirada a algunos ejemplos recientes ayuda a identificar el

aprendizaje y a fundamentar/priorizar las acciones y el apoyo necesarios⁷.

La recopilación de datos: En **Kenia** se incluyó a los refugiados en el censo nacional de 2019 y la Oficina Nacional de Estadística está creando un grupo de trabajo técnico para avanzar a nivel práctico y hacer un seguimiento de los progresos realizados en cuanto a las estadísticas sobre los refugiados y desplazados internos en el país. En **Marruecos**, como parte de la estrategia nacional del Gobierno sobre migración y desplazamiento forzado, los datos sobre los refugiados y las poblaciones relacionadas se recopilan a través de una encuesta específica. Pero además se están incluyendo los módulos de preguntas de las IRRS sobre la identificación de los refugiados en encuestas temáticas, como la de población activa. En **Etiopía**, la Agencia Central de Estadística está trabajando para alinear e integrar la Encuesta Socioeconómica sobre Refugiados en Etiopía en la Encuesta Nacional sobre el Bienestar de las Familias y para incorporar elementos clave de las IRRS en el proceso. En la **República Centroafricana** se están llevando a cabo esfuerzos similares para incluir a la población de desplazados internos en la estrategia de muestreo de una encuesta nacional sobre la pobreza que está prevista realizar, basándose en varias partes de las IRIS. En Europa, **Georgia** también está planificando una serie de medidas para implementar las recomendaciones; entre ellas una evaluación de varias fuentes de datos administrativos para valorar su potencial de producir estadísticas sobre los desplazados internos y permitir vincularlas entre ellas.

La coordinación: Mediante una coordinación más efectiva entre las partes interesadas nacionales e internacionales, se están aclarando (o creando) los vínculos entre las estadísticas sobre desplazamientos forzados y los sistemas nacionales de datos. Mientras tanto, se consolidan las conexiones con las Estrategias Nacionales de Desarrollo Estadístico (ENDE) y los nuevos marcos jurídicos. En **Ucrania**, el Servicio Estatal de Estadística está trabajando con los miembros del Grupo de Trabajo Técnico sobre Estadísticas de los Desplazados Internos y con ACNUR para desarrollar una hoja de ruta conjunta para la puesta en marcha de las IRIS. Esto incluirá mejoras en el registro nacional de desplazados internos, la incorporación de fuentes de datos complementarias, y su inclusión en el marco nacional para el seguimiento de los progresos del país para alcanzar las metas de los ODS.

En 2020, se ratificó en **Camerún** una nueva ley de estadísticas y la ENDE para 2020-2025. La estrategia busca reforzar las capacidades estadísticas e incluye por primera vez un enfoque explícito sobre el desplazamiento forzado en el país. Mientras tanto, en **Colombia**, se ha aumentado la coordinación entre la Unidad para las Víctimas y la oficina nacional de estadística para mejorar la calidad y la utilidad de las estadísticas sobre los desplazados internos, y se están mejorando las metodologías estadísticas (fundamentadas por el proceso del EGRIS).

¿Y después?

El impulso está creciendo, pero hay que conseguir muchos más resultados si queremos que los refugiados y los desplazados internos se incluyan de manera más sistemática y efectiva en los sistemas nacionales de datos. Las experiencias compartidas por los miembros del EGRIS destacan algunas áreas prioritarias:

La concienciación y la promoción estratégica:

Muchos países que acogen a refugiados o desplazados internos disponen de las capacidades estadísticas necesarias para empezar a implementar las recomendaciones. Pero hay que animarlos —mediante más esfuerzos de concienciación y promoción (incluso exponiendo los primeros signos de impacto)— a que sigan avanzando.

La inversión en las capacidades estadísticas nacionales:

En los casos en los que la capacidad estadística es débil o está sobrecargada, se necesita una inversión permanente para el desarrollo de la capacidad nacional que haga un seguimiento de los progresos hacia el cumplimiento de los ODS y para incluir los datos de los refugiados (y, cuando sea pertinente, de los desplazados internos) en estadísticas sobre migración más generales.

La mejora de la financiación de los datos sobre el desplazamiento forzado:

La financiación más accesible para recabar y gestionar datos sobre el desplazamiento forzado sigue procediendo principalmente de los presupuestos de la ayuda humanitaria que, por su diseño, son cortoplacistas y se centran sobre todo en fundamentar las intervenciones humanitarias. Este patrón debe cambiar para respaldar tanto el fomento de la capacidad de forma permanente como las iniciativas más a largo plazo para la recopilación y gestión de datos, como las encuestas nacionales a las familias y la mejora de los sistemas de datos administrativos.

La adopción de nuevos métodos y fuentes de datos alternativas: Aunque tanto las IRRS como las IRIS incluyen recomendaciones sobre los métodos y fuentes de datos adecuados, se centran menos en otros nuevos o en fuentes de datos alternativas. El rápido avance de las tecnologías y los enfoques alternativos para la recopilación de datos ofrecen unas oportunidades que deberían aprovecharse. Estos esfuerzos se han vuelto aún más urgentes debido a la pandemia de COVID-19, que básicamente ha supuesto un desafío para los métodos tradicionales de recopilación de datos.

Muchas de estas vías se están explorando actualmente como parte de la tercera fase del EGRIS, en 2020-24. Un mandato ratificado por la UNSC obliga al Grupo a respaldar la implementación de las IRRS y las IRIS de forma coordinada durante los próximos tres a cinco años⁸. Dado que cuenta con el apoyo financiero del JDC y del creciente interés de países e instituciones, esta plataforma tiene un enorme potencial. Si la comunidad internacional pudiera aunar esfuerzos en pos de este objetivo común se podrían lograr avances significativos en pocos años. La mejora de las estadísticas oficiales sobre los refugiados y desplazados internos dará sus frutos con relativa rapidez e impulsará el programa de inclusión. Son muchos los retos, pero los pilares fundamentales están ahí.

Natalia Krynsky Baal

[@NataliaBaal](mailto:nbaal@worldbank.org)

Oficial Superior de Estrategia y Políticas, Centro de Datos Conjunto sobre Desplazamiento Forzado del Banco Mundial-ACNUR

1. bit.ly/Reliefweb-IRIS
2. Para más información, véase Levakova D et al "El uso de enfoques colaborativos para mejorar los datos acerca de los desplazamientos internos", *Revista Migraciones Forzadas* 65 bit.ly/FMR65-Levakova-et-al
3. bit.ly/Eurostat-IRRS
4. Véase <https://inform-durablesolutions-idp.org>; véase también Beyani C, Baal N K y Caterina M (2016) "Retos conceptuales y soluciones prácticas en situaciones de desplazamiento interno", *Revista Migraciones Forzadas* www.fmreview.org/es/soluciones/beyani-baal-caterina
5. www.unhcr.org/5c658aed4
6. www.un.org/internal-displacement-panel/content/what-we-do. Véase también el comunicado por escrito del EGRIS al Panel de Alto Nivel sobre Desplazamiento Interno: bit.ly/EGRIS-submission-HLP-Feb2021
7. Todos los ejemplos fueron presentados por representantes de organizaciones nacionales durante la conferencia del JIPS-EGRIS de 2020 sobre el fortalecimiento de las capacidades estadísticas www.jips.org/jips-publication/jips-egris-conference-2020-report/. Dos excepciones serían las de Etiopía y la República Centroafricana, que son actividades respaldadas por el JDC: bit.ly/JDC-filling-data-gaps
8. *Terms of Reference for the Expert Group on Refugee and IDP Statistics (EGRIS): Third Phase/Implementation of Recommendations (2020-2024)*: bit.ly/EGRIS-TOR-2020-24

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

Escollos y potencial de las encuestas telefónicas de alta frecuencia durante la COVID-19

Jeffery C Tanner

Las encuestas telefónicas pueden ser especialmente útiles en épocas —como la pandemia actual— en las que es difícil realizarlas cara a cara, aunque pueden presentar desafíos.

La pandemia de la COVID-19 ha destrozado vidas y medios de subsistencia en todo el mundo. Las personas desplazadas forzadas se encuentran entre las más vulnerables, pero hay pocos datos sólidos que permitan conocer la evolución de sus necesidades a lo largo de la pandemia¹. Las consideraciones sanitarias limitan las opciones para recopilar datos en este difícil período, y los esfuerzos tradicionales para hacerlo de forma presencial se han pausado por la preocupación por la salud pública y la del encuestador, y debido a las restricciones para viajar, los confinamientos y el distanciamiento físico. Una alternativa es el uso de encuestas telefónicas a través del teléfono móvil. Este enfoque ha demostrado ser útil para recopilar datos en entornos de riesgo, en zonas remotas, en áreas en las que preocupa la seguridad del encuestador, en las que la receptividad hacia las nuevas y cambiantes necesidades es importante, y en contextos en los que es necesario supervisar cómo se están desarrollando las situaciones. También se ha descubierto que producen datos de alta calidad y que son rentables².

Ante la pandemia de la COVID-19, el Banco Mundial puso en marcha una serie de sólidas encuestas telefónicas de alta frecuencia (HFPS, por sus siglas en inglés), es decir, de varias rondas, para recopilar datos socioeconómicos en unos 100 países³. En colaboración con el Banco Mundial, ACNUR y las oficinas nacionales de estadística, el Centro de Datos Conjunto sobre Desplazamiento Forzado del Banco Mundial y ACNUR⁴ está respaldando la integración de muestreo de refuerzo de personas desplazadas en al menos dos rondas de las encuestas telefónicas de alta frecuencia sobre la COVID-19, tanto en curso como por hacer, en más o menos una docena de esos países. Esto permitirá entender mejor los cambios en el bienestar, las vulnerabilidades y las perspectivas de las personas desplazadas a raíz de la pandemia de la COVID-19, y permitirá diseñar mejores respuestas⁵.

Aunque las HFPS pueden generar datos cruciales durante la pandemia, existen retos

para aplicar este método, especialmente en el contexto de los desplazamientos. Podríamos definir los principales como amenazas a la solidez de la muestra y limitaciones a la información recopilada. Afortunadamente, con previsión y una cuidadosa planificación también hay formas de superar esos retos.

El muestreo

Una encuesta estadísticamente sólida debería ser representativa de una población definida y contar con una muestra lo suficientemente grande como para tener el poder estadístico necesario para detectar diferencias significativas entre grupos o a lo largo del tiempo. Dado que la cobertura telefónica es desigual —debido a la posesión de un teléfono móvil (influida por factores demográficos y económicos), la cobertura de la red o la disponibilidad de energía eléctrica, por ejemplo—, las muestras de las HFPS pueden no ser representativas de la población desplazada a la que se dirigen, lo cual sesga los resultados analíticos. Del mismo modo, el sesgo puede producirse cuando algunos grupos tienen más o menos probabilidades de ser seleccionados para ser encuestados (“infracobertura” o “cobertura diferencial”) o cuando algunos encuestados se niegan a participar (“falta de respuesta”) o se niegan a continuar en rondas posteriores (“abandono”).

Identificar las fuentes específicas de potenciales sesgos es fundamental en los ejercicios de recopilación de datos para maximizar la capacidad de a) prevenir el sesgo mediante el diseño; b) corregirlo mediante la limpieza, la reponderación y el análisis; y c) identificar la dirección del sesgo para facilitar el uso de los datos en la formulación de políticas. Para que los datos de la encuesta sean valiosos hay que identificar e implementar correctamente un marco de muestreo sólido, una estrategia de muestreo y unas ponderaciones analíticas, que son las principales herramientas para evitar el sesgo muestral. Si este persiste en los datos de las HFPS, lo más probable es que estén sesgados

al alza, lo que significa que los datos indicarían que la población está mejor de lo que está. Aunque esto fuera así, los datos de las HFPS aún servirían para formular políticas si los resultados observados fueran lo suficientemente bajos como para indicar que la intervención está justificada.

En general, se pueden emplear tres enfoques para construir un marco de muestreo que consistirían en: una encuesta representativa, un listado o la marcación aleatoria de dígitos⁶. Los dos primeros se basan en que exista información detallada en un momento no muy anterior al inicio de la encuesta telefónica. Algunos países tienen la suerte de haber realizado una recopilación de datos a nivel nacional (que incluyera la toma de datos y números de teléfono de las poblaciones desplazadas) de la que se puede extraer una muestra representativa. En otros casos, pueden utilizarse los datos de registro de ACNUR, siempre que estos —en especial los números de teléfono— sean válidos y estén actualizados; sin embargo, faltarían los sectores de población que no se encuentran registrados. Normalmente se puede hacer uso de la información personal para ayudar a obtener una muestra equilibrada, pero (con el fin de mitigar los problemas de protección de datos) al equipo de encuestadores hay que pasarle solo los números de teléfono. El tercer enfoque, la marcación aleatoria de dígitos (utilizando números de teléfono generados al azar), aunque rara vez es rentable o factible para encuestar a personas desplazadas, en determinados casos puede ser apropiada.

Estos tres métodos se utilizan en las encuestas respaldadas por el JDC. En Chad, se está utilizando como marco de muestreo una encuesta representativa a nivel nacional de 2018 que, por primera vez, incluía a los refugiados. En Yibuti y Etiopía, se están empleando datos de registro de ACNUR. Y, en Ecuador, el equipo de encuestadores se asociará (como ya ha hecho anteriormente) con una empresa local de telecomunicaciones para determinar las zonas geográficas y la recopilación de números de teléfono con más probabilidades de pertenecer a venezolanos que se encuentren en el país en calidad de refugiados o similar.

Cuando se dispone de los datos complementarios adecuados, se puede utilizar la “reponderación” para ayudar a corregir los datos de la muestra y recuperar aquellas partes infrarrepresentadas de la población real. Este proceso es complejo y supone un desafío, pero si se aplica adecuadamente puede superar los problemas de abandono, falta de respuesta

y cobertura parcial para que la muestra sea una aproximación útil a la población real.

Por supuesto, evitar una muestra sesgada es mejor que corregirla, y los incentivos pueden ayudar. Para la encuesta del Banco Mundial en Ecuador sobre el impacto de la COVID-19 en las poblaciones de acogida y de refugiados se facilitaron unas tarjetas de prepago con cuyo saldo bastó o incluso sobró para abarcar la duración de la encuesta. Al margen de una epidemia, hay otros incentivos, como el suministro directo de teléfonos móviles o pequeños cargadores solares⁷.

El diseño y la implementación del instrumento

Hay que tener en cuenta ciertas cuestiones prácticas respecto a las limitaciones potenciales acerca de qué se puede recopilar y en qué cantidad.

Las encuestas deben ser cortas para no cansar a los encuestados, sobre todo cuando se han previsto repetidas interacciones, lo que inevitablemente limita la potencial profundidad y amplitud de la recopilación de datos. Además, la complejidad de las preguntas tiende a reducir la calidad de los datos, especialmente en las encuestas telefónicas. Hay tres opciones para mitigar estas limitaciones al menos hasta cierto punto. Se puede asignar aleatoriamente a diferentes encuestados un módulo distinto de preguntas, mientras que las respuestas de un conjunto común de módulos se utilizan para atribuir los datos de los módulos que faltan por esa azarosidad. Alternativamente, los módulos cuyas preguntas se planteen a la totalidad de la muestra pueden rotar de una ronda de la encuesta a la siguiente, como se hizo en Etiopía al incluir un módulo sobre las nubes de langostas en la segunda ronda de esas HFPS. Este enfoque funciona mejor cuando se incluyen resultados más dinámicos (como la seguridad alimentaria y el empleo) en todas las rondas, y se van rotando resultados más estáticos (como la demografía o los historiales). Por último, en algunos casos es posible utilizar un conjunto más pequeño de preguntas de un módulo largo para imputar una puntuación respecto al resultado global (como en el caso de la pobreza de consumo).

Algunos temas son difíciles de abordar mediante una encuesta telefónica. En general, los temas sobre los que resulta difícil encuestar cara a cara lo son aún más por teléfono, aunque la naturaleza impersonal de una encuesta telefónica podría hacer

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

que para algunos encuestados fuese más fácil hablar de ciertos temas (como los que implican estigma social, como es el caso de la salud mental, la violencia doméstica, la xenofobia o el comportamiento sexual).

La base de pruebas sobre la fiabilidad de las encuestas telefónicas en comparación con las presenciales para las poblaciones desplazadas es todavía bastante incipiente. Sin embargo, varios estudios han concluido que no hay diferencias entre las encuestas realizadas por teléfono móvil y las realizadas por teléfono fijo o entre las encuestas por teléfono móvil y las presenciales⁸. Se espera que el trabajo previsto en Jordania, que contará con el apoyo del JDC, pueda ofrecer perspectivas sobre esta cuestión, ya que la muestra de encuestados se dividirá entre las encuestas presenciales y las telefónicas.

Pese a estos retos, las encuestas telefónicas son, por lo general, más convenientes para recopilar microdatos socioeconómicos que otras opciones a distancia. Si se optara por los SMS se podría contar con una cobertura y un cumplimiento inicial ligeramente mejores, pero los cuestionarios por lo general deberían limitarse a menos de cinco preguntas para no cansar a los encuestados. Las encuestas en papel plantean importantes retos logísticos en un entorno que no cuenta ni con direcciones postales ni con un sistema postal operativo. Las encuestas por Internet generalmente sufren más sesgos muestrales que las telefónicas, ya que requieren de aún más tecnología y es mucho más difícil desarrollar un marco de muestreo sólido. Y todas estas opciones presuponen un nivel de alfabetismo bastante alto, algo que no es un problema en el caso de las HFPS.

Existen varias guías prácticas sobre la implementación de una encuesta telefónica, que abarcan temas como la importancia primordial de la protección de datos y la colaboración con la oficina nacional de estadística⁹. Esa colaboración puede parecer una pérdida de tiempo durante una crisis, pero es importante para ayudar a desarrollar capacidades, fomentar la inclusión de las poblaciones desplazadas en los esfuerzos ordinarios de recopilación de datos a nivel nacional y conseguir que las estadísticas generadas se utilicen en el diseño de un plan nacional de respuesta a la COVID-19 y de recuperación que incluya a las personas desplazadas. Las encuestas telefónicas no son convenientes en todos los casos, pero con una buena estrategia de muestreo

y siempre que se disponga de un buen instrumento pueden producir datos fiables.

Jeffery C Tanner jtanner@worldbank.org

Economista principal, Centro de Datos Conjunto sobre los Desplazamientos Forzados del Banco Mundial-ACNUR

1. Banco Mundial (2020) "Highly Vulnerable Yet Largely Invisible: Forcibly Displaced Populations in the COVID-19 Induced Recession" bit.ly/JDC-Paper-series-No1
2. Dabalen A, Etang A, Hoogeveen J, Mushi E, Schipper Y, von Engelhardt J (2016) *Mobile Phone Panel Surveys in Developing Countries: A Practical Guide for Microdata Collection*, Banco Mundial <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24595>
3. Véase el Panel Interactivo de Seguimiento de Alta Frecuencia de la COVID-19 del Banco Mundial bit.ly/WB-C19-HFdashboard
4. Una iniciativa conjunta del Banco Mundial y ACNUR instaurada en 2019 www.jointdatacenter.org
5. La mayoría de las encuestas incluyen módulos sobre uno o más de los siguientes temas: sanidad; educación; acceso a productos financieros; seguridad alimentaria; consumo (uso de bienes y servicios); inserción laboral (por ejemplo, situación laboral y sector, cambios en los rendimientos del trabajo); WASH/hábitos relacionados con la salud; conocimientos y comportamientos con respecto a la COVID-19, incluidos mecanismos de compensación; y ayuda/asistencia. A esto, el JDC con frecuencia añade un módulo sobre los historiales de desplazamientos y, cuando es posible, sobre las actitudes hacia las poblaciones de acogida/desplazadas.
6. Himelein K et al (2020) *High Frequency Mobile Phone Surveys of Households to Assess the Impacts of COVID-19: Guidelines on Sampling Design*, World Bank Group bit.ly/WorldBank-Himelein-et-al-2020
7. Etang A y Himelein K (2020) "Monitoring the Ebola Crisis Using Mobile Phone Surveys", *Data Collection in Fragile States; Innovations from Africa and Beyond* <https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-25120-8>
8. Véase la nota final n° 2.
9. Véase, por ejemplo, CESPAP (2020) "Engaging with development partners to stand-up COVID-19 rapid assessment surveys: Five tips for National Statistical Offices", *Stats Brief Issue 25* bit.ly/UNESCAP-stats-brief-25
UNICEF (2020) "MICS Plus: A Step-By-Step Guide to Implementation" bit.ly/UNICEF-MICS-guide-2020
Programa Mundial de Alimentos (2017) "Conducting Mobile Surveys Responsibly" bit.ly/WFP-mobile-surveys-2017

Los conjuntos de datos: abiertos al público

Los conjuntos de datos respaldados por el JDC (y la documentación que los acompaña) sobre las poblaciones desplazadas de aproximadamente una docena de países serán anonimizados y publicados junto con los datos correspondientes sobre las poblaciones nacionales (de acogida). Estarán disponibles públicamente en la biblioteca de microdatos del Banco Mundial con enlaces en la biblioteca de microdatos de ACNUR en <https://microdata.worldbank.org>

Las reseñas sobre las tendencias halladas en dichos datos se utilizarán en el diálogo con los Gobiernos de los países de acogida para ilustrar los retos a los que se enfrentan estas poblaciones vulnerables durante la pandemia.

Medir las muertes y las desapariciones de migrantes

Andrea Garcia Borja y Julia Black

La tarea de documentar las muertes y desapariciones de migrantes conlleva gran cantidad de dificultades, pero queda mucho margen de mejora en la cobertura y la integridad de los datos.

Las personas que intentan emigrar a otros países se ahogan en conductos de aguas residuales; mueren congeladas en bosques remotos; o de deshidratación e inanición después de que sus vehículos se averíen en medio del desierto. Documentar las muertes y desapariciones de migrantes ayuda a contrarrestar la invisibilidad de estas tragedias, mientras que la recopilación, el análisis y la difusión de los datos también son valiosos para las campañas de promoción, para fundamentar las políticas migratorias con una base empírica y para mejorar la planificación operativa.

Pero recopilar información sobre las víctimas mortales durante la migración es un reto por varias razones. La falta de opciones seguras y legales para migrar obliga a las personas a viajar por rutas migratorias irregulares para evitar ser detectadas. Como consecuencia, o no se comunican los fallecimientos o se producen sin que haya testigos. Además de que una topografía remota y hostil dificulta la búsqueda de los restos mortales; así pues, estos restos de innumerables personas que mueren en viajes migratorios irregulares —especialmente los de quienes desaparecen en el mar— nunca se recuperan.

Hay otros problemas, aunque más fáciles de superar: en primer lugar, las dificultades para consensuar una definición operativa de “migrante desaparecido” y, en segundo lugar, la falta de fuentes de datos fiables y accesibles. En el contexto de la pandemia de la COVID-19, la recopilación de datos se ha convertido en un reto cada vez mayor, con obstáculos adicionales planteados por la reducida cobertura mediática de las muertes de migrantes, la incapacidad de llegar a ellos para recabar testimonios y el cierre de fronteras que los empuja hacia rutas menos visibles.

¿Quién es un migrante desaparecido?

El Proyecto Migrantes Desaparecidos (MMP, por sus siglas en inglés) de la Organización Internacional para las Migraciones es una recopilación de datos mundial de libre acceso que hace un seguimiento de las muertes de personas a lo largo de rutas migratorias mixtas de todo el mundo¹. Desde su creación, en

2014, el proyecto ha registrado 40 505 muertes y desapariciones durante la migración².

No existe una definición consensuada de “migrante desaparecido”, pero es evidente que se necesita una definición operativa para elaborar una base de pruebas.

La definición del MMP hace referencia a una persona que falleció (o que desapareció y se la presupone muerta) en el proceso de migración hacia un destino internacional, con independencia de su condición jurídica. Los migrantes que mueren o desaparecen fuera del proceso de migración —por ejemplo, cuando un migrante reside en un país extranjero— no se incluyen en la base de datos. El MMP también excluye las muertes que tienen lugar en los centros de internamiento de migrantes y en asentamientos (como los campos de refugiados), y los fallecimientos que se producen tras la deportación. Esta definición fue diseñada específicamente para identificar los riesgos relacionados con los viajes migratorios irregulares.

Una categoría de migrante desaparecido ausente en la definición del MMP es la de los muchos que pierden el contacto con sus seres queridos. Estas personas pueden estar vivas, pero en situación de no poder contactar con sus familias, o puede que decidan no hacerlo por miedo a la deportación o a otras consecuencias.

Aunque sea necesario adoptar una definición para iniciar la recopilación de datos sobre cualquier tema, esto también puede tener consecuencias negativas. Por ejemplo, la exclusión de las muertes que se producen en los albergues para migrantes, en los campos de refugiados o en los centros de internamiento puede llevar a pensar que los migrantes que se encuentran en esos espacios están más seguros que los que están en tránsito. También puede hacer que quienes no conozcan la metodología del MMP acaben subestimando el alcance y la magnitud de las muertes de migrantes. Esto resulta especialmente problemático cuando las cifras del MMP se utilizan en los medios de comunicación con poca información previa y cuando se muestran las tasas de mortalidad, pero no se explica cómo se calcularon³.

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

Además, establecer cuándo se produjo un fallecimiento “en el proceso de migración” es especialmente problemático. En general, la noción de tránsito implica provisionalidad, pero no dice nada sobre la duración, la dirección o la continuidad del viaje migratorio. En la metodología del MMP se supone que el tránsito es generalmente continuo; pero en realidad, los migrantes suelen hacer una pausa o redirigir su ruta para reponer fuerzas y recursos económicos, y el viaje completo puede durar meses o años. Si un migrante muere o desaparece durante una de sus paradas, su defunción no será contabilizada por el MMP. El resultado es que muchos incidentes se excluyen de la base de datos porque no se ha podido establecer que el migrante se encontrara en tránsito.

Asimismo, los migrantes se ven a menudo obligados a pausar sus viajes debido a las políticas gubernamentales que restringen su movimiento. En 2020, las restricciones a la movilidad impuestas para contener la propagación de la COVID-19 han sido especialmente preocupantes, ya que han dejado a miles de migrantes varados en situaciones peligrosas en las que probablemente no dispusieron de ayuda humanitaria, ni acceso a atención sanitaria.

Un adolescente marfileño murió a bordo de un barco en cuarentena en Italia un mes después de ser rescatado del Mediterráneo. Al parecer, la falta de acceso a una adecuada atención sanitaria en el barco provocó el deterioro de su salud y, finalmente, su fallecimiento⁴. Si hubiera podido acceder a una mejor atención sanitaria inmediatamente después de su viaje por mar, se le podría haber salvado la vida.

Fuentes de datos

Son pocas las fuentes oficiales que recopilan y publican datos sobre las muertes de migrantes, y los datos disponibles suelen ser inexactos o incompletos. Son los organismos de control de fronteras y los examinadores forenses quienes habitualmente recopilan los pocos datos oficiales de los que disponemos. Para abordar el problema de que muchos migrantes desaparecidos no estén recogidos en los datos gubernamentales, el MMP se basa en otras fuentes, como los medios de comunicación sociales y de noticias, las ONG, la sociedad civil, los organismos internacionales y los propios migrantes.

En sus esfuerzos por ayudar a las familias de los migrantes desaparecidos, la Oficina del Médico Forense del Condado de Pima, en Arizona, examina los restos mortales no identificados hallados en su jurisdicción y determina cuáles podrían ser codificados como “indocumentados que cruzan la frontera”. Entre los criterios que utilizan están si el cuerpo fue recuperado en un corredor migratorio conocido, si las pertenencias de la persona coinciden con los artículos que suelen llevar los migrantes y si esos suministros proceden de México. Esta sencilla clasificación se traduce en un registro inestimable de las muertes de migrantes a lo largo de una frontera que cuenta con una de las mayores tasas de letalidad. Desde 2001, se han registrado más de 3398 muertes de migrantes⁵.

Las noticias de los medios de comunicación son una de las fuentes más utilizadas por el MMP. Sin embargo, muy a menudo la información que los medios ofrecen sobre las muertes de migrantes es inexacta, incompleta o ha sido malinterpretada y exagerada⁶. Además, cuando estas se producen en gran número y en corredores muy conocidos, como el del Mediterráneo, será más probable que los medios de comunicación se hagan eco de ellas, lo que puede sesgar los datos del MMP. Este problema se agrava más aún cuando se centra gran parte de la cobertura mediática en unas pocas cuestiones. En 2015, cuando se produjo una amplia cobertura mediática de la crisis del golfo de Bengala, observamos un aumento sustancial de nuestros datos. El MMP documentó la muerte de 577 migrantes rohinyás en el mar ese año. En cambio, en 2020, el MMP solo ha registrado 165 muertes de este tipo a pesar de que las ONG han declarado que más de un millar de rohinyás han estado varados en el mar durante meses, lo que indica que el número de víctimas mortales bien podría ser mayor.

El MMP también utiliza otras fuentes de información, como las encuestas a migrantes y los testimonios de los supervivientes. La reciente represión de las ONG que llevan a cabo operaciones de búsqueda y salvamento y que ofrecen ayuda para salvar vidas a los migrantes —como las que actúan en el Mediterráneo y en la frontera sur de EE. UU.— no solo pone en riesgo las vidas de los migrantes, sino que también obstaculiza nuestra capacidad de recabar pruebas. Por último, el MMP utiliza los datos de las salidas marítimas para identificar posibles incidentes que impliquen el fallecimiento o la desaparición de migrantes en las rutas de ultramar.

En 2020, la travesía de la costa noroeste de África hasta las islas Canarias (España) experimentó un aumento significativo de los flujos de migración en comparación con 2019. La información sobre el sexo y la edad de las personas que desaparecen en esta ruta y la localización precisa de su muerte o desaparición es escasa. En 2020, al menos 849 personas perdieron la vida en esta ruta. El MMP todavía tiene pendientes de verificar y registrar varios incidentes que podrían haber implicado cientos de muertes, pero es difícil obtener pruebas. Como consecuencia, el MMP ha empezado a recopilar datos sobre las salidas desde la costa senegalesa. Esta información se puede comparar con la de las llegadas a las islas Canarias para contabilizar posibles naufragios.

Recomendaciones

Aunque hay muchos retos que obstaculizan la documentación, se puede hacer mucho para mejorar la cobertura y la exhaustividad de los datos sobre los migrantes desaparecidos, como sugieren las siguientes recomendaciones.

Los datos deben representar las experiencias vividas por las personas que emprenden viajes migratorios. Los actores que utilizan definiciones operativas, como el MMP, deberían desarrollar directrices acerca de cómo adaptar sus metodologías a las realidades cambiantes de los viajes migratorios.

Todos los actores que trabajan en espacios en los que se producen muertes y desapariciones de migrantes deberían recopilar y compartir datos. Asimismo, los encargados de recabar las denuncias sobre personas desaparecidas deberían desglosar estos datos para poder identificar las desapariciones relacionadas con la migración.

Los actores deberían compartir los datos sobre los migrantes desaparecidos, sea cual sea su definición. Los datos sobre los migrantes desaparecidos suelen estar dispersos y fragmentados, y sería de gran valor reunir fuentes de datos dispares para su comparación y verificación.

Los Estados deben empezar a recopilar urgentemente datos sobre el fallecimiento de migrantes en sus territorios. Es probable que los actores oficiales ya recopilen datos sobre las defunciones en su jurisdicción. Las autoridades locales, nacionales y regionales que los recopilan deberían desglosarlos por estatus migratorio y publicarlos de

conformidad con las leyes de protección de datos. Esto incluye recopilar información —de forma sensible— procedente de los migrantes acerca de las muertes o desapariciones de compañeros de las que hayan sido testigos.

Las ONG, las ONG internacionales y la sociedad civil deberían colaborar para resolver los casos y generar pruebas. Los esfuerzos para la recopilación de datos dirigidos por actores no gubernamentales que trabajan directamente con las personas en tránsito pueden aportar información nueva y aumentar la probabilidad de que puedan ser verificados, especialmente en los casos en que no se hayan recuperado los cuerpos de los migrantes. También debería fomentarse la colaboración con las familias de los desaparecidos y entre ellas, ya que su participación puede aportar información crucial y ayudarles a sobrellevar la incertidumbre de la pérdida a la que se enfrentan.

Los medios de comunicación deberían acogerse a las directrices existentes para informar sobre las muertes de los migrantes. Las noticias de los medios de comunicación pueden ser el primer indicio de que se ha producido el fallecimiento o la desaparición de un migrante y, como tal, pueden desempeñar un papel fundamental para la recopilación de datos. Siempre que sea posible, deberían incluirse datos sobre las personas involucradas en dicho suceso, teniendo en cuenta también los intereses de los fallecidos y sus familias. Además, las noticias deberían mencionar lo limitados que son los datos publicados para evitar inexactitudes o malinterpretaciones, y deberían intentar ofrecer un retrato de las personas que están detrás de esas cifras.

Andrea Garcia Borja
agarciaborja@iom.int @agarciaborja
 Analista de datos

Julia Black [@_Julia_Black](mailto:jblack@iom.int)
 Responsable de proyectos

Proyecto Migrantes Desaparecidos, OIM

1. <https://missingmigrants.iom.int>
2. La cifra abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de enero de 2021.
3. Dearden K, Sánchez Dionis M, Black J and Laczko F (2019) "Calculating 'Death Rates' in the Context of Migration Journeys" bit.ly/IOM-GMDAC-Dearden-et-al-2019
4. *Agenzia Italia* (2020) bit.ly/3neBIXF (solo en italiano)
5. Mapa de la mortalidad de los migrantes bit.ly/35ajDhC
6. White A y Singleton A "Mixed messages: Media coverage of migration and fatalities", capítulo 3 en OIM (2017) *Fatal Journeys, Volume 3, Part 1: Improving Data on Missing Migrants* bit.ly/2Us5nKQ

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

Cómo afrontar los retos del intercambio de datos sobre el ADN

Sara H Katsanis, Diana Madden, Courtney C Siegert, Eduardo Canales y Kate Spradley

Las barreras administrativas y éticas del intercambio de datos sobre el ADN para la identificación de los migrantes encontrados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México evidencian lo necesarias que son unas soluciones a largo plazo y unos procesos sostenibles.

Por su carácter hereditario y su inalterabilidad a lo largo de la vida, el ADN es un potente parámetro para identificar restos humanos. Ha habido grandes progresos técnicos en su uso durante las últimas décadas, pero las barreras éticas, administrativas y burocráticas restringen su aplicación, especialmente para la identificación transnacional. Esto se hace patente en los estados de la frontera con EE. UU., donde los restos humanos sin identificar que se cree que son de migrantes se entierran sin tomar muestras de ADN o se deja que se vayan consumiendo sin nombre durante años.

Desde 2008, se han encontrado más de 800 restos humanos sin identificar en el condado de Brooks, a más de 112 kilómetros al norte de la frontera de Texas con México¹. Estas muertes de origen desconocido se someten a una investigación que, en la mayoría de lugares, incluye una autopsia con una toma de muestras de ADN. Pero antes de 2013, en el sur de Texas no se seguían las leyes y prácticas pertinentes y no se tomaban muestras. Hoy en día se están realizando exhumaciones para recopilar información sobre el ADN y otros datos antropológicos de los fallecidos con el fin de investigar cuál es su identidad. Por el momento se ha identificado a 34 de 163 personas fallecidas hace tiempo y hay más tumbas pendientes de exhumación. Debido a la histórica falta de seguimiento de los casos en la región, desconocemos cuántas tumbas más sin nombre o sin marcar podrán contener restos de personas desaparecidas².

Este procedimiento suele durar años. Por lo general, los restos humanos sin identificar se envían a un organismo de medicina legal para su identificación; en la mayoría de los casos, allí se realizará una autopsia que incluirá una muestra de ADN. Esa información se puede subir a la base de datos federal sobre ADN, conocida como Combined DNA Index System (CODIS). Ahí se compararán los datos con el índice de personas desaparecidas y con un índice de familiares. La teoría de la

identificación basada en el ADN a través de la CODIS es que, en algún momento, los familiares denunciarán la desaparición de la persona y facilitarán muestras de un ADN de "referencia familiar". Cualquier jurisdicción de EE. UU. puede asumir la denuncia de la desaparición de una persona desaparecida y tomar una muestra de ADN de "referencia familiar" para enviarla a un laboratorio de la CODIS.

La necesidad de cooperación y colaboración

Sin embargo, para las familias de migrantes existen múltiples barreras que limitan las identificaciones. La CODIS se creó para casos de delitos penales, no para la identificación de personas desaparecidas. Está diseñada para proteger la calidad de los datos e incluye restricciones de acceso, lo que da lugar a una gran cantidad de papeleo cuando se remiten casos de restos humanos sin identificar y muestras de ADN de "referencia familiar". Además, los laboratorios forenses dan prioridad a los casos en los que podría estar en juego la vida o la libertad de una persona, por lo que se retrasa la tramitación de los restos humanos sin identificar y de las muestras de ADN de "referencia familiar". Los laboratorios CODIS también exigen un número de denuncia de desaparición de una persona expedido por una jurisdicción estadounidense, lo que no sería factible si la denuncia se hubiera presentado fuera de Estados Unidos.

Y lo que es más importante para los casos de desaparición transnacional, es un requisito federal para la CODIS que sean las fuerzas de seguridad quienes hayan recogido las muestras de ADN de "referencia familiar". Pero sería posible que los familiares de los desaparecidos no quisieran o no pudieran proporcionar esas muestras a las fuerzas de seguridad, a lo mejor por temor a que ellos mismos o sus familiares sean deportados. Además, que se haga pública la denuncia de una desaparición puede poner en peligro la vida del migrante y de su familia. Los familiares que denuncian la desaparición de una persona a menudo sufren extorsiones.



La tumba de un migrante desconocido en el cementerio del Sagrado Corazón, en el condado de Brooks.

Se están llevando a cabo cuantiosos esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales para mejorar la búsqueda y recuperación, los procesos de identificación y de comunicación y repatriación. Por ejemplo, algunas jurisdicciones han empezado a enviar los restos humanos sin identificar y las muestras de ADN de “referencia familiar” a un laboratorio privado de ADN que no exige que las muestras se tomen en presencia de las fuerzas de seguridad, lo que ha contribuido a la identificación

de muchas personas. Un laboratorio privado también puede aceptar restos humanos sin identificar y muestras de ADN de “referencia familiar” procedentes de otros países. Sin embargo, la mayoría de los restos humanos sin identificar se encuentran en la CODIS y algunos en una base de datos privada, mientras que la mayoría de las muestras de ADN de “referencia familiar” están en una base de datos privada y no en la CODIS. Esto ha dado lugar a dos bases de datos de ADN que están desconectadas entre sí y poco alimentadas a nivel individual, motivo por el que se pierden oportunidades de llevar a cabo identificaciones.

A lo largo de los años, distintas partes interesadas se han reunido para abordar estos y otros retos relacionados con la identificación del ADN. Entre ellas figuran todos los niveles de las fuerzas del orden, jueces de paz, responsables en medicina legal, consulados, organizaciones intergubernamentales, organizaciones humanitarias, defensores de las familias migrantes, antropólogos forenses, administradores de bases de datos, expertos en ADN, funcionarios públicos y expertos en derechos humanos. Gracias a estos esfuerzos se han conseguido algunas mejoras como: una mejor comunicación entre las partes interesadas; una nueva base de datos humanitaria que permite comparar los datos de las muestras

de ADN de “referencia familiar” que no están registradas en la CODIS con los datos de los restos humanos sin identificar que sí lo están; y que los funcionarios consulares estén ahora autorizados a recoger muestras para que se incluyan en la CODIS³.

Uno de los papeles que pueden desempeñar los estudiosos es el de facilitar enfoques de investigación imparciales para analizar las lagunas normativas y las diferentes perspectivas que constriñen el progreso. Nuestro equipo elaboró una estrategia de investigación centrada en el uso de datos sobre el ADN para las identificaciones; y, en marzo de 2020, celebramos un simposio para que los profesionales interesados debatieran acerca de las opciones en cuanto a políticas (también tenemos previsto reunir a las familias de las personas desaparecidas transnacionales). Esto nos permitió elaborar una crónica de los retos específicos identificados por las partes interesadas y valorar las prioridades y propuestas de cada grupo.

Diferentes misiones, diferentes prioridades

A pesar de las buenas intenciones de todas las partes interesadas, las presiones políticas y las marcadas diferencias en las prioridades de cada misión dieron lugar a desacuerdos y errores de comunicación en cuestiones de políticas. Por ejemplo, una unidad de justicia penal tendrá interés en no alterar los casos de personas desaparecidas que pudieran ser homicidios. A las fuerzas de seguridad fronteriza les interesará conocer la identidad de los migrantes y sus afiliados para investigar a las bandas y redes de tráfico ilícito de personas. Por otro lado, las organizaciones humanitarias abogan por el derecho de la familia a saber y por la repatriación de sus seres queridos con independencia de su participación en actividades ilícitas. Cada una de estas misiones tiene su valor intrínseco, pero las diferencias entre ellas provocan fricciones.

Gran parte de la información en torno a una persona desaparecida transnacional es altamente sensible. Los datos geográficos del lugar donde se encuentran los restos mortales sirven tanto para encontrar a más personas como para investigar las rutas de tráfico ilícito. Los nombres de los familiares de las personas desaparecidas pueden ser explotados por traficantes o secuestradores o utilizados para investigar infracciones migratorias en Estados Unidos. Los datos sobre el ADN de las personas desaparecidas y de sus familiares

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

también pueden emplearse para investigar actividades delictivas. Es por eso por lo que la desconfianza entre los grupos de interesados es grande. Comprender los procesos en juego y los intereses de las distintas partes es el primer paso hacia el progreso y, en esta fase de nuestro estudio, se pueden observar determinadas áreas con margen de mejora.

Cambiar el discurso sobre las personas sin identificar: Muchas suposiciones nublan la percepción de las circunstancias de las personas desaparecidas en la frontera. Una de ellas es que todos son migrantes; muchos lo son, pero no todos. Otra es que todos proceden de México y de países de Centroamérica. Sin embargo, cada vez son más los migrantes de todo el mundo que viajan a Sudamérica para dirigirse al norte, a Estados Unidos. También se da por hecho que los retos para llevar a cabo identificaciones basadas en el ADN son exclusivos de los casos de migrantes desaparecidos. En realidad, muchas de las restricciones sobre el intercambio de información y la financiación se dan en toda clase de investigaciones sobre personas desaparecidas. Recientemente hemos adaptado nuestro lenguaje y hemos pasado de hablar de “migrantes desaparecidos” a hablar de “personas desaparecidas transnacionales” para reflejar con mayor precisión el hecho de que los retos no afectan exclusivamente a los migrantes o a regiones concretas del mundo y para destacar los problemas específicos de las identificaciones transfronterizas entre Estados Unidos y México.

Mejorar la comunicación: Los malentendidos se dan entre las organizaciones, sobre todo cuando hay tantas partes interesadas implicadas. La transparencia es fundamental para implementar las políticas actuales, para la formulación de otras nuevas y para la comunicación entre organizaciones.

Impulsar soluciones creativas: Los resultados más prometedores de nuestro estudio son ideas que podrían mejorar el statu quo. Por ejemplo, muchas de las partes interesadas manifestaron su apoyo general al uso de herramientas de “ADN rápido” para agilizar el análisis de restos humanos sin identificar o de muestras de ADN de “referencia familiar”. Esas herramientas pueden ser utilizadas por personas no expertas, procesar muestras en 90 minutos y son relativamente portátiles. También hubo un fuerte consenso acerca de

la necesidad de disponer de un mecanismo para formar y acreditar a personal ajeno a las fuerzas de seguridad para que puedan tomar muestras de ADN de “referencia familiar”.

Aunque sigue sin estar claro cuáles son los mecanismos normativos precisos para permitir las mejoras, todas las partes interesadas con las que hemos interactuado están de acuerdo en que las prácticas actuales deben reformarse. Esperamos que la creación de un marco normativo basado en las prioridades y en soluciones impulsadas por las partes interesadas pueda ayudar a que se establezcan unas soluciones sostenibles.

Sara H Katsanis

sara.katsanis@northwestern.edu @GxJustice
Profesora adjunta de investigación, Pediatría, Feinberg School of Medicine, Northwestern University; hospital infantil Ann & Robert H Lurie Children's Hospital of Chicago

Diana Madden *dimadden@luriechildrens.org*

Coordinadora de investigación conductual, hospital infantil Ann & Robert H Lurie Children's Hospital of Chicago

Courtney C Siegert *csiegert@txstate.edu*

Doctoranda, departamento de Antropología, Universidad Estatal de Texas

Eduardo Canales

ecsouthtexashumanrights@gmail.com

Fundador y director del South Texas Human Rights Center (Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas)

Kate Spradley *mks@txstate.edu @kate_spradley*

Profesora, departamento de Antropología, Universidad Estatal de Texas

Las opiniones expresadas aquí son las de los autores y no las de las entidades a las que están adscritos o sus fuentes de financiación. Este trabajo ha contado con el apoyo de la Beca R01HG009923 del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano.

1. Aunque el condado de Brooks no está situado a lo largo de la frontera, tiene que lidiar con muchas muertes de migrantes debido a la presencia de un puesto de control de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
2. Spradley M K y Gocha TP (2020) “Migrant deaths along the Texas/Mexico border: a collaborative approach to forensic identification of human remains”, *Forensic Science and Humanitarian Action: Interacting with the Dead and the Living* <https://doi.org/10.1002/9781119482062.ch34>
3. Budowle B, Bus M M, Josseland M A y Peters D L (2020) “A standalone humanitarian DNA identification database system to increase identification of human remains of foreign nationals”, *International Journal of Legal Medicine* 134(6) <https://link.springer.com/article/10.1007/s00414-020-02396-9>

¿Qué pasa con los que se quedan atrás?

Marta Sánchez Dionis y Kate Dearden

Los efectos de la desaparición de personas en viajes migratorios rebotan en sus familias y comunidades.

Las familias de los desaparecidos en un viaje migratorio no saben cómo buscar apoyo gubernamental o se muestran escépticas a hacerlo, y los Estados no han hecho prácticamente nada para abordar esta cuestión. Parece que escasea la comprensión y el reconocimiento sobre los obstáculos a los que se enfrentan las familias que buscan respuestas sobre el destino de sus seres queridos desaparecidos y del impacto que esta situación tiene sobre su bienestar y sus medios de vida.

En diciembre de 2018, 152 Estados ratificaron el Pacto Mundial para la Migración y resolvieron “salvar vidas y establecer esfuerzos internacionales coordinados sobre los migrantes desaparecidos”, “facilitar la comunicación con las familias afectadas” y “establecer canales de coordinación transnacional y designar puntos de contacto para las familias que buscan a migrantes desaparecidos”¹. Pero las familias sufren muchas limitaciones estructurales, que van desde sus propias circunstancias hasta la falta de unos marcos institucionales y normativos adecuados que tengan en cuenta las dinámicas particulares de las muertes y desapariciones en los viajes migratorios. Las limitaciones también se derivan de las complejas interacciones determinadas por la clase, la situación migratoria y el género, mientras que los esfuerzos por localizar a los familiares se han complicado aún más por la pandemia de la COVID-19.

El hermano de Laila desapareció de repente de la vida de su familia y de su comunidad. De la noche a la mañana se perdió todo contacto. “*Llamó desde una playa y dijo que dormiría allí y que partiría al día siguiente*”. Pero nunca volvió a llamar.

En 2020, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) llevó a cabo una investigación en Etiopía, España y el Reino Unido para aprender cual sería la mejor manera de ayudar a los familiares de migrantes desaparecidos en su búsqueda y a la hora de lidiar con las consecuencias de la pérdida². El estudio no es representativo de las experiencias de todas las familias migrantes, pero ofrece una

visión de cómo afecta a las personas la pérdida de un ser querido en los viajes migratorios.

Las experiencias de las familias

Existe un claro desfase entre el enfoque y los conocimientos de los Gobiernos y las necesidades de las familias. Sean del país que sean, todas las familias sienten la incertidumbre de no saber por dónde empezar la búsqueda cuando se percatan de la falta de protocolos o entidades que les puedan ayudar en el proceso. Cuando acuden a las autoridades, estas a menudo suelen responderles que carecen de jurisdicción sobre los casos de migrantes desaparecidos, alegando que la desaparición no tuvo lugar en su territorio.

También existe una clara percepción de que las autoridades abordan los casos de migrantes desaparecidos, ante todo, como una cuestión de lucha contra el tráfico ilícito y la trata de personas, o de control de la inmigración. Se presiona a las familias para que aporten información de los facilitadores y traficantes implicados, y a menudo se les dice que no deberían haber dejado que su familiar emprendiera ese viaje migratorio en un primer momento. Las personas que han sido migrantes, y en especial aquellas cuya situación migratoria es incierta, sienten que acercarse a cualquier autoridad (o incluso a cualquier organización que sospechen que pueda compartir información con las autoridades) pondría comprometer su estancia en el país. Además, a los defensores comunitarios que se ponen en contacto con las autoridades en nombre de las familias se les interroga sobre su relación con ellas y se les acusa de estar vinculados con grupos dedicados al tráfico ilícito de personas o de estar facilitándolo.

Por eso las familias acaban recurriendo sobre todo a canales informales, contactando con amigos y familiares que se encuentran en distintos países y acudiendo a personas que habían viajado con sus parientes, como otros migrantes y facilitadores del tráfico ilícito. En Etiopía, por ejemplo, esos facilitadores —que, a menudo, son también miembros de la comunidad— solían tener predisposición y capacidad para acceder

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

a contactos e información que pudieran establecer o ayudar a determinar el paradero de una persona desaparecida.

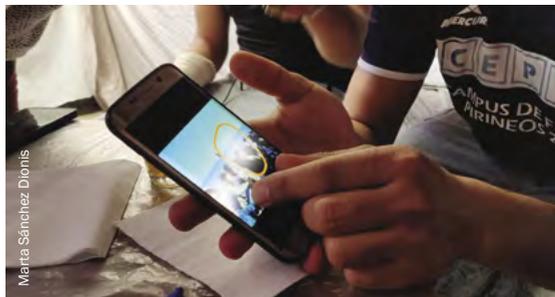
Muchas familias dependen de colectivos comunitarios, de asociaciones y de defensores de migrantes y refugiados que, a menudo, son también migrantes, quienes hablan con fluidez su misma lengua y que conocen profundamente los contextos específicos de las familias y sus comunidades.

En España, Laila recibió el apoyo de una red de defensores de migrantes que ayudan a las familias en su búsqueda. Hablamos con Amira, que está ayudando a Laila a buscar a su hermano, y nos contó que: *“Cuando una familia se pone en contacto conmigo o con alguien del grupo, iniciamos el proceso de búsqueda de información a través de una red de contactos informales, extraoficiales... Los buscamos en los hospitales, luego en los centros de internamiento y en las cárceles... y finalmente en la morgue...”*

Las familias utilizan las redes sociales para la búsqueda, publicando breves descripciones y fotografías de la persona desaparecida, y buscando en grupos de información sobre migrantes desaparecidos o fallecidos. Sin embargo, muchos de ellos no tienen Internet u ordenador en casa, y su única forma de realizar búsquedas en línea es a través de organizaciones comunitarias. El limitado acceso a la tecnología, que ya era un problema, se ha agravado durante la pandemia de la COVID-19 porque muchos puntos de acceso, como cibercafés, centros comunitarios o bibliotecas, han cerrado.

Otras vulnerabilidades añaden dificultades

Emprender una búsqueda suele ser costoso y la falta de recursos financieros es una barrera más. Presentar denuncias, reunirse con las autoridades, viajar a los lugares donde se vio a una persona por última vez, o intentar seguir sus pasos puede conllevar importantes costes, por no hablar de las estafas o extorsiones a cambio de información. Además, en los países de tránsito y destino de migrantes, como España y el Reino Unido, muchas familias tienen empleos inestables y mal pagados y residen en viviendas precarias, lo que limita mucho su capacidad de iniciar una búsqueda. En los lugares de origen de los migrantes, como Etiopía, las familias suelen quedarse sin el apoyo económico que esperaban que les hubiera proporcionado su familiar desaparecido



María Sánchez Dionis

Uno de los participantes en nuestro estudio nos muestra la última foto que tiene de su hermano mayor desaparecido.

si su viaje hubiera tenido éxito. Muchos se enfrentan también a la responsabilidad de saldar una importante deuda en la que incurrió su ser querido para cubrir los gastos del viaje. Esto afecta especialmente a mujeres y a familiares más mayores que se quedan atrás.

La privación de derechos legales es otra vulnerabilidad que condiciona las opciones de las familias. El miedo a iniciar una búsqueda antes de haber conseguido un estatus migratorio favorable suele llevarlos a posponer los esfuerzos y, por tanto, a perder un valioso tiempo para recopilar información o pruebas. Las restricciones de visado también pueden limitar las opciones de búsqueda.

El estudio de la OIM también aporta evidencias de cómo una desaparición puede exacerbar y reforzar formas de desigualdad inveteradas por cuestión de género. Como la mayoría de los migrantes desaparecidos suelen ser hombres, a menudo son sus esposas, hermanas y madres las que impulsan la búsqueda, y las que cargan con una desproporcionada responsabilidad social y financiera. Se espera que al mismo tiempo que ellas continúan con la búsqueda de la persona desaparecida, cuiden de sus hijos y de sus mayores.

Conclusiones

Aunque algunas de las implicaciones políticas del estudio de la OIM son específicas de ese contexto, se hacen eco de los hallazgos y recomendaciones anteriores del Proyecto Migrantes Desaparecidos y de otras organizaciones, como el CICR³.

Todos los esfuerzos para ayudar a las personas que tienen familiares migrantes desaparecidos deberían admitir la experiencia, el conocimiento y el bienestar de las familias y situarlos en el centro de todo. Eso significa

abordar sus necesidades en vez de centrarse en los aspectos relacionados con la seguridad y la delincuencia en torno a cómo desapareció la persona. La definición de familia en los casos de migrantes desaparecidos debe ser flexible, teniendo en cuenta la dependencia emocional, y estar en consonancia con los contextos culturales y otros.

Los colectivos comunitarios y los defensores locales, las ONG, las organizaciones civiles de carácter social generalistas y otras organizaciones que apoyan a las familias de migrantes desaparecidos son de vital importancia en ausencia de unas leyes, políticas y salvaguardas adecuadas que permitan a las personas acercarse a las autoridades y recibir su ayuda. Se podría formar un grupo de trabajo con estos actores relevantes y con las familias de los migrantes desaparecidos en cada país para apoyar tanto a las familias como a los organismos gubernamentales pertinentes a compartir la información. Aunque esta cooperación podría comenzar a nivel nacional, el objetivo debería ser crear redes con otros actores a nivel regional y más allá para compartir las mejores prácticas y para ayudar a resolver casos concretos de personas desaparecidas.

El tema de los migrantes desaparecidos no se aborda adecuadamente ni en las políticas ni en las leyes. Un punto de partida podría ser que cada país creara un protocolo que permitiera un enfoque uniforme para la implementación de las disposiciones legales

nacionales e internacionales existentes que protegiera los derechos de las familias de los migrantes desaparecidos. Ese protocolo debería incluir instrucciones para que la recopilación, la conservación y el intercambio de información sea eficiente, y para la colaboración intersectorial en los casos de personas desaparecidas. El protocolo serviría de guía (tanto para las familias como para los colectivos comunitarios, las organizaciones y los organismos públicos que tratan de ayudarles) sobre cómo buscar a su ser querido y cómo acceder a la ayuda.

Marta Sánchez Dionis

msanchez@iom.int @msdionis

Responsable de proyectos, OIM, Proyecto Migrantes Desaparecidos

Kate Dearden *kdearden@iom.int*

Responsable de proyectos, OIM, Proyecto Migrantes Desaparecidos

1. www.iom.int/global-compact-migration
2. Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM www.missingmigrants.iom.int El equipo de investigación estaba compuesto por Gabriella Sánchez, Instituto Danés de Estudios Internacionales; Carlos Arce, Universidad de Córdoba; Tekalign Ayalew Mengiste, Universidad de Adís Abeba; y Samuel Okyere, Universidad de Bristol.
3. Por ejemplo, en el Plan de Acción de Cinco Puntos de la OIM *Fatal Journeys* Volumen 2 (2016) https://publications.iom.int/fr/system/files/fataljourneys_vol2.pdf y en el borrador "Principles on stakeholder interaction with families of missing migrants" (principios sobre la interacción de las partes interesadas con los familiares de migrantes desaparecidos) que está preparando el Proyecto sobre Personas Desaparecidas del CICR www.icrc.org/en/draft-principles-stakeholder-interaction-families-missing-migrants

La búsqueda de la verdad, la justicia y el pasar página durante la pandemia

Danai Angeli

La pandemia ha aumentado los retos de las familias migrantes que pasaban el duelo por el fallecimiento o la desaparición de sus seres queridos. Pero hay maneras prácticas de ayudarles.

Las familias que pasan un duelo tienen derecho a la verdad, a la justicia y a pasar página. Estos derechos fundamentales están reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos, también amparados por el derecho a la dignidad, el derecho a la vida y el derecho a la vida familiar y privada¹. Como mínimo, los Estados deben garantizar que las familias migrantes en proceso de duelo estén informadas sobre la suerte y el paradero de su familiar desaparecido o fallecido, de

reclamar y repatriar sus restos mortales y de darles sepultura para que descansen en paz (Declaración Mitilini de 2018²).

Las respuestas nacionales a la pandemia de la COVID-19 afectaron gravemente a la capacidad de las familias migrantes en proceso de duelo de ejercer esos derechos. Las medidas de contención para detener la propagación del virus a menudo no tuvieron en consideración las necesidades específicas de dichas familias y han dado lugar a más barreras legales y

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

prácticas. A partir de las experiencias de migrantes de ocho países (Grecia, Alemania, Francia, Italia, México, Sudáfrica, EE. UU. y Zimbabue) durante la pandemia, tratamos de demostrar que hay formas prácticas y realistas para que los Estados —de acuerdo con sus obligaciones internacionales— puedan ayudar a las familias migrantes que están en duelo sin menoscabar las respuestas de salud pública³.

Entender la causa del fallecimiento

La incertidumbre constante sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento presunto o confirmado de un ser querido puede pesar mucho en la familia. El derecho internacional de los derechos humanos reconoce que esa angustia y dolor emocional podrían llegar a constituir un trato inhumano y degradante. Por tanto, los Estados tienen la obligación de investigar las muertes sospechosas, hacer rendir cuentas a los responsables y mantener informada a la familia.

La naturaleza aparentemente misteriosa del nuevo virus y la difusión de teorías conspirativas han aumentado la incertidumbre entre las comunidades de migrantes. Para empezar, no se dispone en general de datos oficiales sobre la tasa de transmisión y mortalidad de la COVID-19 entre los migrantes. Muchos Estados, incluidos la mayoría de los europeos y Estados Unidos, no publican las estadísticas de COVID-19 desglosadas por nacionalidad, ni informan por separado sobre la situación de los migrantes.

La incertidumbre se ve aún más exacerbada por las diferentes formas de verificar los fallecimientos por COVID-19 y también por la poca información que se comparte con los parientes más cercanos. En algunos países (como Alemania), la causa del fallecimiento es un apartado confidencial del certificado de defunción que se transmite a la oficina de estadística correspondiente, pero que no se pone a disposición de los parientes debido a las leyes de protección de datos personales. En Nueva York, los certificados de defunción en los que la COVID-19 figuraba como causa del fallecimiento eran recibidos con desconfianza por muchas familias, especialmente cuando la persona gozaba previamente de buena salud y en los casos en los que no se tenía acceso al historial médico o a cualquier otra información sobre la causa de la defunción. Para las familias que se encuentran en el extranjero, puede ser aún más difícil obtener información de las circunstancias

del fallecimiento debido a las restricciones de viaje y sobre quién tiene derecho a acceder a la documentación pertinente.

Los migrantes —en especial los indocumentados— lo han tenido más difícil para acceder a la asistencia sanitaria por diversas razones desde el estallido de la pandemia. Como consecuencia, un número indeterminado de casos de COVID-19 y otras afecciones médicas no han sido tratadas, y se han quedado sin diagnosticar una cifra desconocida de defunciones extrahospitalarias. La publicación de datos oficiales y transparentes sobre la tasa de transmisión y mortalidad entre los migrantes contribuiría a acabar con las sospechas y especulaciones, y ayudaría a las familias que buscan la verdad y piden justicia y responsabilidades.

En México, por ejemplo, las autoridades publican cada día datos completos y abiertos sobre los casos de COVID-19, las hospitalizaciones y los fallecimientos. Además del seguimiento de variables como la edad, el sexo, la ubicación y las comorbilidades, México también incluye información sobre la nacionalidad, la situación migratoria y el país de partida. Además, ha estado publicando informes epidemiológicos semanales sobre la COVID-19 entre los migrantes, en los que se incluía el número total de casos sospechosos y confirmados, los países de origen, las hospitalizaciones y las defunciones. Aunque las estadísticas oficiales no dan cuenta del número total de fallecidos (dado que México es uno de los países que menos test hace), el Gobierno ha dado un importante paso al poner los datos oficiales a disposición del público en un formato abierto y descargable.

Los procedimientos para solicitar certificados de defunción y ampliar la información sobre las circunstancias de un fallecimiento deberían ser accesibles y hacerse cargo de las dificultades adicionales a las que tienen que enfrentarse las familias en duelo que se encuentran en el extranjero. Las organizaciones civiles de carácter social, las asociaciones de migrantes y los grupos de apoyo pueden ayudar a las familias en proceso de duelo a realizar los trámites administrativos; es esencial que estos agentes se mantengan operativos y accesibles durante toda la pandemia.

Es necesario aumentar la concienciación no solo hablando de cómo contener la propagación del virus, sino también proporcionando información completa y accesible sobre la

asistencia sanitaria, las perspectivas en caso de diagnóstico positivo y las razones de las medidas de contención que afectan directamente a las comunidades de migrantes. Contar con las comunidades de refugiados y migrantes, las organizaciones de base y otros grupos de apoyo para compartir esta información podría ser una forma efectiva de superar la desconfianza profundamente arraigada hacia las autoridades.

Darles sepultura para que descansen en paz

El derecho internacional reconoce el derecho humano a enterrar y honrar a los familiares fallecidos. Garantizar el respeto por las preferencias y los rituales funerarios se ha vuelto especialmente problemático durante la pandemia, al haber tenido que imponerse limitaciones con respecto a la asistencia y la manipulación de los cadáveres. La pandemia también ha exacerbado las limitaciones financieras y temporales. La creciente falta de espacio en las morgues ha acelerado los procedimientos funerarios, lo que ha limitado las opciones de las familias sin recursos que necesitan más tiempo para recaudar fondos y ha restringido su capacidad para trasladar los restos mortales a otro lugar. Las restricciones a los viajes internacionales fueron barreras adicionales. La situación se complica más cuando los restos mortales no están identificados o cuando la familia tiene dudas sobre la identidad del difunto.

Los protocolos forenses deberían abordar expresamente la forma en que deben recopilarse y conservarse los datos post mortem y ante mortem relevantes para una futura identificación. Un ejemplo claro ha sido el de los protocolos forenses COVID-19 de México para el tratamiento de los restos mortales no identificados. Estos protocolos describen cómo deberían tratarse los cadáveres y cómo se han de recopilar y almacenar los datos en vista de la pandemia. También prohíben la incineración de restos mortales no identificados. En caso de que sea necesario realizar una gestión masiva, todos los cadáveres no reclamados —identificados o no— han de ser sepultados en fosas individuales para restos COVID-19, y la fiscalía y los servicios forenses deben registrar dónde se han enterrado estos.

La ayuda financiera que los Estados ofrecen para paliar los efectos de la pandemia podría incluir ayuda para los gastos funerarios. Un paso importante en esta dirección lo ha dado el programa de

ayudas a la sepultura de la ciudad de Nueva York, al que pueden acogerse las familias migrantes, incluidas las indocumentadas.

El establecimiento de un visado nacional con fines funerarios o de identificación sería una forma efectiva y práctica de ayudar a las familias migrantes en proceso de duelo que viven en el extranjero. En Alemania, por ejemplo, el visado familiar —que se ha mantenido a lo largo de la pandemia— permite a los familiares, e incluso a miembros de la familia extensa, visitar el país de forma temporal para asistir a un funeral.

Los protocolos de los servicios hospitalarios y funerarios deberían ser flexibles para dar cabida a los ritos funerarios siempre que sea posible. En Alemania, aunque los parientes no pueden llevarse el cadáver a casa, sí se les permite, en determinadas circunstancias o lugares, realizar los rituales funerarios en la habitación del hospital. En Zimbabue, se pone a disposición de las familias (y otros miembros de la comunidad) que no puedan asistir al funeral en persona, tienen a su disposición su retransmisión en directo.

La repatriación de los restos mortales

Para las familias en proceso de duelo, es fundamental poder llevar a casa al familiar fallecido para cerrar esa etapa. Incluso antes de la pandemia, la repatriación de restos mortales era un procedimiento complejo y costoso. Desde la pandemia, estos se han vuelto más costosos aún y más burocráticos, ya que muchos Estados han establecido restricciones adicionales para evitar contagios. Al mismo tiempo, la suspensión de los servicios consulares en muchos países, sumado a las restricciones para viajar, se lo ha puesto más difícil a las familias que viven en el extranjero. No es raro, por tanto, que estas familias no opten por la repatriación o encuentren formas poco ortodoxas de llevarla a cabo. Como en Grecia, donde muchas optan por repatriar solo los huesos, que se ponen a disposición de los familiares entre tres y cinco años después del entierro. En Nueva York, las familias mexicanas elegirían incinerar al familiar, en contra de sus creencias, ya que la repatriación de esos restos es más fácil. Todo esto puede suponer un gran peso para las familias supervivientes. Es urgente mejorar las normativas nacionales y la coordinación internacional para facilitar los procedimientos de repatriación.

No se puede dejar solas a las familias migrantes durante el duelo. Prestar una

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

asistencia adecuada no es solo un deber moral, sino también una obligación legal basada en normas de derechos humanos consolidadas.

Danai Angeli Danai.angeli@bilkent.edu.tr

Profesora adjunta, Universidad de Bilkent; Asesora, Last Rights Project

1. Last Rights (2019) Extended Legal Statement and Commentary. bit.ly/Last-Rights-2019-legal-statement

2. La Declaración Mitilini para el tratamiento digno de todas las personas desaparecidas y fallecidas y sus familias como consecuencia de los viajes migratorios, adoptada el 11 de mayo de 2018 <https://docs.google.com/document/d/1dNiarOI0WkDTvE7cuOqC9x8v3vFTKpCxp80jsXYHTXc/view>
3. Last Rights (2021) *Every Body Counts: Death, Covid-19 and Migration. Understanding the Consequences of Pandemic Measures on Migrant Families* bit.ly/Last-Rights-2021-EverybodyCounts

Los migrantes desaparecidos y sus familias: un llamamiento a una mayor cooperación internacional

Sylvie van Lammeren y Florian von König

Para que los actores puedan localizar a los migrantes desaparecidos y asistir mejor a sus familias es fundamental reforzar el compromiso con la coordinación y la colaboración. Las nuevas iniciativas muestran el camino.

La búsqueda de migrantes desaparecidos es una empresa transnacional, incluso transcontinental, que requiere de la cooperación de un amplio abanico de actores¹. Carecíamos de un marco intergubernamental mundial para ella, pero eso cambió con la inclusión (a instancias del CICR) del Objetivo 8 en el Pacto Mundial para la Migración. Más de 150 Estados se comprometieron a establecer esfuerzos coordinados de cara al problema de los migrantes desaparecidos, incluyendo la creación de unos estándares para la recopilación y el intercambio de información, y estableciendo una coordinación transnacional para llevar a cabo la identificación y la comunicación con las familias.

Sin embargo, para que los compromisos políticos se traduzcan en acciones se necesita información para cuantificar y analizar el problema. Se trata de un reto notorio, ya que es difícil conseguir cifras fiables sobre los migrantes desaparecidos debido, entre otras cosas, a la naturaleza a menudo clandestina de la migración. Además, la percepción del problema suele estar distorsionada, lo que refleja que tanto la información aportada por los medios de comunicación como la atención pública se centran en el contexto mediterráneo o centroamericano, y obvian la gran extensión de los flujos de migración entre países africanos, asiáticos o de Oriente Medio. Iniciativas como el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) o el Observatorio Africano para la Migración y el Desarrollo (recientemente creado por la Unión Africana)

son, por tanto, fundamentales para crear un punto de partida para la política y para ofrecer el muy necesario análisis.

Al mismo tiempo, se necesitan marcos concretos para coordinar los esfuerzos de los actores relevantes a lo largo de las rutas migratorias para prevenir² y resolver los casos de migrantes desaparecidos, y eso incluiría la recopilación, compilación, intercambio y comparación de información procedente de diferentes fuentes. Examinar las prácticas existentes y ofrecer unas directrices sobre cómo lograrlo es algo que el Proyecto del CICR sobre Personas Desaparecidas³ persigue desde su lanzamiento en 2018.

Reunir a las partes interesadas

Basándose en su dilatada experiencia en este ámbito, el CICR creó el Proyecto sobre Personas Desaparecidas para crear una comunidad mundial de partes interesadas con el fin de desarrollar conjuntamente unas directrices que mejorasen la respuesta⁴. En los debates que se produjeron en un taller de expertos⁵ celebrado en 2019, unos 60 profesionales que representaban a Estados, organizaciones y familias de migrantes desaparecidos confirmaron algunos de los principales obstáculos: la ausencia de prácticas y normas establecidas en el ámbito de la recopilación de información, los retos para proteger los datos personales sensibles y las deficientes prácticas forenses. Los participantes también hicieron hincapié en los retos específicos a los que se enfrentan las familias de las personas desaparecidas, como la dificultad para acceder



Fragiskia Megaloudi

El personal del CICR atiende una solicitud de localización de una mujer somalí. Isla de Leros, Grecia.

a la información que tiene otro país, la falta de confianza en las autoridades estatales y las barreras burocráticas, legales y lingüísticas. En vista de los recursos y la experiencia que aportan los agentes no estatales y de la importancia de hacer partícipes a las familias en la búsqueda, hubo un amplio consenso en cuanto a que un modelo de coordinación que contara con múltiples interesados tendría más probabilidades de obtener resultados.

Para transformar estas conclusiones en acciones, los participantes propusieron que el Proyecto sobre Personas Desaparecidas desarrollara tres puntos específicos. En primer lugar, hemos trabajado en un proyecto de dataset (o conjunto mínimo de datos) para armonizar la información relevante para la búsqueda de migrantes desaparecidos⁶. Partiendo de las prácticas existentes (en vez de pretender reemplazarlas), que van desde los formularios de la Interpol hasta los utilizados por el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, este documento contiene preguntas tipo que abarcan información como los datos personales del migrante desaparecido, sus características físicas y las circunstancias de su desaparición. Un segundo punto es la publicación de los Principios sobre interacción de las partes interesadas con los familiares de migrantes desaparecidos⁷. En ellos se abordan los citados retos a los que se enfrentan las familias y se ofrecen unas directrices para los actores pertinentes acerca de cómo relacionarse con ellas, resaltando el papel central de las familias en cualquier proceso de búsqueda.

El tercer documento, y podría decirse que el más complejo, es un conjunto de

Directrices sobre mecanismos de coordinación e intercambio de información para la búsqueda de migrantes desaparecidos⁸. Estos mecanismos —diseñados para esclarecer la suerte y el paradero de los migrantes desaparecidos, tanto vivos como muertos— comprenden una red flexible formada por diferentes tipos de partes interesadas que cooperan en el intercambio y el análisis de información a lo largo de un corredor migratorio y cuyas funciones respectivas e importancia relativa pueden variar según el contexto. Nuestro documento establece cuáles serían los elementos clave de ese mecanismo: un mismo concepto de las funciones y responsabilidades; un enfoque coordinado de la gestión de la información que puede incluir herramientas interfuncionales; vías de intercambio de información claramente definidas; y acuerdos legales que sustenten todo lo anterior. En el borrador de las directrices también se describen los pasos preliminares que hay que dar a nivel nacional, como la armonización y centralización de los datos recopilados por los distintos actores. Debido a lo delicado del contexto migratorio, el documento subraya la necesidad de proteger activamente los datos personales⁹.

En consonancia con el compromiso del proyecto de basar las recomendaciones, siempre que sea posible, en las prácticas existentes, este documento parte de un conjunto de directrices que actualmente ha promulgado la Conferencia Regional sobre Migración en las Américas. Se trata del primer marco intergubernamental regional que establece unas modalidades concretas de cooperación para la cuestión de los migrantes desaparecidos. Del mismo modo, las Directrices

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

ilustran recomendaciones específicas que hacen referencia a las prácticas actuales.

¿Qué más se necesita?

Los debates que hemos mantenido con expertos y profesionales no dejan lugar a dudas: es necesario reforzar y coordinar los esfuerzos para implementar el Objetivo 8. Aunque algunos países están anunciando medidas que ellos han adoptado a nivel interno — como el refuerzo de los sistemas forenses nacionales—, estos esfuerzos están condenados a ser insuficientes sin una acción internacional coordinada. Urge una acción más determinada y coordinada por parte de los Gobiernos.

Ante la falta de una acción decisiva por parte de los Gobiernos, la sociedad civil y otros actores no estatales han dado un paso al frente para llenar este vacío en muchas partes del mundo. Pero a menudo su acción tiene un alcance limitado y carece de recursos y del apoyo de las autoridades competentes. Por tanto, estamos convencidos de que es necesario que agentes internacionales como el CICR desempeñen un papel más sólido, con el fin de ayudar a los Estados a asumir sus compromisos en conjunto con los esfuerzos mencionados. Es posible que dicho papel deba ir más allá de funciones como coordinar o prestar asesoramiento técnico, y ofrecer una ayuda concreta —por ejemplo, con relación a la gestión de datos e información— que permita la cooperación entre los Estados y otros. Como ejemplo, el CICR está desarrollando actualmente una plataforma digital que permitirá a las autoridades y a otros agentes compartir y gestionar de forma segura datos e información sobre personas desaparecidas, tanto a nivel nacional como transnacional.

Y es que el desarrollo de metodologías y procesos de investigación e identificación que puedan utilizar esta información de forma eficaz y que se adapten al amplio abanico de contextos y recursos disponibles sigue siendo un reto importante¹⁰. Sin embargo, los esfuerzos e inversiones a largo plazo para garantizar la cooperación y el

intercambio de información a lo largo de las rutas migratorias serán fundamentales si queremos dar respuestas a las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos.

Sylvie van Lammeren svanlammeren@icrc.org
Asesora, Proyecto sobre Personas Desaparecidas,
Comité Internacional de la Cruz Roja

Florian von König fvonkoenig@icrc.org
Jefe adjunto, Proyecto sobre Personas
Desaparecidas, Comité Internacional de la Cruz Roja

1. No existe una definición jurídica internacional de “migrantes desaparecidos”. El CICR entiende que las personas desaparecidas son individuos cuyo paradero es desconocido para sus familiares o que, basándose en información fiable, han sido dados por desaparecidos como consecuencia de conflictos armados u otras situaciones de violencia, desastres o migración.
2. Si desea consultar las recomendaciones políticas del CICR para la prevención de la desaparición de migrantes, vea CICR (2017) *Missing Migrants and their Families*, Recommendation 1 bit.ly/ICRC-missing-migrants-recommendations-2017
3. www.icrc.org/en/publication/4375-missing-persons-project
4. A través de una plataforma virtual, el Proyecto sobre Personas Desaparecidas reúne a expertos, representantes de las familias y otras partes interesadas para fomentar el debate, crear consenso sobre las mejores prácticas, promover las normas técnicas existentes y desarrollar otras nuevas cuando sea necesario. Si desea unirse a esta comunidad mundial de intercambio de prácticas, le rogamos que se ponga en contacto con uno de los autores.
5. Organizado conjuntamente por el CICR, el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM y el Equipo Argentino de Antropología Forense. Véase CICR (2020) *Clarifying the fate and whereabouts of missing migrants: Exchanging information along migratory routes* bit.ly/ICRC-clarifying-fate-2019
6. Borrador del conjunto mínimo de datos abierto para su consulta pública hasta el 15 de abril de 2021: www.icrc.org/es/document/conjunto-minimo-de-datos-para-la-busqueda-de-migrantes-desaparecidos
7. Borrador abierto para su consulta pública hasta el 15 de abril de 2021: www.icrc.org/en/draft-principles-stakeholder-interaction-families-missing-migrants
8. Borrador abierto para su consulta pública hasta el 31 de mayo de 2021: www.icrc.org/en/document/guidelines-coordination-missing-migrants
9. Véase CICR (2020) *Handbook on Data Protection in Humanitarian Action*, 2.ª Edición bit.ly/ICRC-Handbook-data-protection-2nd-edition
10. Puede verse un ejemplo de cómo llevar a cabo esta labor en: CICR (2020) *The Missing and Deceased Migrants and their Families Program in South Africa and Zimbabwe* bit.ly/ICRC-Southern-Africa-2020

Consejo Internacional Editorial de RMF

Los miembros del consejo actúan a título personal y no representan necesariamente a sus instituciones.

Lina Abirafeh

Lebanese American University

Nina M Birkeland

Norwegian Refugee Council

Jeff Crisp

Independent consultant

Matthew Gibney

Refugee Studies Centre

Rachel Hastie

Oxfam

Lucy W Kiama

HIAS Kenya

Khalid Koser

GCERF

Erin Mooney

UN Protection Capacity/ProCap

Kathrine Starup

Danish Refugee Council

Marcel van Maastrigt

UNHCR

Marcia Vera Espinoza

Queen Mary University of London

Richard Williams

Independent consultant

Pérdida, esperanza, acción

Muchos migrantes que intentan cruzar el Mediterráneo no sobreviven al viaje. Otros simplemente desaparecen. Por cada migrante ausente, hay una familia que anhela cerrar esa etapa y pasar página.

“No hay evento o día festivo en que no pensemos en él. Incluso cuando voy caminando por la calle me parece ver siempre su sombra”.

La Terre Pour Tous es una organización activista con sede en Túnez que trabaja para abordar la apremiante situación de los migrantes desaparecidos y las injusticias a las que se enfrentan sus familias. Trabaja principalmente a través del activismo legal y de campañas de concienciación que buscan cambiar las políticas para que se permita la identificación de los cuerpos recuperados.

La Terre también ha trabajado con estudiantes de la Universidad de Michigan para visualizar los relatos de las familias de migrantes desaparecidos en un intento de humanizarlos y exigir así cambios en las políticas.

Visite la exposición en línea en <https://missingmigrants.org>.

Imed Soltani (association_laterrepourtout@yahoo.com) La Terre Pour Tous, Túnez; Odessa Gonzalez Benson (odessagb@umich.edu) y Vadim Besprozvany (vbesproz@umich.edu), con los coautores Elena Godin, Antonio Siciliano y Bader AlBader, Universidad de Michigan

Lea más sobre los migrantes desaparecidos en este número de RMF.



Diseño del cartel: Malcolm Maturin (estudiante de la Universidad de Michigan)



SOLO DISTRIBUCIÓN GRATUITA

www.fmreview.org/es/edicion66

